

UNIVERSIDAD DE PANAMA
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS PENALES

**LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
COMO MEDIO DE CONTROL DE LAS RESOLUCIONES PENALES**

ROSAURA CONCEPCION MENCHACA

TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA
OPTAR AL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS PENALES

PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA

Viernes, 27 de junio de 2008.

Dedicatoria

El presente trabajo de graduación, se la dedico a mis hijos; Deizired, Kril, Luicito, Mariana, quienes han sido la fortaleza de mi vida, la fuente de inspiración. A mi esposo Luis E. Suárez, por su ayuda, motivación y cooperación. A todos aquellos que de alguna forma contribuyeron a que esta meta se me hiciera realidad.

19 MAY 2010

V

Agradecimiento.

"LE PEDI A DIOS QUE ME DIERA TODO
PARA DISFRUTAR DE LA VIDA. Y EL ME
DIO LA VIDA PARA DISFRUTAR DE TODO".

"NI LA GLORIA, NI EL ÉXITO SE CONSIGUEN
FACILMENTE, SE LOGRAN CON SACRIFICIO,
TENACIDAD, EMPEÑO, DEDICACIÓN Y UNA
BUENA ELECCIÓN DE LO QUE SE DESEA
SER EN LA VIDA.

LE DOY GRACIAS A DIOS, PORQUE EL HA
SIDO MI GUIA, MI LUZ EN TODO LO QUE HAGO.

Allegria de Autor

INDICE GENERAL

	Páginas
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	v
Índice General.....	vii
Introducción.....	viii

CAPITULO I

MARCO METODOLOGICO

1. OBJETIVOS	2
1.1. Generales	
1.2. Específicos	
2. Tipo de Investigación	3
3. Sujetos o Fuentes de Investigación	
4. Variables	4
5. Descripción de los Instrumentos	5

CAPITULO II

MARCO TEORICO

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL ORIGEN DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES	9
2. CONCEPTO	17
3. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS	24
4. NATURALEZA JURÍDICA	26
5. REQUISITOS DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN NUESTRO DERECHO POSITIVO.	35
5.1. Demanda	52
5.2. Jueces o Magistrados Competentes	60
5.3. Orden de Hacer o de no Hacer	64
5.4. Admisión o In admisión	66
5.4.1. Análisis critico jurisprudencial	69
5.5. Contra Decisiones Jurisprudenciales	78
5.5.1. Requisitos	79
6. FENÓMENOS PARA LA INTERPRETACIÓN	81
6.1. Termino para la decisión	95
7. SENTENCIAS DE AMPARO	
7.1. Recursos	95
7.1.1. Apelación	96
7.1.2. Reconsideración	102

8. PROCESO PENAL	103
8.1. Etapas	104
8.2. Principios Rectores	105
8.3. Ventajas y Desventajas	108
9. DIFERENCIA ENTRE EL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EL HABEAS CORPUS.	110
10. DERECHO COMPARADO (MÉXICO)	116
10.1. Relación del Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales y el Derecho Penal Panameño.	
CAPITULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN	
1- Entrevista	125
2- Estadísticas	127
3- Encuesta	139
CAPITULO IV. APORTE FINAL	
1. CONCLUSIONES	141
2. . RECOMENDACIONES	143
3. BIBLIOGRAFÍAS	146
4. ANEXO	152
4.1. JURISPRUDENCIAS	153-

INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos o fundamentales se reconocen y establecen para hacerse valer no sólo frente al Estado sino en la vida diaria de los hombres y mujeres en sociedad, lo que implica por ende el respeto de éstos, tanto por parte de las autoridades como de los demás miembros o integrantes de la comunidad. De allí que si los derechos así establecidos o previstos en la Constitución, son menoscabados o infringidos, pueda quien sea el objeto de tal violación, poder exigir la tutela o protección de su derecho, ya sea que la actuación infractora provenga del Estado o de un particular.

El contar con un mecanismo de protección a través del cual se hace valer estos derechos fundamentales es lo que se ha planteado a través de los años. Nosotros aportaremos con el fin de desarrollar "la eficacia de la **acción de amparo de Garantías Constitucionales como medio de control de las resoluciones penales**, como mecanismo de defensa, ya que si es una acción que protege derechos fundamentales cuando estos son vulnerados, y el juez o Tribunal correspondiente debe dar respuesta inmediata porque se utiliza como ultima instancia a pesar que nuestro código de procedimiento lo anuncia en la esfera civil, pues también se da en la esfera penal.

El Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 50 de nuestra constitución Nacional, es una institución de garantías,

establecida con el propósito de obtener la revocatoria de una orden de hacer o no hacer, expedida por cualquier funcionario, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra y que éste será sumario y será de competencia de los tribunales judiciales, teniendo como principal misión proteger los derechos y garantías a favor de los panameños y extranjeros residentes o transeúntes por el territorio nacional.

ROSAURA CONCEPCIÓN

2007-01-27

CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO

1. OBJETIVOS

1.1. Generales

La acción de Amparo de Garantías Constitucionales como medio de control de las resoluciones Penales, Su aplicación, tomando en cuenta las nuevas tendencias de la Corte Suprema de Justicia.

Conocer los diferentes criterios jurisprudenciales referente a la acción de amparo de Garantías Constitucionales.

Examinar las nuevas tendencias jurisprudenciales de nuestra Corporación de Justicia en Materia Penal.

Contribuir en el conocimiento actualizado de la Doctrina Jurisprudencial para orientar el criterio jurídico del juez en cuanto a la aplicación del Recurso de amparo como medio de Control de las resoluciones penales.

1.2. Específicos

Conocer La acción de Amparo de Garantías Constitucionales como medio de control de las resoluciones Penales, en materia penal tomando en cuenta el momento oportuno para hacerlo.

Conocer la doctrina jurisprudencial de la Corte suprema de Justicia como criterio de orientación al momento de invocar la garantía violada.

Contribuir en el conocimiento actualizado de la Doctrina jurisprudencial para orientar el criterio jurídico del juez en la aplicación de la norma sustantiva.

Tomar en consideración la doctrina jurisprudencial de la Corte suprema de Justicia, como un criterio de orientación para el juez al momento de proferir el fallo.

Analizar el criterio seguido por la jurisprudencia en cuanto a la aplicación de las nuevas corrientes, en miras de que el Recurso sea resuelto en menos tiempo posible.

2. Tipo de Investigación

Podemos indicar qué es explicativa, descriptiva como tipo de investigación, ya que se basa de manera descriptiva, porque describe los dos fenómenos variables.

Decimos pues, explicativa, porque hace referencia en cuanto a la investigación y se encarga de estudiar los fenómenos de estudio abarcados que se dan en dos o más variables correlacionadas.

3. Sujetos o Fuentes de Investigación.

Hemos elegido este tema, por lo complejo que se nos hace, y como funcionaria de la Policía Técnica Judicial, ahora Dirección de Investigación Judicial, nos manejamos en el campo de la investigación Penal en donde si conocemos de la figura del Habeas Corpus, más no la del Recurso de Amparo, es por ello que decidí este tema con la finalidad de profundizar y adquirir un mejor conocimiento. Nuestra inquietud fue mayor aún, debido a

que en la medida en que íbamos investigando, veíamos muy pocos recurso de amparo en materia penal. Nuestro Código de procedimiento mencionan que deben ser resueltos por Tribunales Civiles, evidenciando que es necesaria una Corte Constitucional, para que los casos sean resueltos de manera expedita.

Es necesario una reforma constitucional que establezca un Tribunal o Corte Constitucional que tenga a su cargo el control concentrado de la constitucionalidad en forma independiente y separado de los demás órganos jurisdiccionales existentes en nuestro país. De forma tal, que esta Corte Constitucional conozca de los Habeas Corpus, las Acciones de Inconstitucionalidad las Advertencia de inconstitucionalidad, las consultas de inconstitucionalidad, las objeciones de inexigibilidad Constitucional y de los Amparos Constitucionales.

4. Variables

- ◆ Definición Conceptual: podemos indicar que el amparo es una institución de garantías jurisdiccional constitucional originaria de México, cuya creación data de mediados del pasado siglo. Sostienen algunos autores que se inspiró en el *judicial review* norteamericano. Qué solo procede contra una orden concreta de hacer o de no hacer emitida por cualquier autoridad pública contra persona (natural o jurídica, nacional o extranjera).
- ◆ Definición Operacional: Solo puede ser interpuesta por violación de derechos constitucionales. No procede por la infracción de derechos

contenidos en leyes ni en tratados internacionales, que en Panamá solo por fortuna tiene valor la ley ordinaria. El amparo es así, **una garantía jurisdiccional que sólo protege derechos establecidos en la Constitución. Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Título III de nuestra Constitución.**

- ♦ **Definición Instrumental:** La encuesta nos determinó, que es un recurso que se interpone, luego de haberse agotado los recursos extraordinarios; que debe de ser admitida sin demora por el tribunal competente.

5. Descripción de los Instrumentos

Utilizamos cuatro preguntas, para realizar la encuesta, y obtener respuesta a las interrogantes que tuvimos, en las formalidades del Amparo, como garantía en el procedimiento penal y la gran mayoría quedaron hasta asombrados cuando hablábamos de la acción de amparo como medio de impugnación de las resoluciones penales.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL ORIGEN DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Resulta difícil determinar la fecha exacta en que esta figura surgió en el mundo jurídico.

Algunos autores la remontan al siglo XIII, pero no es sino con la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y con el Bill of Rights de la constitución norteamericana, que los pueblos comenzaron a adoptar instrumentos jurídicos que contemplan los derechos fundamentales de los individuos que brindaban la oportunidad a estos para poder enfrentarse a las autoridades de aquellos tiempos.

De esta manera, los derechos individuales adquirieron un rango constitucional al ser plasmados en las primeras constituciones.

A lo largo de su evolución histórico- jurídica, el amparo, antes de ser conocido como tal, estuvo precedido de aportes jurídicos muy relevantes, como lo fueron los llamados “fueros juzgados” españoles, en el cual se encontraban recogidas disposiciones de derecho público y privado.

También la constitución de Cadiz, de 1812, estableció normas que le brindaban derechos a los individuos frente a las arbitrariedades cometidas por la autoridad pública.

También vinieron a hacer fuertes aportes jurídicos en el nacimiento del amparo las denominadas “manifestación de las normas”, que eran el mecanismo por medio del cual se salvaguardaba la libertad personal, y el “jurisfirma”, que

velaba por que las leyes antes de su promulgación, así como el consejo de Estado, no fueran violadas, siendo ambos procesos "un medio de control de los derechos públicos individuales frente a los actos de autoridad" .

Por su parte, la constitución de Francia de 1958, que creo un organismo denominado Consejo Constitucional, el cual tenía la función de examinar las leyes vinieron a constituirse como un pre-control constitucional.

En América, por su parte, podríamos decir que esta institución se estableció con la Constitución federal de los Estados Unidos, con la cual comenzaron a aparecer medios destinados a salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos. Así tenemos el Habeas Corpus, de tradición inglesa, el cual le brindaba protección a los hombres cuando fuesen privados de su libertad en forma arbitraria.

Esta también el denominado "juicio constitucional", al cual pueden acudir aquellos individuos que se vean afectados no solo por algún acto emitido por las autoridades, violatorio de la Constitución, sino también de las leyes federales y los tratados internacionales. En la legislación norteamericana tenemos otros recursos; así, por ejemplo, el writ of certiorari, el cual es aplicado a aquellos casos en que se presentan la necesidad de reparar un daño ocasionado a un individuo por la comisión de fallas en el procedimiento, generalmente cuando se trate de procedimiento provenientes de un tribunal inferior.

En Latinoamérica sirvió de modelo para la creación de esta institución el amparo mexicano, el cual, a pesar de tener bases foráneas, llegó a adquirir

rasgos propios, que lo distinguieron de otros. Con la Constitución Federal de 1824 y la denominada "Acta de Reformas", que la puso en vigencia introduce en México el Juicio del Amparo, al que se le criticó porque solo se limitaba a proteger los derechos y garantías individuales. Luego vino la Constitución Federal de 1957, que se caracterizó por su corte liberal e individualista, estableciendo, entre otras cosas, que le correspondía a los Tribunales Federales, mediante el juicio de amparo, resolver las controversias que se originaran por las leyes o actos de cualquier autoridad que violaran las garantías individuales o vulneraran la soberanía de los Estados. En 1861, se creó la Ley Orgánica de Amparo, que fuera posteriormente derogada en 1869, estableciéndose por primera vez en México que el juicio de Amparo procedía contra los negocios judiciales. En 1917, nace en México la Constitución Nacional, actualmente vigente, de corte social, en la cual no solo se protege al individuo en forma independiente, aislado de los demás en lo que respecta a sus derechos, sino que se le protege y se le favorece en sus intereses como un todo en la sociedad, es decir, se trata de mejorar su condición socio- económica dentro de la misma.

Esta Constitución contiene básicamente los mismos principios que en materia de amparo contenía la Constitución anterior, indicando en su artículo 1203 que los Tribunales de la Federación son los que resolverán todas la controversia que se susciten por leyes o actos provenientes de la autoridades estatales que violen las garantías individuales que vulneran o restrinjan la soberanía de los Estados o que invadan las esfera de la autoridad Federal. El artículo 107, por su parte, señala cuales son los Tribunales competentes

para atender los casos que versen sobre esta materia, distribuyendo así la competencia jurisdiccional que evita la acumulación de trabajo en la Corte suprema de Justicia, haciendo que el proceso sea más rápido y expedito. Con la ley de Amparo de 1919, se quiso reglamentar estos artículos, pero en 1935 se promulgo la Ley Orgánica, del 30 de diciembre de ese mismo año, que estableció finalmente el procedimiento oral en los juicios de amparo, y que solo sería excepcionalmente actuado.

En cuanto a los antecedentes históricos de esta figura jurídica en Panamá, debemos comenzar por fijar de manera específica las distintas constituciones que nos han regido. El constitucionalismo panameño se origina con la constitución española de Cádiz de 1812. Esta Constitución, al igual que las correspondientes a la era colonial, no hacia referencia al Amparo de Garantías. El 28 de noviembre de 1821, fecha de la independencia de Panamá de España comenzó a regir en nuestro país la llamada "Constitución de Cúcuta" que estableció un régimen republicano y liberal – individualista, basado en la más estricta separación de los tres órganos superiores del poder estatal. Cuando Panamá se independizó de España y se unió voluntariamente a Colombia, acababa de ser promulgada la llamada "Constitución de Cúcuta", la cual nos rigió durante cinco años, lo que a juicio del Dr. Cesar A. Quintero, puede definirse "como una Constitución moderada y equilibrada que instituyo un genuino régimen republicano y un autentico Estado de derecho" (1). En esta Constitución los derechos y garantías individuales aparecían bajo la denominación de "Disposiciones Generales", no encontrándose en ella mayores aportes al Amparo de Garantías

Constitucionales, como tampoco en ninguno de los proyectos de constituciones y demás constituciones que rigieron durante la época de nuestra unión a Colombia. En 1904, luego de nuestra separación de Colombia, nace la primera Constitución, que, a pesar de contener un título dedicado a los derechos individuales, no contiene ninguna disposición referente al amparo. Durante todo este tiempo de 1904 a 1941, tanto el control de la constitucionalidad como el control jurisdiccional de la legalidad no estuvieron regulados de manera firme, por lo cual su aplicación fue muy precaria. No existía jurisdicción contencioso administrativa, ni tampoco el recurso de amparo. Esta Constitución tampoco consagraba derechos fundamentales de carácter social. Es con la Constitución de 1941, que aparece por primera vez enunciado el Amparo de Garantías Constitucionales en nuestra legislación bajo el título de "Instituciones de Garantías" Entre ellas figuraban, además del recurso de Amparo, el recurso de inconstitucionalidad y los recursos contenciosos administrativo.

El recurso de Amparo se encontraba consagrado en el artículo 189, que expresaba lo siguiente:

"Toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier funcionario público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos o garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. La Ley determinara la forma de este procedimiento sumario de Amparo de Garantías Constitucionales.

El recurso a que este artículo se refiere será siempre de competencia del poder judicial” El Dr. Moscote, considero en esa ocasión que con estos recursos se garantizaran mejor los derechos individuales manifestando que “Estas instituciones, por lo menos en principio, perfeccionan las bases jurídicas reguladoras de las relaciones entre nuestro Estado y sus miembros en cuanto a sus derechos y deberes reciproco. Sobre el origen del Amparo en nuestra legislación se ha establecido que el mismo procede del amparo Mexicano. Al respecto el Dr. Moscote manifiesta lo siguiente: “....No hay en las Constituciones modernas antecedentes precisos de nuestro juicio de amparo, el cual no obstante se le presenta íntimamente emparentado con el Habeas Corpus, con la acción de inconstitucionalidad y con el juicio de amparo mexicano”. Sin embargo, nuestro amparo presenta características propias, que lo diferencian de lo establecido en otros países. En el anteproyecto de la Constitución de 1941, el Amparo de Garantías Constitucionales pasó sin modificación alguna al artículo 51 de la que sería la Constitución de 1946. El 11 de octubre de 1968 al 11 de octubre de 1972, este país se rigió a base de Decretos de Gabinete, a pesar de que la Constitución de 1946 no había sido formalmente derogada por los militantes golpistas. Cabe agregar que el 31 de octubre de 1969, se promulgó el Decreto de Gabinete N.341 en el cual se restablecían las garantías constitucionales, entre ellas el amparo. Luego se creo la “comisión de Reformas Revolucionarias a la Constitución”. A la cual se le encomendó la tarea de preparar un anteproyecto de lo que vendría a ser la Constitución de 1972 vigente. El primer cambio que sufrió el artículo 51 de la Constitución de

1946, fue su cambio de numeración, pasando a ser el artículo 49 de la Constitución de 1972, que estableció lo siguiente:

"Toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o de no hacer que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

El recurso de Amparo de Garantías Constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitara mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales".

Como segunda reforma se observa que la Constitución de 1972 reemplaza el término funcionario público, que era utilizado en la Constitución de 1946, por el de servidor publico.

Un tercer cambio o reforma que sufrió el artículo 51 de la Constitución de 1946, con la Constitución de 1972 vigente, es que esta elimino la frase: "la ley determinara la forma de este procedimiento sumario de amparo de garantías constitucionales". Estableciendo en su lugar que este recurso "se tramitara mediante procedimiento sumario".

La Constitución de 1972, fue modificada por los actos reformativos de 1978 y por el acto constitucional de 1983, en donde, si bien es cierto que el texto del artículo que desarrolla el amparo no sufrió ninguna modificación, el cambio se refleja es en su numeración.

Así, el recurso de amparo quedó contemplado en el artículo 50 de la Constitución vigente en vez del artículo 49, manteniéndose dentro del Título

III. Que se denomina "Derechos y deberes Individuales y Sociales", en el capítulo denominado "Garantías Fundamentales". Mediante la Ley 46, del 24 de noviembre de 1956, se reglamentan las instituciones de garantías contempladas en la Constitución. Esta Ley fue reformada por la Ley I de 1959 en lo que respecta a los artículos 43 y 58. Por su parte, el Libro I. del Código Judicial contenía disposiciones supletorias relacionadas con los juicios de amparo, con la competencia y la tramitación. Pero debido a los cambios sufridos por el país en materia económica, política y social, desde que la Ley 46 de 1956 fue promulgada, las reformas del código Judicial se hacían cada vez mas urgentes. Es así que en el año de 1976, se nombro una comisión revisora del código Judicial, que luego de innumerables consultas y debates a nivel del Órgano Legislativo se logro la aprobación de la Ley N.29 de 25 de octubre de 1984, o sea, el nuevo Código Judicial. En este nuevo Código Judicial, que entra a regir en el año de 1987, las instituciones de garantías estaban contempladas en el Libro III. Por su parte, el Amparo aparecía en el capítulo III, Título IX, desde el artículo 2645 al 2672. (2) Cuando, finalmente, el Código Judicial entro en vigencia, el amparo de garantías constitucionales quedó contemplado en el Libro IV, Capítulo I. Título III, en sus artículos 2615 al 2632. Estos fueron los artículos que rigieron esta figura durante los últimos años de crisis política, económica y social.

(1) I. Burgoa. Juicio de Amparo, editorial Pro rúa, 1971.

(2) J. Fábrega, Estudio de Derecho Constitucional Panameño, 1987, pág.27.

2. CONCEPTO

2.1. Según la Doctrina

El profesor **Edgardo Molina Mola**, indica que la mayoría de los juristas están divididos en dos corrientes: una que considera el amparo como un recurso, es decir, como un medio de impugnación, entendiéndose desde el ángulo en donde este "Recurso de Amparo" cumple la función de restablecer tanto el antiguo estado de las cosas así como los derechos subjetivos violados, atacando vía judicial la orden o resolución violatoria, la cual en una misma unidad será objeto de estudio por parte del tribunal de superior jerarquía o tribunal de apelaciones; y por otro lado existen juristas quienes se inclinan más por considerar que la figura del amparo es una "Acción" o un "Juicio o Proceso" estos dos últimos términos considerados como el derecho subjetivo del individuo de recurrir por sí mismo a los órganos judiciales y activar de este modo la actividad jurisdiccional previa la lesión de un derecho, la cual dará lugar consecuentemente al establecimiento formal del proceso o juicio de que se trate.

Burgoa I. (3), señala que es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado, con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley o para constreñir a su obligado a cumplir con los compromisos contraídos validamente. Es un derecho subjetivo público, que tiene por objeto reclamar la prestación del servicio público

jurisdiccional, es un medio jurídico de reclamar la intervención y provoca la actuación de cualquier autoridad estatal no jurisdiccional.

González, B.B. en Chile, no sucede igual. En la doctrina chilena no se maneja dentro de su legislación la misma concepción de amparo que maneja Venezuela; por ello, la doctrina chilena también se pronuncia en otro sentido sin tener por ello que decir que una u otra doctrina son unitarias, sino que en lo fundamental cada una de ellos logra una unidad de criterio dentro de su esfera y por tanto, en general cada una son completamente distintas.

En Panamá, las Constituciones de 1941-1946-1972, al igual que la ley reglamentaria expedida en 1956, la consideran como un recurso. La corte Suprema de Justicia a través de jurisprudencia ha utilizado la denominación de recurso o de acción. En la doctrina patria encontramos diversos criterios en cuanto a la naturaleza jurídica del amparo, así tenemos al procesalista y ex catedrático de la Universidad de Panamá **Dr. Pedro Barsallo**: Propone utilizar el vocablo acción, toda vez que estima que es la más acorde con los lineamientos de la doctrina procesal moderna.

De manera exclusiva podemos señalar que por su naturaleza jurídica el Amparo de Garantías Constitucionales es una acción a nivel constitucional, cuya función exclusiva es impugnar ordenes de hacer o de no hacer. A pesar de que se utilice indistintamente, por las constituciones, la Ley

(3). I. Burgoa I., El Juicio de Amparo, Pág.318.

(4). Molina, M. La Jurisdicción Constitucional en Panamá, En un Estudio de Derecho Comparado, Primera Edición, pág. 45.

Reglamentaria y la jurisprudencia el término acción o recurso toda vez que la institución no se desvirtúa, ya que el amparo ha adquirido carta de naturaleza definitiva.

2.2. Según la Legislación

En nuestra norma positiva no existe una definición textual de lo que es el amparo de garantías constitucionales, pero sí hay mucha documentación que nos indican que es.

La Constitución, por ser una ley, la primera de todas las leyes, es el faro de luz que guía todo el camino legal que debe ser recorrido, por tanto puede y debe ser aplicada directamente a los hechos particulares que caigan en el proceso de amparo, en que lo que se protege son derechos establecidos en la Constitución. La Corte Suprema panameña en innumerables ocasiones ha rechazado demandas de amparo basadas en violaciones de derechos establecidos en la ley ordinaria.

En relación al artículo 50 reza de la siguiente manera:

“Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer, que viole los derechos y garantías que esta

Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales”.

Esta acción de amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la constitución que revista la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

Nuestro Código Judicial en el Título III sobre el Amparo de Garantías Constitucional, cuenta con cinco capítulos que nos indican el procedimiento del Amparo, como medio de defender los derechos individuales consagrados en la Constitución. (5)

.2.3. Según la Jurisprudencia

Los Derechos Constitucionales Protegido por la Acción de Amparo, de acuerdo con la jurisprudencia, únicamente protege los derechos individuales o sociales establecidos en el título III de la Constitución, con excepción de la libertad individual, que es protegido de manera especial por el recurso de hábeas corpus. Se estima, por lo que sostienen esta posición, que las

(5) Fábrega, J.(1999), Constitución Política de la República de Panamá, P.11.

órdenes que violen un derecho constitucional no contemplado en el título III deberán ser protegidos mediante la acción de inconstitucionalidad.

Concepto de la Acción de amparo, según nuestra jurisprudencia.

"la acción de amparo es una acción autónoma, de naturaleza constitucional, tendiente a tutelar los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional"

"el amparo de garantías constitucionales es una acción de carácter restitutivo. En otras palabras, la sentencia restituye al quejoso en el goce de la garantía individual violada".

En sentencia de 14 de agosto de 1996, resolvió la demanda de amparo interpuesta por el entonces separado de su cargo Magistrado JOSE MANUEL FAÚNDES R., contra la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa:

"Este Pleno, en copiosa jurisprudencia, ha indicado que la acción constitucional de garantías constitucionales procede, en primer lugar; contra un acto que revista la forma de un mandato que imponga una norma de conducta a una persona, lesiva de sus derechos y garantías fundamentales".

En este mismo fallo la Corte enfatizó que: “El Pleno se encuentra obligado a reiterar; por enésima vez, que la acción constitucional de amparo tiene como finalidad revocar aquellos actos que violan de manera directa e inmediata, a los derechos y garantías fundamentales, de naturaleza constitucional, de cualquier persona que acuda a esta vía constitucional: es decir, que el acto cuya revocatoria se pide contenga materia constitucional. No resulta procedente para impugnar actos procedí mentales, violatorio de disposiciones legales, para obtener la tutela judicial efectiva, por tanto, como también ha reiterado el Pleno, igualmente en multitud de ocasiones, la vía constitucional de amparo no es una tercera instancia o una vía recursiva que el afectado puede utilizar alternativamente con respecto a los remedios ordinarios, según prefiera, para anular actos violatorios de derechos de rango legal.

Concluimos que bajo ningún concepto procederá el amparo contra normas legales, pues el mismo solo procederá cuando se trate de normas que contengan materia constitucional y que el acto que se demanda sea totalmente arbitrario que lesione derechos y garantías constitucionales.(6)

(6). Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Fallo 15 de enero (1993), p.63, Fallo 27 de enero (1993), Pleno de la Corte Suprema de Justicia, R.J. de enero de (1993), p.13).

Según, el autor (Gozaini, la acción de amparo constituye una “vía directa para solicitar la protección de los derechos fundamentales”. (7)

Para el autor panameño, (González, B., dice “ la acción de amparo es el instituto mediante el cual cualquier persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, fundada en mandato violatorio de derechos y garantías consagradas en la Constitución, peticiona la jurisdicción, en función constitucional, que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona a fin de hacer efectiva la tutela del derecho fundamental lesionado”. (8).

La Acción de amparo consiste en un mecanismo o instrumento jurídico constitucional de protección que, reconocido a toda persona contra la cual, al haberse proferido o expedido o se pretenda ejecutar o se ejecute una orden de hacer o de no hacer en su contra y que haya sido emitida por un servidor público, la cual va en detrimento, menoscabo o infracción de sus derechos constitucionales, le va a permitir solicitar o pedir que la misma sea revocada, ya sea a petición suya o de cualquier otra, tutela que se hará efectiva a través o mediante un procedimiento sumario y de conocimiento o competencia de los tribunales judiciales. (9)

(7). Gozaini, O., **Derecho Procesal Constitucional, Amparo**, Editora RUBINZAL, CULZONI, Argentina (2002), p.251.

(8). González, B. B., **Derecho Procesal Constitucional**, Edit. Jurídica Ancón, Panamá, (1999), p.149.

(9). Curso de Derecho Procesal Constitucional. Litho Editorial Chen, Panamá, (2003), p.243.

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS.

Recurso: El diccionario Jurídico Elemental (2000), lo define como el medio, procedimiento extraordinario. La reclamación que, concedida por ley o reglamento, formula quien se cree perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal, para ante el mismo o el superior inmediato, con el fin de que la reforme o revoque.

Proceso Penal: FENECH,I. Es la sucesión de actos reglados que tienden a la actuación de una pretensión punitiva y de resarcimiento en su caso mediante la intervención y decisión de un órgano jurisdiccional penal.

Procedimiento: El diccionario Jurídico Elemental (2000), Actuación de tramites judiciales; es decir el conjunto de actos diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en una causa.

Competencia: Capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto. Derecho para actuar. En el derecho penal, la competencia puede ser establecida en atención a los siguientes criterios; a) el territorio; b) la naturaleza del asunto; c) la cuantía; y, d) la calidad de las partes. (Muñoz, P. Lecciones de D. Penal).

Amparo: El diccionario Jurídico Elemental (2000), Protección. Institución que tiene su ámbito dentro de las normas del Derecho Político o Constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad.

Garantías Constitucionales: Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentalmente que se les reconocen. (El diccionario Jurídico Elemental (2000), p.178.).

4. NATURALEZA JURÍDICA.

La doctrina constitucional se encuentra dividida, no existe una uniformidad de criterio, aunque la mayoría de los juristas están divididos en dos corrientes: una que considera al amparo como un recurso, es decir, como un medio de impugnación, entendiéndose desde el ángulo en donde este "Recurso de Amparo" cumple su función de restablecer tanto el antiguo estado de las cosas así como los derechos subjetivos violados, atacando vía judicial la orden o resolución violatoria, la cual en una misma unidad será objeto de estudio por parte del tribunal superior jerarquía o tribunal de apelaciones; por otro lado existen juristas que se inclinan más por considerar que la figura del Amparo es una "Acción" o un Juicio o un Proceso", estos dos últimos términos considerados como sinónimos, lo que no se desprende de la noción de acción, considerada como el derecho subjetivo del individuo de recurrir por sí mismo a los órganos judiciales y activar de este la actividad jurisdiccional previa la lesión de un derecho.

Ambas terminologías se relacionan unas con otra, acción-proceso o juicio, una depende de la otra, considerando el amparo como un proceso, a pesar que nuestra Constitución lo menciona como un recurso y la jurisprudencia como una acción.

Las dos corrientes de la doctrina constitucional tratan de definir la naturaleza del amparo, no obstante esto no nos impide en reconocer qué

tanto más está dividida la doctrina; hay quienes tienden llamarle a esta figura recurso ó acción indistintamente, algunos confunden los términos aplicando ambos en un mismo sentido o significación; por otro lado de la misma forma hay quienes indican del amparo sometiéndolo a la concepción de acción o proceso, con la función jurisdiccional del Estado; han habido quienes desvían el verdadero significado de la naturaleza del amparo como acción o proceso, vinculándolas a la tarea del Estado por tutelar los derechos y garantías y en adición sostiene que lo anteriormente dicho, deriva de su propia denominación o nombre " **amparo**". Se han dado discrepancias al respecto, las cuales en la doctrina no se debe a las diferentes opiniones de muchos autores, ya que el problema no se debe a una diferencia conceptual sino también a que dicha concepción deriva en gran medida de cómo está la legislación de cada Estado.

4.1. El amparo como Recurso.

Antes de profundizar en el tema, consultamos al diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, obra citada., pág. 33. en sentido estricto, **recurso**, es el medio que se le otorga a una persona perjudicada por una resolución emitida por la autoridad judicial, dentro de un proceso con el objetivo de impugnarla acudiendo al superior jerárquico (de acuerdo a las reglas de competencia que se trate), y así enmendar o anular la resolución causante de un determinado perjuicio o agravio.

Podemos indicar que el recurso es un medio de impugnación que se otorga a una persona que se ve afectada por una resolución dentro de un proceso o juicio.

Una vez delimitado lo que se entiende por recurso, con esta definición vemos que algunos juristas tienen un concepto equivocado, como lo expone ELBANO ZERPA DIAZ; **“es acudir a un juez o autoridad con su demanda o petición; acogerse en caso de necesidad a favor de uno o emplear medios no comunes para el logro de un objeto”**.

Por tanto observamos que existe una confusión entre los términos acción y recurso; y como se expone en esta definición, el término recurso se liga con la idea del derecho de acción, así, lo expresa el autor más adelante .en ambos sentidos se logra una coincidencia: recurso implica acción y acción sugiere proceso, fuerza una litis implica un procedimiento.

Según lo indicado, el amparo es un recurso y que el recurso implica acción y esta última a su vez, un proceso; quizás con eso último no tenemos problema, pues sabemos que el derecho de acción es el poder de accionar la actividad judicial, y de el se puede derivar consecuentemente el establecimiento de un proceso, sin embargo, en la forma en que es tratado, como recurso, sugiere una acción, que es lo que quizás crea disconformidad en otro sector doctrinario. Ambos conceptos resultan ser antagónicos y con naturaleza distintas aún cuando pertenezcan al campo del derecho procesal.

Mientras que el tratadista mexicano, IGNACIO BURGOA, nos indica; “...el conjunto armónico y ordenados de actos jurídicos en vista de la composición de la litis de trascendencia jurídica, que establece una relación de las partes con el juzgador y que desenvuelve una serie concatenada de situaciones”.

Según esta definición, la acción o proceso es un cuerpo autónomo, dotado de un conjunto de normas que regulan y disponen la composición y desenvolvimiento de la litis; por ello, la aseveración vista de amparo como recurso, es errónea.

El Recurso es, de acuerdo a lo que exponen algunos autores, un medio de impugnación. Si tomáramos en consideración la definición jurídica de lo que se entiende por medio de impugnación, podemos señalar que se da en contra de una resolución emitida en un proceso; por lo tanto, para que se de el recurso, debe de pre-existir o preceder un proceso. Es por ello que el Amparo de Garantías constitucionales como recurso no rompe con la estructura autónoma del proceso o juicio, sino que se incorpora a dicha unidad procesal; es por ello, que los críticos afirman que el amparo no es un medio de impugnación que trata de invalidar una decisión judicial, producto del trámite legal y corriente de un proceso. Dada la diferencia recurso-acción, los juristas recalcan la importancia en la autonomía de la figura del amparo porque:

1. En cuanto a la jurisdicción, en el amparo, es una jurisdicción especial; por lo tanto en algunos países se habla de jurisdicción constitucional, la cual se encarga de atender estos menesteres.

2. Su materia es completamente diferente, pues el amparo atañe a la tutela de los derechos y garantías establecidos en la ley fundamental, por lo tanto si estuviéramos hablando de un recurso, éste atacaría la resolución judicial en vista de una incorrecta aplicación o interpretación de la Ley o por infracción a ella, pero cuando se interpone a juicio de amparo como proceso, se debate una materia distinta. En el Amparo no se combate una resolución judicial ante el superior jerárquico, en el sentido de reformarla o anularla por infracciones o violaciones de las leyes de procedimiento, sino que se debate las infracciones y violaciones a los derechos y garantías consagrados en la ley fundamental, sin olvidarnos que algunos la llaman "**Medio Extraordinario**" de impugnación de un acto u orden de ser o de no hacer, ya que este procede cuando un acto de la autoridad viola los derechos constitucionales y no cuando viola otras normas, ya que entonces se daría un juicio o administrativos, el cuál se denomina como **Medio Ordinario** de impugnación en contra de las arbitrariedades cometidas por los funcionarios del Estado.

4.2. El amparo como Proceso o Juicio.

Muchos autores están a favor del amparo como una acción y hablan de la misma asimilándola como un proceso o juicio, por lo que se deja por sentado que la acción implica un proceso o juicio y por ello, algunos autores hablan de ACCIÓN DE AMPARO Y JUICIO DE AMPARO, refiriéndose a lo mismo.

Burgoa, concibe la figura del amparo como un proceso ó juicio en los siguientes términos:

“El amparo es un juicio; es decir un proceso en que el Órgano de control debe dirimir la controversia jurídica que consiste en si el acto de la autoridad (lato sensu) que se impugne es o no violatoria de la Constitución en los términos señalados en el inciso anterior, controversia que se suscita entre el gobernado que resulte agraviado por dicho acto y la autoridad del Estado del que éste proviene”.

De esta concepción se desprende que la naturaleza del amparo, está siempre unida a la de juicio o proceso unitario, dada la autonomía explicada anteriormente, en cuanto a su materia, jurisdicción, etc., Sin embargo, esta figura logra encontrarse enmarcada en un parámetro rígido, sin tener en cuenta que existen otras circunstancias, especialmente una que hace que el Amparo se convierta ocasionalmente en recurso propiamente dicho.

4.3. El Amparo como Proceso y como Recurso dentro de un Proceso.

Para nosotros no deja de ser una acción o proceso; el mismo goza de autonomía en virtud, principalmente, de que existe una materia específica y en algunos países, porque existe una jurisdicción o competencia especial; sin embargo, en algunas ocasiones, esta figura logra tener en un caso muy particular, connotaciones diferentes al concepto de proceso; en este último se dirime en específico una violación a los derechos consagrados en la Constitución y no la enmienda de una resolución judicial que concierne al hecho de atacar normas jurídicas de otra índole distinta a las consagradas en la ley fundamental. El amparo se transforma en un recurso o medio de impugnación solo en el sentido de que impugna una resolución judicial que contenga alguna violación a los derechos fundamentales.

En vista de que una resolución o sentencia tiene efecto de obligatoriedad como ley entre las partes, el Amparo como recurso cobra su importancia. Al igual que el control de la constitucionalidad de las leyes, en donde si éstas contrarían al espíritu de la Constitución son expulsadas del mundo jurídico; el Amparo de la misma manera, pero en una dimensión y en medio de una relación autoridad (judicial)- particular, defiende a estos últimos para que, en virtud de la imposición de una ley entre las partes propiciadas por la autoridad, se dé una verdadera protección o tutela de los derechos constitucionales, vulnerados por la resolución en cuestión.

El amparo es una acción, juicio o proceso en cuanto a que él mismo ataca los actos administrativos provenientes de los funcionarios del Estado, que se configuran como una orden de hacer o no hacer, pidiendo su anulación y el restablecimiento del derecho vulnerado dentro de una unidad procesal; en este sentido el amparo logra su objetivo como proceso en cuanto a su finalidad y su estructura autónoma.

Si bien es cierto que el amparo se conforma como una unidad distinta , del proceso ya existente, dando cumplimiento a la finalidad de que se revise lo actuado, en cuanto a su razón funcional; por otro lado, desde el punto de vista procesal es necesario analizar el aspecto de la competencia ya que nos percatamos que en un recurso que centre su objetivo en impugnar algo que dicte el tribunal ad quo, se irá a su superior jerárquico a fin de que emita un dictamen; lo que ocurre también con la sentencia en firme, que es objeto de recurrir vía amparo, ya que la misma se irá de igual forma al superior jerárquico para que revise lo actuado por el inferior rompiendo con la unidad procesal inicial, pero logrando que se de el principio de la doble instancia, que a la finales sería lo mismo que lograría otro recurso impugnatorio.

En la introducción se mencionó de la naturaleza del amparo en general, algunos autores aceptan muy en el fondo la corriente que presentamos; así pues, en ese sentido, anotamos lo que nos dice el jurista HÉCTOR FIX SAMUDIO:

“Reflexiones posteriores nos han llevado al consentimiento de que el amparo no constituye exclusivamente un proceso sino que sume una doble configuración, como lo había afirmado Emilio Rabasa, es un proceso autónomo cuando sirve de instrumento para la tutela de deposiciones estrictamente constitucionales, pero solamente constituye un recurso si bien extraordinarios si se utiliza para impugnar resoluciones judiciales.” (11)

(11). *El Juicio de Amparo*, Editorial Porrúa, México, Pág. 96.

(12). A. Chiari., Tesis *“Amparo de Garantías Constitucionales en el Derecho Panameño y Comparado de México, Chile y Venezuela, Pág.67”*.

5. REQUISITOS DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN NUESTRO DERECHO POSITIVO.

De acuerdo con los artículos 50 de la Constitución Nacional, 2615 y 2616 del Código Judicial, así como de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de actos definitivos de funcionario público con mando y jurisdicción que vulnere o lesiones los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

De lo expuesto por las disposiciones legales citadas se desprende, que para que un acto pueda ser objeto de una acción de amparo, debe reunir los siguientes requisitos:

- 1) Que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución.
- 2) Que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer.
- 3) Que cuando por la gravedad e inminencia del daño, requiere una revocación inmediata.
- 4) Que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación inmediata.

- 5) Que el acto haya sido dictado por un funcionario público que tenga mando y jurisdicción.

1. Violación de derechos constitucionales

La violación alegada tiene que ser de derechos constitucionales, lo que significa que si se violan derechos establecidos en la ley o que no tengan rango constitucional, entonces no cabe el amparo. Para la violación de derechos legales se podrían ejercitar, entre otros el recurso contencioso de derechos humanos, que vendría a ser en el plano de la legalidad lo que es el amparo en el plano de la constitucionalidad.

También se sostiene que sólo pueden ser objeto de la acción de amparo los derechos constitucionales establecido en el título III de la Constitución referentes a los derechos individuales y sociales y que por tanto los otros derechos constitucionales, establecido en otras disposiciones constitucionales deben ser protegidos por la acción de amparo contra la violación de los derechos y garantías consagrados en esta Constitución, lo que claramente significa que no hace la distinción que ha hecho la jurisprudencia y parte de la doctrina.

La Jurisprudencia también ha sostenido que no procede la acción de amparo cuando las normas constitucionales invocada como violadas tienen carácter programático, por no contener perse un derecho

constitucional individualizado y que es necesario que se alegue junto con una violación de otra norma constitucional que si contengan un derecho.

Los derechos protegidos por la acción de amparo de garantías constitucionales que consagra nuestra Constitución son los siguientes:

1. Derecho a no ser discriminado.

1. La igualdad ante la ley.
2. Derecho de los nacionales a no ser extraditados.
3. Derecho a no declarar contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuanto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
4. Derecho a la intimidad.
5. Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
6. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas.
7. Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.
8. Libertad de tránsito.
9. Libertad de expresión.
10. Libertad de pensamiento.
11. Libertad de reunión
12. Libertad de profesión.
13. Libertad de religión.
14. Libertad de asociación.
15. Derecho a no ser sometido a torturas.
16. Derecho a no ser penado con la muerte.

en la acción de amparo, en que no se pueden practicar pruebas y que la parte demandada sólo puede ser escuchada mediante un informe de conducta que debe responder en el término de dos horas. La Jurisprudencia de la Corte en este sentido es abundante y sólo se ha admitido la impugnación, por amparo, en los despidos de mujeres en estado de gravidez, en que se haya violado el fuero de maternidad.” (25 de junio de 1993)

“Lo primero que observa la Corte es que la orden impugnada aportada con la demanda es una fotocopia sin ninguna autenticación que le de valor legal a dicho documento, lo que por si solo debe producir la inadmisibilidad de la acción de amparo incoada.

Asimismo, la Corte ha sostenido que el proceso de amparo no es el medio procesal idóneo para juzgar la justificación legal de un despido comunicado a un servidor público. Cuando se sigue una vía procesal que no es la adecuada para el caso que se juzga, se puede colocar en una situación de desventaja procesal a una de las partes.

La Corte ha mantenido invariable su posición, con excepción de la mujer despedida con fuero de maternidad, que con respecto a la decisión sobre la legalidad del despido de un servidor público, debe

necesariamente acudirse a un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción.”

La lista anterior es solamente enumerativa y pueden existir otros derechos constitucionales protegidos por la acción de amparo de garantías constitucionales no mencionados aquí.

2. Que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer

La orden se caracteriza por su carácter imperativo ya que manda que se haga algo o prohíbe que se haga algo. La orden debe ser individualizada y especificada, para conocer su contenido exacto.

Ya hemos dicho que no todas las órdenes caen dentro de este control, pues la jurisprudencia ha sostenido que las órdenes que violen derechos no establecidos en el título III de la Constitución, deben ser objeto de la acción de inconstitucionalidad, como serían por ejemplo las leyes, que violen derechos, que por su carácter genérico, podrían violar derechos en forma abstracta pero no concreta, es decir, tiene que ser en casos específicos. Igual ocurre con las órdenes de detención, que no son susceptibles de amparo, ya que para ellas existe el recurso especial de hábeas corpus(sentencia de 21 de noviembre de 1990).

De lo dicho vemos entonces que no cabe amparo contra leyes o actos de carácter general ni contra las órdenes de detención o medidas cautelares que afecten la libertad ambulatoria.

Cuando por la gravedad o inminencia del daño, requiere una revocación inmediata.

La acción de amparo, según el artículo 2615 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. La Corte a dicho que no puede enervar un auto dictado hace un año, tres meses y cuatro días.

Podemos indicar que solo procederá la vía de la acción de amparo si se hayan agotado todos los medios y tramites previstos en la ley para impugnar la resolución judicial de que se trate.

Que el acto haya sido expedido por un funcionario público con mando y jurisdicción.

Se entiende que un funcionario tiene mando cuando la ley lo autoriza a realizar ciertos actos de su competencia, que provienen de su autoridad, para dictar órdenes, resoluciones, sentencias, providencias o decretos y que

tiene jurisdicción, cuando esos actos, que puede realizar autorizado por la ley, le atribuyen el desenvolvimiento de su actividad en parte o en todo el territorio de la República, que también le señala la ley.

- Funcionario de primera instancia debe ser el demandado cuando el de segunda instancia confirma.

El artículo 2617 del Código Judicial es claro cuando manifiesta que el demandado será el funcionario que haya dictado la orden cuya revocatoria se pide.

En casos similares anteriores la Corte ha sostenido que el demandado es el funcionario que haya dictado la orden cuya revocatoria se pide (sentencia de 27 de agosto de 1990).

- Excepción a esta jurisprudencia

Como fundamento de la negativa de admisión, el Tribunal Superior citó jurisprudencia de esta corporación, en la que reiteradamente se ha sostenido que la acción de amparo debe enderezarse contra el funcionario que dicta la orden original y no contra el que la confirma.

No cabe amparo contra actos de los particulares

Todo lo anteriormente expuesto demuestra que en nuestro país no cabe acciones de amparo contra los actos de los particulares. También la Corte ha sostenido que no cabe contra los actos de los administradores de la quiebra, nombrados por el tribunal, así como tampoco por los secuestres.

Actos no sujetas a la acción de amparo por disposición expresa de la Constitución y la ley.

Dentro de este segundo requisito que venimos examinando, de que debe tratarse de una orden de hacer o de no hacer, la Constitución establece de manera expresa en su artículo 204, que no cabe la acción de amparo contra los fallos de la Corte suprema de Justicia y sus Salas.

Igualmente el artículo 137 párrafo final de la Constitución establece que contra las decisiones del Tribunal Electoral, sólo cabe el recurso de inconstitucionalidad. Esto lo confirma el numeral 3º del artículo 2615 del Código Judicial que dice lo siguiente:

“En atención a lo dispuesto en los artículos 137,204 de la Constitución Nacional, no se admitirá la demanda en un proceso de amparo contra las decisiones jurisdiccionales expedida por el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus salas”.

Determinación de si un acto contiene o no una orden por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Este aspecto de determinar si existe orden o no, ha sido uno de los más importantes en la jurisprudencia, que se ha pronunciado en los

siguientes casos, sosteniendo que no estamos en presencia de una orden o que los requisitos que debe cumplir la orden no se dan:

Resolución que ordenaba recibir indagatoria.

“ La indagatoria es un acto de impulso procesal, y por tanto, de mero trámite, que no viola ningún derecho constitucional.

La indagatoria no constituye una orden de hacer, toda vez que el imputado no está obligado a rendirla; además la indagatoria es un medio de defensa, pues el indagado puede pedir que se practiquen las pruebas que estima favorable a su defensa.” (Sentencia de 3 de diciembre de 1992 Modaton, S.A. vs fiscal tercero de circuito de Colón. Ponente Arturo Hoyos.

Orden verbal. “En estos casos en que no hay constancia de la orden, por haber sido ésta dictada verbalmente, el interesado o perjudicado deberá presentar en abono de la demanda, dos testimonio hábiles, de acuerdo con una aplicación analógica del artículo 48, de la ley 135 de 1943, ya que de esta manera es la única forma en que la orden impugnada, cuando es verbal adquiere materialidad y certeza”. Sentencia de 10 de julio de 1992.

Fianza de excarcelación.

"Opina la Corte que la decisión que niega el beneficio de excarcelación solicitado por el detenido no es una orden de hacer. Lo que el tribunal hace es decidir una solicitud de conceder o no una fianza, por lo que, al resolver la solicitud en forma negativa, no está ordenando que no se haga una cosa, sino decidiendo que el solicitante no tiene derecho al beneficio de excarcelación solicitado.

Otra manera de demostrar que no estamos en presencia de una orden de no hacer consistiría en que no existe orden de suspender, ya que la supuesta orden de no hacer sería la negativa de conceder el beneficio de excarcelación solicitado, lo cual constituye el pronunciamiento que el solicitante pidió al tribunal.

Si fuéramos más lejos y supusiéramos que se suspendiera la supuesta orden de no hacer, ¿qué beneficio tendría para el amparista la suspensión de la supuesta orden? El solicitante continuaría detenido, pues la suspensión de la supuesta orden, de no concedérsele la fianza, no evitaría que continuara detenido. El tribunal de amparo en esta situación no podría entrar a considerar las razones de si existen o no méritos para conceder o no la fianza, lo que fue ya determinado en las dos instancias anteriores. Además, de actos o decisiones que en alguna forma afectan la libertad de un individuo, la acción idónea para plantear la violación de las garantías

constitucionales de que goza cualquier ciudadano es la del recurso de hábeas corpus y no la del amparo de garantías constitucionales, según lo ha advertido esta Corte en fallos anteriores”.

Ampliación del sumario.

En primer lugar que la ampliación del sumario no es una orden dada a la sociedad Aseguradora Mundial de Panamá, S.A. sino dirigida al agente del Ministerio Público para que complete la investigación, por lo que carece de legitimación activa en el presente proceso de amparo. Además, la resolución que decreta la ampliación del sumario es irrecurrible por disponerlo así el artículo 2205 del Código Judicial y se remite sin más trámite al funcionario de instrucción; y ello en razón de la libertad de evaluación que tiene el juez de la causa para considerar incompleta la etapa sumarial y solicitar a su libre opinión las pesquisas y averiguaciones que considere pertinentes para la correcta calificación de la fase instructoria. (Sentencia de 27 de enero de 1993. Ponente, Molino Mola. Orlando Sánchez vs juez primero del circuito de Colón).

Auto de proceder. No debe perderse de vista que el auto de enjuiciamiento es interlocutorio por excelencia, es decir, que no decide el fondo del negocio y no entra por tanto a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado, que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia, aparte de que es necesario esperar el auto de enjuiciamiento para tomar medidas cautelares contra el imputado. El auto de proceder tiene por objeto

calificar el sumario, es decir, ponderar si existe algún indicio racional de criminalidad en contra de determinada persona y esta apreciación es una facultad inherente a la de juzgar, a fin de declarar si se abre o no la fase plenaria del proceso penal. Sentencia de 16 de noviembre de 1992 y de noviembre de 1993.

Los oficios.

"En reiteradas ocasiones la Corte ha señalado que los oficios no son recurribles en amparo, pues no tiene carácter de órdenes de hacer sino meras comunicaciones accesorias de una orden principal, sin la cual aquellos no tendrían valor alguno.

Contra autos cabeza de proceso.

(sentencia de 15 de septiembre de 1992). "Del examen de la demanda la Corte llega a la conclusión que no estamos en presencia de una orden que se haya expedido con el propósito de obligar a hacer o no hacer una cosa a la señora alcaldesa del distrito de Panamá. Por el contrario nos encontramos ante una facultad que tienen todos los funcionarios del Ministerio Público de iniciar una investigación de oficio cuando consideren que existe mérito para ello a fin de determinar si se ha cometido o no un hecho delictivo.

Lo anterior es muy similar si se presentara un amparo a fin de impedir que un tribunal de justicia ejerza su función jurisdiccional de decidir los casos sometidos a su consideración.

Contra las sentencias que deciden amparo,

Es decir, no cabe amparo contra amparo. La Corte observa que se trata de una acción de amparo contra una sentencia que decide una acción de amparo. La sentencia que decide una acción de amparo no es una orden de hacer o no hacer. Es como si se presentara una demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia que decide una acción de inconstitucionalidad.

Contra medida cautelares.

Estas no se pueden suspender ni interrumpir, ni a un por un amparo de garantías constitucionales, salvo que se trate de un caso excepcional. Por ejemplo, un secuestro civil, sin fianza o ante juez incompetente.

No cabe amparo contra auto de embargo y venta judicial. No es el amparo de garantías constitucionales la vía para contrarrestar un auto de embargo y venta judicial. La Corte mediante jurisprudencia del 7 de diciembre de 1992 estableció que "los derechos que crea tener el ejecutado contra el acreedor por causa de la venta sin

trámites del proceso ejecutivo hipotecario, podrá hacerlos valer oportunamente mediante proceso sumario.

Proveído de mero obedecimiento. Si se dirige contra un proveído de mero obedecimiento que no admite recurso de ninguna clase, por lo tanta se desvirtuaría la naturaleza de este último al aceptar un medio de impugnación en su contra .

Contra avisos de licitación ya que es un acto administrativo de mero trámite.

Contra leyes o actos reglamentarios.

(legislativos, materiales o formales). Del examen de la demanda, el pleno observa inmediatamente que se trata de impugnara una norma reglamentaria de carácter general, como lo es el artículo 7° de la resolución N°.25-JD de 14 de septiembre de 1990, donde se aprueba el reglamento para otorgar y regular las concesiones en la dirección de Aeronáutica Civil. Esta norma no puede ser impugnada por su carácter general por medio de una acción de amparo, ya que tienen que ser ordenes específicas de hacer o de no hacer que violen en forma personal y directa los derechos constitucionales.

Contra actos administrativos, debe ir previamente por vía contencioso administrativa. Principio de preferencia, del contencioso administrativo y principio de definitividad. (lanzamiento de arrendatario por mora) por ser susceptible de ser impugnado mediante alguno de los procesos contenciosos administrativos.

Despido administrativo. Existen otros medios específicos y especiales de impugnación contra la destitución, la corte señala que se debe acudir a aquellos antes de promover un proceso de amparo de garantías constitucionales.

La vía procesal idónea para plantear la pretensión de la demandante es la de un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, y no la escogida por la parte demandante.

Amparo como tercera instancia.

La Corte ha sostenido en innumerables fallos, que la acción de amparo no es una tercera instancia en la que se pueda entrar a valorar las pruebas aducidas por las partes para el reconocimiento de sus pretensiones procesales. La acción de amparo es una acción autónoma, de naturaleza constitucional, tendiente a tutelar los derechos individuales y sociales

consagrados en la Constitución Nacional. (Sentencia 15 de enero de 1993, ponente Molino Mola).

Debe ser contra órdenes vigentes. No es una orden la fijación de la fecha de audiencia.

No cabe contra el Presidente de la República. (legitimación pasiva).

5.1. Demanda

Según este rasgo distintivo del amparo el ejercicio o promoción de esta acción va a implicar un proceso voluntario, dado que se inicia por voluntad y a iniciativa del afectado, no constituyendo su presentación un conflicto de intereses particulares o la existencia de una controversia entre el funcionario público que emitió la orden y la persona afectada, en la medida en que el debate jurídico se ha de centrar en el reclamo de la tutela efectiva de los derechos fundamentales que se indican como vulnerados y el acto que se dice infractor.

En este proceso existirá un demandante, quien es la persona que promueve el amparo y un demandado, que será el funcionario que emitió el acto (art. 2617 C.J.).

Sumariedad.

Por la naturaleza y finalidad de esta acción se va a requerir que la respuesta judicial, ante la posible violación de un derecho fundamental, sea expedita, habiéndose establecido en consecuencia que el amparo se “tramitará mediante procedimiento sumario”. (artículo 50 C.P.).

Acorde a lo anterior se tiene previsto, de igual forma, que el funcionario requerido (el demandado) cumplirá la orden impartida dentro de las dos horas siguientes al recibo en su oficina de la nota requisitoria. (Artículo 2621 C.J.).

En cuanto a la resolución del proceso de amparo, el tribunal que conoce de éste debe fallar “ dentro de los dos días siguientes denegando o concediendo el mismo (artículo 2624 C.J.).

El procedimiento de amparo será sumario, es decir, rápido, ágil y eficaz. Por su carácter sumario, solo cabe el incidente de recusación. Por ello, no se admite el incidente de desacato en el caso de que el funcionario incumpla la orden impartida.

Cabe aclarar que inmediatamente que el amparo funciona de manera distinta en este aspecto al hábeas corpus, que tiene una norma constitucional similar, pero que la ley les da un tratamiento distinto. El amparo se requiere poder para presentarlo tanto por el afectado como por cualquier persona que actúe

en su nombre. El hábeas corpus no hay necesidad de poder y cualquier persona puede presentarlo a beneficio del que está privado de su libertad.-

Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. (González, R.(2002), Los Desafíos de la Justicia Constitucional Panameña).

Formalidades del acto demandado.

Según si se trata de una orden de hacer o no hacer común.

Lo que al respecto dispone el artículo 2630 C.J.

El funcionario contra el cual se ha formulado la acción de amparo, una vez que haya tenido conocimiento del amparo presentado en contra de la orden por él emitida “suspenderá inmediatamente la ejecución del acto, si se estuviere llevando a cabo, o se abstendrá de realizarlo, mientras se decide el recurso, y dará enseguida cuenta de ello al tribunal del conocimiento”.

La nota característica en este supuesto es que la medida cautelar opera por mandato de la Ley, al ser ésta la que dispone la suspensión del acto tan pronto el funcionario demandado se le comuniquen la nota requisitoria en la que se le notifica del amparo promovido y del informe que debe rendir o de las copias de la actuación que debe remitir, según el caso.

Supuesto en el que el caso demandado trate de una resolución judicial.

En este caso se procederá de acuerdo a lo que al respecto se deja señalado en el artículo 2615 C.J., en el que se establece que: La interposición de la demanda de amparo no suspenderá la tramitación del proceso en que se dictó la resolución judicial impugnada o su ejecución, salvo que el tribunal a quien se dirija la demanda considere indispensable suspender la tramitación o la ejecución para evitar que el demandante sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación.

En otro supuesto, como se ve, la aplicación de la medida cautelar quedará a la discrecionalidad del tribunal que conoce de la acción de amparo, al que le corresponderá decidir si suspende ya sea la tramitación del proceso en el que se emitió la resolución judicial demandada o la ejecución de la misma y ello para evitar o impedir que el demandante se le ocasione perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación.

Con relación a este supuesto se tiene establecido que sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate y que éste no procederá contra resoluciones judiciales emitidas por el Pleno de la Corte o una de sus Salas o por el Tribunal Electoral (13).

(13). Molina, M. *La Jurisdicción Constitucional en Panamá, En un Estudio de Derecho Comparado*, Primera Edición. pág. 570.

Ejemplo de un fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia.

“El Fallo de 17 de febrero de 1995, manifestaba:

En primer lugar, se señala como parte demandada al Gerente de la Zona Libre de Colón, el señor JAIME FORD LARA, pero en el hecho segundo de la demanda se alega que quien supuestamente ha impartido la orden de no hacer es el señor GERARDO HARRIS, Sub Gerente de la Zona Libre de Colón.

Es muy claro que quien debe aparecer como demandado es el funcionario que expide la orden y no otra persona distinta.

En segundo término, el poder lo otorga una persona jurídica, la Corporación de Empresarios de Transporte de Carga de Colón, pero se dice que quien ha sido perjudicado por dicha orden es el señor LUIS E. ORTIZ y si bien es cierto que dicho señor es el presidente de la mencionada

corporación, no es esta, en cuanto persona jurídica, quien es la destinataria de la orden, sino una persona natural distinta del poderdante. En este caso el poder ha debido otorgarlo el señor ORTÍZ a título personal.

En tercer lugar en la demanda no se enuncia el concepto en el cual han sido supuestamente infringido los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Constitución.

Por último, no ha acreditado la parte demandante que efectivamente haya realizado gestión alguna para obtener copia de la orden impartida. Para estos casos basta que el demandante presente copia de un escrito en el cual a solicitado que se le entregara por escrito la orden que aquí se impugna.

Como finalización de nuestro trabajo aquí podemos apreciar que de todo lo anterior es claro que la demanda no cumple con varios de los requisitos previstos en el artículo 2610 y hoy 2619.

Acorde con los criterios jurisprudenciales que se han venido demandando de amparo, cabe mencionar lo que

ha señalado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en lo referente a la individualización o especificación del acto objeto de la acción de demanda.

La jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia, ha sido la de aceptar los amparos contra órdenes específicas dictada pro un servidor público y no contra varias órdenes, y menos aún, tratándose de órdenes dictada por distintos funcionarios.

Aquí podemos apreciar que se debe contar con un mínimo de formalidad para poder precisar quién es el afectado o persona cuyo derecho constitucional se le infringe , cual es el servidor o funcionario público que ha proferido el acto infractor, y se requiere determinar cuál es la orden de hacer o no hacer, violatorio del derecho, cuál o cuáles son los derechos violados y la forma cómo estos requerimientos que cumplidos permitirán, de admitir la demanda.

Por último se ha interpretado que cuando el acto demandado no representa tal daño grave o no se esté ante un daño inminente, la acción de amparo no será admisible, aunque la misma haya sido correctamente formulada o presentada.

5.2. Jueces o Magistrados Competentes.

El artículo 50 de la Constitución Nacional establece que el recurso de amparo será COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, norma que no especifica y no señala adecuadamente la asignación de la competencia a un tribunal determinado ni tampoco a una clase o tipo de tribunal de justicia en particular.

Podemos establecer que el ejercicio de la acción de amparo siempre se dirige en contra de autoridades que, supuestamente, han violado garantías constitucionales, nunca contra particulares. La autoridad puede realizar actos dispositivos o negativos; es decir, órdenes de hacer o de no hacer en contra de lo constitucionalmente ordenado. Este comportamiento es conocido como acto reclamado por el recurrente. En realidad, lo que se anula en todos los casos previstos por la acción de amparo, es una conducta de un funcionario o servidor público que no se ajusta a la norma constitucional, y que en los casos de las omisiones el incumplimiento de lo dispuesto como obligación de hacer por la Constitución. Uno de los elementos fundamentales del amparo, es la existencia de un daño grave e inminente, que requiere una revocación inmediata, " el concepto de inminencia refleja la calidad de algo que amenaza o esta para suceder prontamente. Por su parte, gravedad supone una importancia extrema.". Dentro del contexto del Artículo 2615 del Código Judicial, se desprende que son susceptibles de atacarse por medio de la acción de amparo, aquellas órdenes que cumpliendo con los otros requisitos exigidos, representen un daño cercano, sobreviviente, no un daño remoto o

que ya hubiese surtido sus efectos. Este comentario se encuentra ligado con el principio de urgencia, como factor a considerar al momento de decidir sobre la admisibilidad o no del amparo, y para que se proceda a la suspensión del acto impugnado, con el propósito de evitar que se produzca el daño señalado.

Un ejemplo claro de lo ya señalado, lo encontramos en que si de los informes rendidos por la autoridad demandada, no contra dicho por el amparista (actor) parece que el impetrante del amparo reclama contra una orden (de lanzamiento, por ejemplo) y éste desocupó el local en forma voluntaria, existe aceptación de dicha orden, lo cual constituye expresa conformidad del agraviado con el acto reclamado; lo que motivo que debe terminarse el proceso de amparo.

Estos aspectos son considerados presupuestos de procedibilidad de la acción, o sea requisitos necesarios para su iniciación.

El juez con jurisdicción es el facultado para administrar justicia; la jurisdicción y la competencia las requiere la ley vigente al proponerse la demanda, la que debe presentarse ante el juzgador correspondiente, ya que de lo contrario podría producirse la nulidad absoluta del proceso. La demanda de amparo debe presentarse ante jueces de la jurisdicción civil excepto la Sala Civil de la Corte, pues en tal caso conoce el Pleno, y los jueces Municipales, que por ley no conocen de la acción de amparo.

Se requiere que el Juez tenga competencia para conocer de la causa, lo que viene determinado por la ley, que en el caso del amparo es el artículo 2616 del Código Judicial.

La citada norma legal atribuye la competencia para conocer de la acción de amparo según la jerarquía del servidor público demandado. Es decir:

1. Será competente el Pleno de la Corte, si el funcionario demandado tiene atribuciones en toda la República o en dos más provincias.
2. Serán competentes los Tribunales Superiores del ramo Civil, cuando el funcionario demandado tiene atribuciones en una provincias.

Serán competentes los jueces de circuito de lo Civil, si el Funcionario

Demandado tiene atribuciones en un distrito o parte de él.

Nuestra jurisprudencia ha establecido una excepción en cuanto este presupuesto de la competencia para conocer el amparo conforme a la legitimación pasiva, que consiste en el caso de que lo demandado en amparo sea una resolución de un Juez Municipal del ramo Civil, que a su vez fue confirmada por el superior, se ha considerado que no es pertinente que el mismo (Ad-quem) actúe a su vez como tribunal de Amparo, a pesar de que sea el competente. En tal caso asumirá el conocimiento el superior jerárquico de éste último. En ese sentido ha dicho la Corte:

".....La acción de amparo debe dirigirse contra el autor de la orden de hacer o de no hacer que contiene el agravio inferido a las personas y en este caso el mismo se produjo con la decisión del Juzgado Municipal, no así la actuación del Tribunal de Apelaciones y consultas. Sin embargo, en materia

civil es necesario tomar en cuenta la peculiaridad que surge de la integración del Tribunal de Apelaciones, más aún cuando éste prohíba y confirma el fallo del Aquo, pues, siguiendo esta jurisprudencia, el mismo Tribunal Ad-que asume el papel de Tribunal de Amparo, en una postura distante de los principios de imparcialidad y objetividad, con adelanto de un perjuicio en la causa.

.....no obstante, cuando se refiere a los actos jurisdiccionales, la competencia del caso debe garantizar la disponibilidad de un Tribunal imparcial, que no haya participado en la expedición del acto, ni en su revisión y ratificación.

Así las cosas, compete al superior jerárquico conocer de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales.....”

(S.10/marzo/92-R:J.marzo 92 p.10).

En el caso previamente citado la Corte expuso un criterio contrario al del Tribunal Superior, que había considerado que no era competente para conocer de un amparo, en primera instancia, propuesto contra la Juez Primera Municipal de Panamá, Ramo Civil, sino que le correspondería conocerlo en segunda instancia. En ese sentido señaló que el amparo debió ser propuesto ante el Tribunal de Apelaciones y Consultas en lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, debido a que quien emitió la orden es un servidor público con mando y jurisdicción en un distrito.

Sin embargo, ese mismo Tribunal del Primer Circuito Judicial, Civil, había confirmado en segunda instancia el auto impugnado en amparo en,

dictado originalmente por el Juez Municipal. De allí que la Corte consideró que en base a los principios de imparcialidad y objetividad no era viable que conociese del amparo.

5.3. Orden de Hacer o de no Hacer

El Dr. Fábrega, Jorge, indica "que en el fondo tal como lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 50:

"Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de (14)

(14). . Molino Mola, Edgardo, La Jurisdicción Constitucional en Panamá, 1ra. Edición, 1998, Pág.565.

competencia de los tribunales judiciales”.

Esta acción de amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la constitución que revista la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata. (14).

Se entiende por orden un mandato imperativo para que se haga algo o deje de hacer alguna cosa. Para que la orden expedida por el funcionario pueda ser objeto del recurso de amparo, tiene que ser, como ya se ha dicho, violatoria de un derecho o garantía constitucional. La orden puede ser expedida por cualquier funcionario, del órgano ejecutivo, del legislativo o del judicial, así como por cualquier funcionario municipal, Provincial o de instituciones autónomas o semiautónomas. La constitución establece dos excepciones al recurso de amparo establecido en el artículo 50, No proceden los amparos contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia o de sus

salas, ni tampoco contra las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Electoral, dispuesto en los artículos 204 y 137.

El objeto del amparo es restablecer inmediatamente un derecho constitucional violado. La prohibición de una manifestación, el cierre de un medio de comunicación social o de un espacio radial o televisivo, la violación del derecho de propiedad, el derecho a la educación, a la religión, etec". Este tipo de violaciones requieren una acción inmediata, como es el amparo de garantías.

5.4. Admisión o In admisión

La función de admitir o no el amparo es atribución exclusiva de los magistrados de la Corte y no se requiere ninguna previa calificación de parte de tribunales distintos o de funcionarios de menor jerarquía dentro del mismo tribunal de amparo, para la admisión de la acción que tutela los derechos constitucionales. Si el amparo se admite, lo acoge únicamente el magistrado sustanciador, si el amparo no se admite entonces es necesario que sean todos los magistrados los que participen en la inadmisión de la acción. El 12 de noviembre de 1991, un abogado de la localidad, acusó a los magistrados de la Corte suprema, ante la Asamblea Nacional, por considerar que estaban violando la ley, precisamente respecto a la forma de admisión del amparo que venimos comentando. Sostenía el abogado en mención que tanto la admisión como la in admisión debían ser de competencia exclusiva del magistrado sustanciador, por establecerlo así los artículos 110 y 2616 del Código Judicial. El primero de los artículos establece que el magistrado

sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y providencias para adelantar el asunto y contra ellos sólo tiene la parte que se considera perjudicada el recurso de apelación para ante el resto de los magistrados.

El párrafo final del artículo 2616 dice que el apelante podrá sustentar la apelación al interponerla y el tribunal enviará el expediente al superior para que decida la alzada. El primero de los artículos citados, el 110, se encuentra en el capítulo II del libro I, referente al modo de sustanciar los negocios en la Corte Suprema y el segundo, el 2616, en el capítulo IV, del libro IV que trata sobre la apelación de la acción de amparo.

La Corte Suprema, desde que se estableció la acción de amparo en 1941, ha entendido que las decisiones de la Corte en materia de amparo son inapelables por ser la Corte el máximo Tribunal de Justicia en el país.

Sobre este punto, el artículo 2624 dispone lo siguiente:

“Artículo 2624: cumplido por el funcionario o corporación el requerimiento, el tribunal fallara dentro de los dos días siguientes denegando o concediendo el amparo, de acuerdo con las constancias de denegando o concediendo el amparo, de acuerdo con las constancias de autos”

Sabemos que en la práctica este plazo procesal es difícil de cumplir, ya que es el juzgado de turno, en el caso de los juzgados de circuitos civil, el competente para conocer de los amparos y debido al procedimiento sumario

que se le debe imprimir, los mismos no son sometidos a las reglas del reparto.

Sucede en muchos casos que con el proceso de amparo, al modificar la ley trajo como consecuencia la proliferación de los mismos, en un juzgado de turno se puede llegar a presentar hasta cinco acciones de amparo, lo que conllevaría que, aun ciñéndose a un estricto procedimiento sumario, dichos amparos no serán resueltos en el breve plazo que establece la ley.

En cuanto a la resolución que resuelve un amparo la misma tiene un carácter de sentencia y hace transito a cosa juzgada, según lo que establece el inciso final del artículo 2630.

Sucede en la actualidad que los tribunales al momento de pronunciarse sobre si concede o deniega el amparo en la parte resolutive, no dicen mas nada al respecto. Muchas veces sus fallos son parcos al decir, Por ejemplo: "SE CONCEDE LA ACCION DE AMPARO", o "DENIEGA A ACCION".

En casos específicos en que se concede un amparo, el funcionario que dictó la orden atacada al conocer la decisión del Tribunal, tiene que tomar las medidas adecuadas fin de corregir su actuación, debido a que el tribunal del amparo nada dice al respecto.

El acto de modificación de la sentencia que resuelve un amparo tiene un procedimiento especial y distinto que cualquier otra sentencia que se dicte en otro proceso. El artículo 2625 así lo establece cuando expresa lo siguiente:

"ARTÍCULO 2625: Dictado el fallo le será notificado inmediatamente por edicto al actor ya funcionario que dicto la orden motivo de la acción". Lo especial y distinto de esta notificación radica en el sentido de que en procedimiento de lo preceptuado en el artículo 2625, no importa la hora en la que el fallo se dé, ya que de manera inmediata le será notificado por edicto a las partes. Sabemos que en la practica no ocurre lo mismo con las resoluciones que se deban notificar de esta forma. Pero en el amparo, por ejemplo ocurre que la norma, la hora de notificación del edicto que lo notifica. En cambio en otros procesos las notificaciones que hayan que hacerse por medio de edicto se fijan por hora que fija el Tribunal, que en la practica lo es a las 10:00 de la mañana.

Esta manera de notificación inmediata, creemos nosotros que es muy efectiva y debe de mantenerse por las siguientes razones:

A) Le imprime a esta acción la efectividad y celeridad que la caracterizan;

Evita que las partes a las cuales le sea adversa una sentencia, eluda su notificación.

5.4.1. ANÁLISIS CRÍTICO JURISPRUDENCIAL

Nuestro análisis lo complementamos con el libro Las Garantía Jurisdiccionales Constitucionales en Panamá, del Dr. **César Quintero**, p.17.

(16)

1. La acción de amparo en Panamá sólo puede ser interpuesta por violación de derechos constitucionales. No procede, pues, por la infracción de derechos contenidos en leyes ni en tratados internacionales, que en Panamá, por fortuna, sólo tienen valor de ley ordinaria. El amparo es, así, una garantía jurisdiccional que sólo protege derechos establecidos en la Constitución.

2. El artículo 50 de la Carta Fundamental se refiere, sin establecer distinciones, a “los derechos y garantía que esta constitución consagra”. Sin embargo, a este respecto ha prevalecido por lo general la tesis de que sólo pueden ser objeto de la acción de amparo los derechos contenidos en el Título III de la Constitución, denominado Derechos y Deberes Individuales y Sociales. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido cambiante sobre el particular, pero generalmente ha favorecido la referida tesis. Sobre este tema considero que la garantía del amparo constitucional no debe necesariamente circunscribirse a los derechos establecidos en el referido Título III de la Constitución.

3. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido que no procede la acción de amparo cuando las normas constitucionales, cuya violación se invoca, son de carácter programático, es decir, cuando carecen de sustancia normativa. En estos casos la Corte exige que dichas normas sean, al menos, invocadas conjuntamente con otras normas constitucionales

de contenido normativo. Considero saludable esta jurisprudencia, toda vez que nuestra Constitución infortunadamente contiene, como la mayoría de las latinoamericanas, demasiados preceptos decorativos, insustanciales y demagógicos que, si son tomados en serio por las autoridades jurisdiccionales, conducirían a soluciones contraproducentes y absurdas.

4. Los actos susceptibles de amparo constitucional han de provenir exclusivamente de autoridades públicas. Por tanto, no procede amparos de derechos constitucionales por actos provenientes de particulares, a diferencia de otros países latinoamericanos.

5. La locución "orden de hacer o de no hacer" ha sido siempre interpretada en el sentido de que debe tratarse de un acto concreto individualizado. En consecuencia, nunca se han admitidos amparos contra normas legales o reglamentarias que el demandante considere violatorias de derechos o "garantías" constitucionales. En Panamá no cabe, pues, el amparo contra normas o actos jurídicos de carácter general.

6. Se ha planteado siempre el problema de si las resoluciones o sentencias jurisdiccionales entrañan órdenes concretas de hacer. No cabe duda de que el acto jurisdiccional es, por excelencia, individualizado. En esto se diferencia sustancialmente de los actos legislativos y administrativos que puedan ser, tanto de carácter general, como individual. El auténtico acto jurisdiccional decide siempre un caso concreto y sus efectos jurídicos no

deben exceder de él. De ahí que, en cierto modo quizá por esto decía Moscote que: "En realidad, la mayor parte de las decisiones judiciales son verdaderas órdenes explícitas o implícitas". No obstante lo expuesto, la ley y la jurisprudencia nacionales no siempre han admitido la procedencia de acciones de amparo contra decisiones jurisdiccionales. Dentro de los preceptos reformados establece lo siguiente; " La interposición de la demanda de amparo no suspenderá la tramitación del proceso en que se dictó la resolución judicial impugnada o su ejecución salvo que el tribunal a quien se dirija la demanda considere indispensable suspender la tramitación o la ejecución para evitar que el demandante sufra perjuicios graves evidentes y de difícil reparación". B) "Solo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

7. Toda acción de amparo debe ser admitida sin demora por el tribunal competente " si estuviere debidamente formulada y no fuere manifiestamente improcedente". Esta última parte fue un requisito introducido por el Decreto Gabinete 50 de 1990. Antes de esta reforma, el tribunal del caso debía admitir toda demanda de amparo que estuviera "debidamente formulada".

8. El tribunal, al acoger el amparo, debe inmediatamente requerir a la autoridad acusada que envíe la respectiva actuación o, en su defecto, un informe sobre los hechos en que se funda la pretensión del demandante. La

autoridad requerida deberá informar al tribunal dentro de las dos horas siguientes al recibo de la nota requisitoria. Además, "suspenderá inmediatamente la ejecución del acto, si se estuviere llevando a cabo, o se abstendrá de realizarlo mientras se decide el recurso". Si la autoridad demandada no suspendiere la ejecución del acto o insistiese en realizarlo, el tribunal del caso procederá a suspender provisionalmente la orden acusada.

El expuesto procedimiento constituye una de las modalidades típicas del amparo panameño. Como se ha visto, es la autoridad demandada la que debe suspender la ejecución del acto o abstenerse de efectuarlo, tan pronto el tribunal del caso le notifique que ha acogido el amparo; y si la autoridad demandada no hiciere lo que la ley le exige, entonces el tribunal lo hará en lugar de dicha autoridad.

9. Otra cuestión que surge con respecto al amparo es la del término dentro del cual puede ser interpuesta la correspondiente acción. Ni la Constitución ni la Ley dicen nada sobre el particular. La Corte Suprema, dentro de sus tendencias a establecer normas supletorias legales, ha optado por fijar un término de cuatro meses, a partir de la fecha de emisión de la respectiva orden.

El referido término es, sin duda, razonable. Pero, no lo es el hecho de que sea un tribunal de justicia quien lo establezca y mucho menos razonables es que el tribunal en unos casos invoque dicho término y en otros

lo ignore. A fin de evitar la aludida incertidumbre, en un anteproyecto de Constitución que, como ejercicio esencialmente académico, elaboró el año pasado el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (IDEN) fue insertado el siguiente precepto: “La acción de amparo contra órdenes de hacer o de no hacer prescribe cuatro meses después de emitida la orden”.

Ejemplo de un Recurso de Amparo Penal, admitidos por la Corte Suprema de Justicia.

1. Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por el Licenciado JUA PAULINO RODRIGUEZ, en representación de ANAYANSI RANGEL, contra la orden de Hacer contenida en el Auto de 2 de noviembre de 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Panamá 6 de mayo de 2002.

El Licdo. Paulino , interpuso acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Auto de 2 de noviembre de 2000, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Antecedentes del caso:

1. El Juzgado 1º de Circuito de Panamá, Ramo Penal, ordenó la ampliación del sumario seguido contra la amparista y otras personas por delito contra el patrimonio y la fe pública en perjuicio de Casa Egeo, S.A..
2. Cumplida la ampliación, dicho Juzgado sobreseyó definitivamente a las imputadas de los cargos y dispuso la compulsión de copias a la esfera municipal en lo relacionado con el delito contra la fe pública;

3. Contra esa decisión la Fiscalía 2ª de Circuito apeló y el Segundo Tribunal Superior, al conocer del recurso ordenó otra ampliación del sumario mediante Auto 24 de mayo de 2000, por considerar que la investigación estaba imperfecta;

Contra esta última ampliación se interpuso una acción de amparo de garantías constitucionales y el Pleno de la Corte, mediante Sentencia de 19 de julio de 2000, lo concedió y revocó la resolución que ordenó la ampliación;

4. Con vista de lo anterior, la Fiscalía 2ª remitió el expediente penal al Juez de la causa a fin de que éste a su vez lo enviara al Segundo Tribunal Superior, a fin de que esta instancia superior se pronunciara sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto;

1. El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Resolución de 2 de noviembre de 2000, revoca la sentencia recurrida y ordena el agotamiento del sumario de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la citada resolución. Contra esta última orden se promovió la acción de amparo porque, según la amparista, la figura del agotamiento del sumario no existe en nuestro Código de Procedimiento Penal.

La amparista considera que la orden atacada viola los artículos 32 y 18 de la Constitución Política.-

CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE.

Hechas estas consideraciones el Pleno está en condición de señalar que la orden de "agotamiento del sumario" dada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia viola el artículo 32 de la Constitución Política, el cual consagra el principio del debido proceso. La Corte ha sostenido en innumerables jurisprudencia, que uno de los aspectos que comprende esta garantía fundamental consiste en el derecho que tiene toda persona de ser juzgada conforme a los tramites que la Ley establece. En el caso por examen, resulta claro que el organismo demandado ordenó el cumplimiento de un trámite no previsto por la Ley dentro del procedimiento penal, razón por la cual procede acceder a la acción de amparo impetrada.

En cuanto a la infracción del artículo 18 constitucional se descarta por cuanto esta norma no consagra ninguna garantía fundamenta.

Es así como se Concede el amparo solicitado por el licenciado Paulino Rodríguez, y en consecuencia se Revoca la orden de hacer relativa al agotamiento del sumario, contenida en la parte resolutive de la Resolución de 2 de noviembre de 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

5.5. CONTRA DECISIONES JURISPRUDENCIALES

Lo primero que observa la Corte es que se trata de una acción de amparo contra una sentencia que decide una acción de amparo. La sentencia que decide una acción de amparo no es una orden de hacer o no hacer. Dicha sentencia decide sobre la conformidad o no de la orden impugnada como violatoria de los derechos y garantías constitucionales, concediendo o denegando, según la decisión del tribunal de amparo. Por ello no cabe amparo, que es una acción constitucional, contra una sentencia que decide un proceso constitucional de amparo. Es como si se presentara una demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia que decide una acción de inconstitucionalidad.

Igualmente es interesante observar que no cabe demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia de amparo. En sentencia de 10 de diciembre de 1993, la Corte dijo:

Doctrina

“Lo primero que observa la Corte, es que se pretende con la acción instaurada, atacar una decisión proferida en un proceso constitucional, atacar una decisión proferida en un proceso constitucional de amparo de garantías, lo que implicaría que este tribunal tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una sentencia que había resuelto una controversia constitucional. Ello entrañaría un doble examen sobre la constitucionalidad del punto medular del negocio, equivaliendo esta actuación a concederle otra

instancia indirecta a los procesos de amparo mediante demandas de inconstitucionalidad, y tal proceder es completamente incongruente con la naturaleza de los procesos constitucionales.

5.5.1. Requisitos

Profesor Rigoberto Gonzáles M., nos indica que dentro de los requisitos que debe contener la demanda:

1. Esta debe promoverse a través de apoderado judicial, por medio de la demanda, la que para su admisión por parte del tribunal que ha de conocerla se establecen unos requerimientos mínimos a cumplir, así lo expresa el artículo 2619 del C.J., donde se debe mencionar expresamente la orden impugnada.
2. Nombre del Servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió;
3. Los hechos en que funda su pretensión; y
4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido.

Con los requisitos de forma para que la demanda por la cual se promueve la actuación de amparo de las garantías fundamentales sea admisible, consiste:

Los comunes a toda demanda y a los que se refiere el artículo 665 del Código Judicial y que tienen que ver básicamente con las generales de las partes, es decir, el demandante quien es el que ejerce la acción y el

demandado, en este caso, el funcionario contra el cual se presenta el amparo .

1. Debe hacerse, como lo exige el precepto transcrito, una mención expresa del acto impugnado, o sea, en el que se recoge la orden de hacer o no hacer infractora del derecho o derechos constitucionales cuya tutela se reclama.
2. Consignar el nombre del servidor público o funcionario, institución o corporación que emitió o profirió la orden que se impugna como violatoria de la Constitución.
3. Deberán quedar consignados, de manera clara y precisa, los hechos en los que se fundamenta la pretensión constitucional y que motiva el que se haya demandado la orden que se dice infractora de un derecho o derechos previstos en la Constitución. Constituirá el relato de los hechos producto de los cuales es la orden impugnada.(17)

(17). Gonzáles, R. Los Desafíos de la justicia Constitucional Panameña, Panamá 2002.

6. FENÓMENOS PARA LA INTERPRETACIÓN

La Jurisprudencia en cuanto a la Admisibilidad del amparo constitucional contra resoluciones judiciales.

La Corte Suprema de Justicia, a través de la historia nacional, ha sido muy variante en cuanto a la postura adoptada referente a la admisibilidad del amparo constitucional contra resoluciones judiciales. Dichas posturas pueden haber sido orientadas por la situación jurídica, política, social y económica del país, las cuales originaron diversas etapas o períodos de interpretación, debido a la ausencia de una legislación adecuada.

Guiándonos por el patrón del Dr. Jorge Fábrega, indicamos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación a la admisibilidad del amparo constitucional contra resoluciones judiciales se divide en cuatro período restrictivo y el período actual o de interpretación permisiva restringida, los cuales pasaremos a analizar.

Período inicial o de interpretación restrictiva.

Inicialmente sólo se admitía el amparo contra órdenes de hacer o de no hacer emitidas o dictadas por un funcionario administrativo que violaran un derecho constitucional. Además, éstas órdenes no debían revestir el carácter de resolución y contra ellas no debía proceder ningún recurso ordinario.

En tal sentido podemos observar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 18 de octubre de 1946, la cual plantea la posición restrictiva, indicando lo siguiente:

"Observa la Corte que como se establece en el mismo escrito en que se interpuso el recurso, la resolución acusada fue dictada en juicio de divorcio que se ventila en el Juzgado Primero de Circuito de Panamá, y esta Superioridad tiene establecido que el recurso de Amparo de Garantías Constitucionales no tiene aplicación en las controversias civiles para las cuales las leyes procesales proveen otros recursos ordinarios"

La Corte Suprema de Justicia en ésta época consideraba que el amparo era, única y exclusivamente viable contra resoluciones de funcionarios administrativos. Por tanto, no lo era contra decisiones judiciales.

Podemos apreciar las restricciones en la aplicación del amparo constitucional, a pesar que la Constitución y la Ley indicaban similar.

Período de Interpretación Extensiva.

En este período la Corte Suprema de Justicia da un cambio radical a la postura presentada en su jurisprudencia hasta el año de 1970. En esta época la Corte extiende la aplicación del amparo constitucional a cualquier acto administrativo o judicial arbitrario, que violara la Constitución de modo directo

o incluso indirecto. A demás, se puede observar que en ese periodo la jurisprudencia interpretó los artículos 17 y 18 de la Constitución, dándoles un sentido de garantía, cuando éstos habían sido considerados normas programáticas. De forma tal, que la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales inferiores acogían los amparos constitucionales cuando se violaban o se desconocían normas procesales fundamentales, como el debido proceso y otros.

“Sentencia 23 de diciembre de 1977:

....aún cuando la norma constitucional antes (art.17), en opinión de algunos autores, tiene valor meramente programático, no es menos cierto que en casos como el demandado por este recurso extraordinario, constituye una verdadera y garantía individual susceptible de ser violada o desconocida por los servidores públicos, cuando su conducta no se ajusta a los término de la Ley vigente.

El cumplimiento de la Ley obliga a todo, gobernantes y gobernados y es precisamente el artículo 17 de la Constitución la garantías primordial que asegura en un Estado de Derecho la fiel observancia de la Ley por parte de las autoridades, toda vez que dicha norma les impone en ocasiones el deber frente a la comunidad de cumplir y hacer cumplir. Semejante garantía hace descansar todo un sistema jurídico sobre bases sólidas y efectivas y desconocerla sería tanto como negar la existencia del Derecho”.

En esta sentencia se observa como la Corte Suprema de Justicia en este período admite amparos constitucionales contra resoluciones judiciales fundados en el artículo 17, el cual es considerado en este período como un pilar fundamental del Estado de Derecho.

En este periodo la Corte suprema admite amparos constitucionales contra resoluciones judiciales fundadas en violaciones a los artículos 18 y 31 de la Constitución, sin considerarlos normas programáticas. Así, en la sentencia de 20 de noviembre de 1980, antes citada, la Corte Suprema de Justicia manifestó:

"Al admitir, tramitar o decidir una demanda para la cual la Junta de conciliación y Decisión no tenía conforme la Ley, competencia para conocer, se incurre en el fallo en una evidente nulidad y violación al artículo 31 de la Constitución Política de 1972 que prohíbe el juzgamiento a las personas materiales y jurídicas por autoridades que no sean competentes y menos aún, sino observan los trámites, legales correspondientes".

Se observa nuevamente como la Corte suprema de Justicia admite un Amparo Constitucional contra una resolución judicial por violación del artículo 31 de la Constitución Política de Panamá de 1972 (actualmente es el 32 de la Constitución Nacional).

Período de Interpretación Restrictiva

En la década de los años ochenta (80) la Corte suprema de Justicia, adoptó nuevamente una interpretación restrictiva con relación a las resoluciones judiciales, ya que las excluyó de ser atacadas por el Amparo Constitucional.

Los argumentos de la Corte fueron que existía una necesidad de limitar el uso del Amparo Constitucional.

Vemos como la jurisprudencia en este período, vuelve a la postura adoptada en el período inicial, el cual va desde los años 40 hasta inicio de los años 70 aproximadamente. Una manifestación de lo explicado, se observa en la sentencia del 28 de enero de 1981, en que se sostuvo lo siguiente:

"La Corte ha considerado necesario revisar su jurisprudencia y ubicar la acción de amparo dentro del concepto histórico que sirvió a su creación.

Esto es, precisar que la acción de amparo sólo tiene lugar contra órdenes arbitrarias expedidas por los servidores públicos. No es una acción para enervar resoluciones judiciales para las cuales la Ley prevé medios de impugnación dentro de los procesos ordinarios.

El Amparo es un Recurso Extraordinario en orden a la impugnación de actos extraordinarios, no normales, como son las órdenes arbitrarias que eventualmente expidan los servidores públicos.

Ello no significa sin embargo, que los servidores públicos no infrinjan las leyes o la Constitución; empero, como remedio a esas violaciones legales y constitucionales existen los Recursos Ordinarios y el autónomo de inconstitucionalidad, que no suspende el acto, por tanto no produce la paralización de los negocios. No escapa al criterio de la Corte que si el mismo abuso del Recurso de Amparo que se comete en los procesos judiciales Ejecutivos traerían como consecuencia también una paralización de todo los servicios públicos”.

Esta interpretación de la Corte Suprema de Justicia fue equívoca y coarta el derecho de atacar las actuaciones de funcionarios judiciales mediante el amparo constitucional, por las siguientes razones;

1. La Constitución Política de la República de Panamá de 1972 reformada por los actos reformativos de 1978, en su artículo 49 lo consagró en relación a las resoluciones judiciales.
2. Como quiera que en nuestro concepto el amparo es una garantía constitucional que tienen los particulares y que a los particulares se les está permitido hacer todo aquello que la Constitución o la Ley no le prohíben, se llega a la conclusión que está permitido a los particulares

atacar las actuaciones de funcionarios judiciales mediante amparo. Contrario sensu, si a los funcionarios solo se les está permitido hacer aquello que la norma constitucional o legal les faculta, al no permitir que los particulares utilicen sus garantías, aquellos están infringiendo la norma constitucional.

3. Se llega a la conclusión de que es inconstitucional excluir las resoluciones judiciales, es decir, las actuaciones de los funcionarios judiciales, de la aplicación del amparo constitucional.

Período actual o de Interpretación Permisiva Restringida.

Al estudiar las diversas posturas legislativas adoptadas en la República de Panamá, hemos determinado, que a partir de la vigencia del Decreto de Gabinete No. 50 de 20 de febrero de 1990, se establece la admisibilidad de la garantía constitucional del amparo contra resoluciones judiciales sujeto a una serie de limitantes consagrándose en la propia norma restricciones que como veremos han sido desarrolladas a lo largo del recorrido jurisprudencial que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia panameña.

Si tomamos en consideración que anteriormente la Corte adoptó la posición de no declarar la inconstitucionalidad de la prohibición en entablar amparo contra resoluciones judiciales y la entrenamos con la posición adoptada en el citado Decreto de Gabinete, vemos que no puede decirse que la

constitución, cuya regulación del amparo era la misma establecía una postura u otra, sino que su desarrollo ha dependido de preceptos legislativos y criterio jurisprudenciales.

Consideramos pues, que la Corte no declaró inconstitucional la norma anterior, por temor de que ésta permitiese la utilización del amparo contra las resoluciones judiciales de manera totalmente amplia y estricta.

El establecimiento de restricciones a la interposición del amparo constituye un proceso, pues no permite la evolución hacia un Estado de Derecho.

Críticas a la Legislación Nacional sobre la permisibilidad del Amparo Constitucional contra Resoluciones Judiciales.

Cuando se habla de la legislación nacional respecto al amparo constitucional contra resoluciones judicial, estamos haciendo referencia al Decreto de Gabinete No.50 de 20 de febrero de 1990, el cual constituye la única forma de rango legal que reglamenta lo pertinente al amparo constitucional contra los actos del poder judicial.

Cabe destacar que antes de que se emitiera el referido Decreto de Gabinete, la única norma que regulaba el amparo constitucional contra

resoluciones judiciales era el artículo 2606 (hoy 2615) del Código Judicial en su párrafo final, el cual establecía la prohibición para atacar las decisiones jurisdiccionales por medio del amparo.

Así, el artículo 2615 del Código Judicial, antes de ser reformado por el Decreto de Gabinete No. 50 de febrero de 1990, estuvo redactado así:

“Toda persona contra la cual se expida o ejecute por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, tendrá derechos a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

La acción de amparo de garantías constitucionales a que se refiere este artículo, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales.

Esta acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de actos que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, que revisten la forma de una orden de hacer o de no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren una revocación inmediata.

Podemos indicar que la acción de amparo de garantías no procede contra las decisiones jurisdiccionales.

Observamos pues que el código de 1987 estableció expresamente la prohibición de atacar por medio de amparo las decisiones jurisdiccionales, las cuales son actuaciones de servidores públicos que por lo general revisten la forma de órdenes de hacer o de no hacer. Razón por la cual consideramos que dicha norma violenta claramente el precepto constitucional, debido a que la Constitución indica: cualquier servidor público. Teniendo claro que los funcionarios del Órgano Judicial son servidores públicos que no deben ser excluido de ser atacados por el amparo.

No se debe olvidar que el amparo busca proteger a los ciudadanos del abuso de las autoridades que por error o por intención desconocen las normas constitucionales mediante sus actuaciones como servidores públicos. De modo que esta garantía constitucional no debe ser limitada por normas de rango inferior, desconociendo la esencia de dicha institución de garantía.

El artículo 2615 estableció una restricción o limitación a la garantía constitucional del amparo, la cual servía como medio de defensa para los servidores públicos tenían como prácticas actuar de forma arbitraria y contraria a los derechos fundamentales.

Luego de ser reformado el artículo 2615 del Código Judicial, por el Decreto de Gabinete No.50 de 1990, el mismo establece en su último párrafo:

“La acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse contra resoluciones judiciales, con sujeción a las siguientes reglas:

- 1) La interposición de la demanda de amparo no suspenderá la tramitación del proceso en que se dictó la resolución judicial impugnada o la ejecución, salvo que el Tribunal a quien se dirija la demanda considere indispensable suspender la tramitación o la ejecución para evitar que el demandante sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación.
- 2) Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotados los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.
- 3) En atención a lo dispuesto en los artículos 137 y 204 de la Constitución Nacional, no se admitirá la demanda en un proceso de amparo contra las decisiones jurisdiccionales expedidas por el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus Salas”. (18).

Vemos pues, como pasa la legislación nacional referente al amparo constitucional contra resoluciones judiciales, de una postura negativa a lo que nosotros consideramos una postura permisiva restringida, estableciendo la posibilidad de presentar amparos en contra de las decisiones judiciales, pero sujetos a las reglas que indica el artículo 2615 del Código Judicial, después de la reforma.

En relación a las reglas que establece el artículo 2615 del Código Judicial vigente, referente al amparo contra resoluciones judiciales podemos indicar que estamos de acuerdo con algunas de esas. Y estamos en oposición a determinadas reglas que no hacen más que desvirtuar la esencia y el espíritu de la garantía constitucional del amparo.

En cuanto a sus reglas, podemos mencionar la número uno, la cual establece que la interposición del amparo no suspenderá la tramitación del proceso en que se dictó la resolución impugnada o la ejecución a menos que el tribunal ante el cual se presenta el amparo "considere" indispensable suspender la tramitación o la ejecución con el objeto de evitar que el demandante resulte grave e irreparablemente perjudicado: nos parece que la norma es acertada, puesto que sirve para evitar los abusos de quienes ven en el amparo un medio dilatorio, pero consideramos que la norma se quedó corta al establecer que el tribunal que conoce del amparo puede suspender el trámite del proceso que dio origen a la resolución atacada, puesto que concede al magistrado o juez una capacidad discrecional muy amplia, que puede traer como consecuencia abusos o equivocaciones.

Sin embargo, creemos que la solución a este problema sería establecer multas y sanciones considerables, y no simbólicas, tanto al abogado como a su representado. De forma tal, que dejen ver el amparo como un medio para dilatar procesos, que no les va a causar inconvenientes, sanciones, ni multas realmente significativas, quedando impunes después

de causar perjuicios, tanto a su contraparte como a la misma administración de justicia. Así la suspensión del trámite del proceso que dio origen a la resolución atacada sería automática al admitir el amparo.

La regla número dos, indica que sólo será procedente el amparo constitucional cuando se hayan agotado todos los medios y trámites previstos en la ley para impugnar la resolución judicial atacada por el amparo.

Se nota el punto principal por el cual consideramos que nuestra legislación en relación al amparo constitucional contra resoluciones judiciales es permisiva pero restringida, porque a pesar de que la norma analizada admite el amparo contra resoluciones judiciales, presenta obstáculos para una expedita aplicación del amparo. Podemos indicar que esta disposición es contraria a las necesidades y requerimientos actuales, ya que a medida que pasa el tiempo los ciudadanos necesitan mayor protección debido a que sus derechos fundamentales cada día son más vulnerados por aquellas autoridades que el ejercicio de sus funciones públicas creen tener una "patente de corso" para incurrir en arbitrariedades y abusos.

Otro argumento contra esta regla número dos podría ser que quien conoce del amparo puede ser el mismo superior jerárquico que en un momento dado substanciará el proceso de apelación.

Por otra parte, que sentido tiene una garantía que para que se pueda invocar tiene antes que agotarse una serie de trámites que para el momento que hayan concluido no tendrá sentido utilizar la garantía, pues no habrá nada que proteger puesto que por el tiempo transcurrido ya se causaron daños irreparables. Por eso consideramos que el amparo debe dársele un

trámite sumarial, a fin de restablecer los derechos fundamentales violados, ya que esto es la esencia y el espíritu del amparo constitucional. En el caso de que la institución haya sido utilizada debidamente como a su abogado y así evitar abusos de la figura.

Como regla, número tres, podemos mencionar que establece la prohibición de presentar amparos contra las decisiones jurisdiccionales expedidas por el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus Salas, no es más que una repetición de las normas constitucionales. Observamos que esta regla no trajo ningún cambio, pues lo único que hizo fue reiterar lo que ya está dispuesto en los artículos 137 y 240 de la Constitución Nacional.

Pues consideramos que si se creara el Tribunal Constitucional se podría hablar de lo que es la revisión de las decisiones del Tribunal Electoral y las Salas de la Corte. (19).

(18). Decreto de Gabinete No. 50 de febrero de 1990.

(19). Fábrega, J., Código Judicial, Título III, El R. de Amparo.

6.1. TERMINO PARA LA DECISIÓN

El recurso de amparo no tiene un término específico en el derecho panameño, pero ha dejado de ser imprescriptible, ya que la jurisprudencia panameña ha visto necesario establecer el término para la interposición de la acción.

7.1. Recursos

Según el artículo 2625, anteriormente citado, ambas partes el actor y el servidor público que dicto la orden puede apelar:...”para lo cual dispone el termino de un día a partir de la notificación”.

Vale la pena hacer una aclaración en este punto , debido a que en la práctica no se entiende exactamente cuál es la interpretación de la norma.

El termino de un día de que hace referencia el artículo 2625 se comienza a contar a partir de la fecha y no de la hora en que se desfijo el edicto de notificación. Así tenemos que si un edicto es fijado a las 03:00 de tarde de un martes, la parte que desea apelar tendrá entonces hasta la 05:00 de la tarde del día miércoles para interponer su recurso.

Esto se debe a que en este caso se aplica la norma general que se encuentra establecida en el párrafo final del artículo 511 de código Judicial que dispone lo siguiente:

ARTICULO

511.....

..... Los términos de días vencerán cuando el reloj del Tribunal marque las cinco de la tarde del último día del termino.

Vemos, pues, la razón por la cual los términos se le extienden, en estos casos especiales, hasta las cinco de la tarde y no hasta las tres de la tarde.

Otras de las confusiones que se dan en la practica, en cuanto a la apelación cuando se podrá sustentar el recurso.

La norma no es clara al respecto, surgiendo una duda en el inciso final del artículo 2625, cuando señala que:

"... El apelante podrá sustentar la apelación al interponerla y el tribunal evitara el expediente al superior para que decida la alzada".

7.1.1. Apelación

Una de las primeras incidencias que se puede originar cuando un amparo se concede es, según el artículo 2627 del Código Judicial, el derecho que tiene el proponente del mismo para demandar al funcionario que expidió la orden, por la vía ordinaria la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

Con anterioridad, o sea, con la Ley No.46 de 1956, este mismo artículo 2627 que era el 55 de la ley mencionada, mantenía la disposición que en el caso de que el amparo se declare temerario, el demandante era condenado a pagar a favor del Estado una multa. En la práctica no resultó, ya que se consideró siempre como injusta para los que escogían esta vía para solicitar la protección de algunos de sus derechos y garantías constitucionales lesionados.

En cuanto a los impedimentos a que están sujetos los Magistrados y Jueces, el artículo 2628 los regula de una manera clara. Pero esta disposición fue considerada por algunos juristas como sin sentido, claro está, antes de que el amparo se hiciera extensivo a las decisiones del órgano judicial, debido a que si el amparo no prosperaba contra los actos o decisiones jurisdiccionales, no vemos cuál era el impedimento que pudrían manifestar los jueces y magistrados.

Ahora bien, la nueva disposición en materia de amparo, sí ha hecho posible que este artículo 2628 y hasta el 2629, sean reactivados, debido a que se denota un incremento en los impedimentos manifestados tanto por los Magistrados como por los Jueces. Estos impedimentos se deben más que todo a que la mayoría de los Magistrados y Jueces que conforman el nuevo Órgano Judicial conocieron o participaron activamente en muchos de los casos que son impugnados mediante amparo. En cuanto al incidente de recusación de que nos habla el artículo 2629, podemos decir que no se han dado muchos con el nuevo cuerpo que conforman los Magistrados y Jueces

del Órgano Judicial, pero siempre será una medida que tendrá el particular afectado, o el funcionario demandado, cuando en una acción de amparo algún Magistrado o Juez, que caiga dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 2628, no la manifieste.

Otra de las incidencias que se pueden dar en un amparo, según el artículo 2630, es que las providencias que se dicten, como, por ejemplo, la de admisión de la acción son inimpugnables, o sea, irrecurribles, terminología que consideramos más apropiadas.

En este artículo existe una excepción, y es que sólo la resolución que no admita el amparo es recurrible. En la práctica, este punto no ha quedado claro. El mismo puede dar margen a interpretaciones que no serían las más correctas; ¿por qué? Primero que todo porque no se identifica con un nombre técnico (sentencia o auto), sino que se le da el título de resolución a la que no admite un amparo, además, que al excluir esta resolución de las inimpugnables, se entiende que la misma puede ser objeto de algún recurso, más no lo identifica, dando esto margen a que los proponentes del amparo logren su dilatación al interponer cualquier otro recurso que no sea el de la apelación que el que tiene derecho el amparista cuya acción no sea admitida.

Sucede muchas veces que se promueven amparos sucesivos ante Tribunales distintos cuando éstos han rechazado o no han admitido una acción de amparo propuesta ante ellos.

A que se debe esto, a que la resolución de plano que no admite un amparo, a pesar de que no se le da un nombre técnico, la misma tiene carácter de auto.

Nuestra posición se fundamenta en el sentido que el auto sólo resuelve sobre la no admisión de la acción y debido a que el mismo es apelable, según el artículo 2630, del Código Judicial.

En cambio, la sentencia entra a conocer el fondo del asunto y hace tránsito a cosa juzgada, según lo establece el artículo 2630 del Código Judicial, en su párrafo final.

La diferencia entre estas dos resoluciones está en que el auto que admite un amparo, lo es sólo para su tramitación que culmina posteriormente con la sentencia de fondo, ya sea concediendo o denegando el amparo.

El sólo hecho de que un amparo sea admitido no significa que el mismo ha sido concedido. Es importante diferenciar estas dos situaciones.

Están sujetas a sanciones, tanto el demandante como el funcionario, en caso de que incurran en proponer o admitir demandas sucesivas contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él, aunque se propongan ante Tribunales distintos.

De la ley Art.2631 C.J. se desprenden ciertas particularidades o condiciones para que prosperen las sanciones: que el perjudicado con la suspensión del acto presente la queja; el funcionario que admita o tramite tales perjuicios de amparo (sucesivos) debe "haberse cerciorado de la contumacia del demandante"; no especifica ante cuál autoridad se presenta la queja, suponemos que es ante el superior inmediato del que admitió la demanda.

Pero indica que esta misma autoridad, en la misma resolución, concederá al “demandante ” a pagar la indemnización.

Finalizando que la sanción del funcionario se establece entre B/.15.00 y B/.50.00 a favor del Tesoro Nacional y la del demandante entre B/.50.00 y B/.500.00 a favor del perjudicado con la suspensión. Que dicha resolución presta mérito ejecutivo.

La Corte Suprema de Justicia, en fallo de 12 de mayo de 1993, alude a esta situación expresando:

“La actuación del apoderado judicial en el presente caso guarda relación directa con la interposición de lo que la ley denomina amparos sucesivos contra el mismo servidor público y contra la misma orden.

El artículo 2630 del C.J. no permitir la proposición de amparos sucesivos y el 2631 determina responsabilidad administrativa para el funcionario que admita la demanda en contravención con la prohibición que señala el artículo anterior.

El amparo constitucional constituye la Institución de Garantía por excelencia, respecto a la protección y salvaguarda concreta de los derechos individuales de las personas consagrados en la Constitución Nacional. Por lo que consideramos que el amparo reviste una gran importancia, ya que evita

que los jueces y magistrados abusen de su investidura y violen preceptos constitucionales que consagran derechos subjetivos.

El amparo es la tutela efectiva de los derechos individuales fundamentales que han sido violentando por un funcionario o servidor público ya sea que se trate o no de una resolución judicial.

Por lo tanto la eficaz aplicación y ejercicio del amparo constitucional contra resoluciones judiciales es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Prohibir o limitar la aplicación del amparo constitucional contra las resoluciones judiciales que consistan en órdenes de hacer o de no hacer violatoria de derechos constitucionales, sería igual que encubrir un delito y proteger al culpable de ser sancionado.

Es así como surgen las diferentes contravenciones presentando opiniones distintas, existiendo dos soluciones al problema. Una, aceptar o permitir la admisibilidad de la institución de amparo contra resoluciones judiciales; y otra, prohibir o impedir la institución del amparo contra actos jurisdiccionales. Es importante señalar que hay legislaciones que resuelven el problema con una postura intermedia, estableciendo la admisibilidad del amparo constitucional contra resoluciones judiciales en determinados casos y en otros prohibiendo su admisibilidad.

7.1.2. Reconsideración

Nuestro Código de procedimiento en su capítulo V, nos indica sobre las Incidencias o sea si la orden impugnada es revocada como consecuencia del amparo, quedan a salvo los derechos del demandante para exigir al funcionario demandado, por la vía ordinaria indemnización daños y perjuicios.

En las demandas de amparo sólo se podrán promover incidentes de recusación por el impedimento que establece el artículo anterior.

No, nos especifica sobre la reconsideración, pero sí de los incidentes y apelaciones. (art. 2627-2629). **Molino Mola, Edgardo**, La Jurisdicción Constitucional en Panamá, 1ra. Edición, 1998, Pág. 570).

8. EL PROCESO PENAL

Para **Fenech**, el proceso penal es “ la sucesión de actos reglados que tienden a la actuación de una pretensión punitiva y de resarcimiento en su caso, mediante la intervención y decisión de un órgano jurisdiccional penal”.

Emilio Gómez Orbaneja, sostiene que el proceso penal consiste en “una serie de actos del órgano jurisdiccional y de los otros partícipes, cuyos presupuestos de validez y efectos el derecho procesal determina”.

Nosotros entendemos el proceso penal como el conjunto de actos sucesivos que regulan la investigación de los hechos punibles, así como la actuación de los tribunales encargados de establecer la responsabilidad penal, incluso, la eventual reparación civil, del presunto infractor de la ley penal material y los derechos y deberes de la autoridad y las partes en tales actuaciones.

La importancia del proceso penal es, en consecuencia, evidente. Regula la forma cómo el Estado, a través del ente jurisdiccional, logra establecer la responsabilidad de quien desconoció la prohibición o el mandato implícito en el precepto penal contenido en la ley material.

En el ordenamiento del proceso penal panameño el sistema prevalente es el sistema mixto, toda vez que el Ministerio Público investiga la eventual realización del hecho punible, pero no decide sobre la responsabilidad penal del sujeto, labor que está a cargo del órgano judicial.

8.1. Etapas

8.1.1. Etapa Sumarial

El sumario es la fase inicial del proceso penal panameño. Está a cargo de los agentes del Ministerio Público, quienes por expreso mandato legal desempeñan funciones típicas de un “juez de instrucción”.

El agente del Ministerio Público, por tanto, es el sujeto que dirige el sumario, siendo la autoridad encargada de completar la investigación que luego será remitida al jugador para que decida el mérito de la misma.

En el proceso penal panameño el sumario es fundamental, ya que las pruebas que se obtiene en el mismo tienen pleno valor luego en el plenario, aunque la misma se haya obtenido sin intervención de la autoridad judicial y aunque no haya participado en dicha práctica el imputado o su defensor.

El sumario es la fase en la que se investiga la posible realización de un hecho delictivo, y el plenario, etapa en la que se discute acerca de la culpabilidad del sujeto al que se le imputa la realización de un hecho punible cuya comprobación objetiva está fuera de discusión.

Nuestro Código Judicial vigente, sin embargo, no define el término sumario, no obstante lo regula ampliamente en el Título II del Libro Tercero del mismo cuerpo legal, (art.2031).

8.1.2. Etapa Plenaria

Este es dirigido por el tribunal de la causa y en esta fase, el Ministerio Público es una parte más, junto al procesado.

En el plenario el Ministerio Público pierde su papel protagónico de funcionario de instrucción y se convierte en una parte más en el proceso, de forma tal que el juez de primera instancia adquiere vigencia al dirigir la etapa plenaria.

En la etapa plenaria, el juzgador ejerce la jurisdicción penal en toda la extensión de la palabra, pues debe dictar la decisión que corresponda, absolviendo o condenado al procesado, suspendiendo o reemplazando la ejecución de la pena y en no pocas ocasiones sometiendo al procesado al cumplimiento de la pena impuesta.

8. 2. Principios Rectores del Proceso Penal Panameño.

8.2.1. Principio de Contradicción

La característica más importante y trascendente del proceso penal radica en la posibilidad de “contradecir” u “oponerse” a la pretensión del Estado por parte del imputado y su defensor.

Como consecuencia de este principio, la existencia del derecho de defensa es una de las manifestaciones mas importantes que emanan de la posibilidad de oponerse a la pretensión punitiva que tenga que ejercer el Estado en contra del sujeto.

8.2.2. Principio de Igualdad

Las partes que intervienen en el proceso deben actuar en igualdad de condiciones.

Lo importante del principio de igualdad es que las partes estén en un plano de igualdad procesal de modo que ninguna tenga más derechos que las otras.

El principio de legalidad en el proceso alude a la obligación que tiene el Ministerio Público de solicitar el enjuiciamiento y ulterior condena de quien infringió la ley penal material, con absoluta independencia de otros criterios de conveniencia o necesidad (oportunidad).

8.2.3. Principio Acusatorio

El abandono del sistema inquisitivo, mediante el cual una misma autoridad investigaba y luego decidía la causa, supuso el reforzamiento del principio según el cual nadie debe ser sancionado por un hecho punible si no existe una acusación objetiva e imparcial en su contra.

Aunque en nuestro medio el Ministerio Público es quien investiga y el Órgano Judicial quien decide sobre la eventual responsabilidad del imputado, no debe haber juicio alguno si no hay una acusación válida contra el sujeto. No debe haber proceso penal válido si no hay una acusación del Ministerio Público quién tiene la misión constitucional de perseguir los delitos. (Art.217,4 de la Constitución Nacional).

8.2.4. Principio de Presunción de Inocencia

Según este principio, la responsabilidad penal del imputado no se resume nunca, pues todo sujeto debe ser considerado inocente de los cargos que se formulen en su contra hasta tanto el tribunal que conoce de la causa que se sigue en contra del mismo declare en forma por demás precisa y clara la responsabilidad del imputado en base a las pruebas puestas a su disposición.

8.2.5. Principio de Impugnación

De acuerdo a este principio, las partes tienen derecho de recurrir ante el superior de quien dictó una resolución para que éste revise lo actuado por el inferior.

La característica más importante de este principio es la consagración del recurso de apelación y/o el de Casación, para que un tribunal de mayor

jerarquía conozca de los cargos imputados a la resolución de un tribunal (unipersonal o colegiado) inferior.

8.2.6. Principio de Cosa Juzgada

Nadie puede ser objeto de dos o más procesos por la misma causa penal, policiva o disciplinaria, ya que la decisión a que arribe el tribunal en la primera causa conlleva la autoridad de cosa juzgada, que no puede ser desconocida en nuevos procesos por esa misma autoridad jurisdiccional o por otra distinta.

Este principio aparece consagrado en la frase final del artículo 32 de la Constitución Nacional cuando dispone que “nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria”.

8.2.7. Principio de Oficialidad

Entendemos por principio de oficialidad, el hecho de que el ejercicio de la pretensión penal debe ser promovida por el propio Estado.

En nuestro ordenamiento, el ejercicio de la pretensión penal corresponde al Ministerio Público, salvo los casos que la propia ley permita.

(Dra. VILLALAZ, Aura Emerita, Derecho Penal, parte General,

8.3. Ventajas y desventajas

Ventajas

- Requiere de una atención inmediata.
- Es la tutela efectiva de los derechos individuales fundamentales que han sido violentado por un funcionario o servidor público ya sea que se trate o no de una resolución judicial penal.

Desventaja

- Debe ser presentada por apoderado judicial; ya que este tipo de acción se hace cuando hay un peligro eminente, debiera ser interpuesto por la persona agraviada.
- Que nunca son resueltos en el término que indica la ley.
- No nos especifica cual es ese daño inminentemente.

9. DIFERENCIA ENTRE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EL HABEAS CORPUS.

1. De acuerdo con la jurisprudencia más extendida, el recurso de amparo protege únicamente los derechos individuales o sociales establecidos en el título III de la Constitución, con excepción de la libertad individual, que es protegido de manera especial por el recurso de hábeas corpus.

Por eso vemos la necesidad de plasmarlo tal cual aparece en la Constitución y ver la diferencia que existe;

Art. 50 de nuestra Constitución Política.

“Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales.

Esta acción de amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la constitución que revista la forma de una

orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.”.¹

Por ejemplo: la prohibición de una manifestación, el cierre de un medio de comunicación social o de un espacio radial o televisivo, la violación del derecho de propiedad, el impedir el derecho de circulación dentro o fuera del país, conculcar el derecho a la educación, a la religión, etc. Este tipo de violación requiere de una acción inmediata, como lo es del amparo de garantías. Es por ello que cuando la Corte decide que el recurrente busque otra vía distinta a la de amparo es porque la gravedad del daño no es grave o inminente, ya que su reparación puede buscarse por la vía ordinaria.

Para enervar la acción de amparo esta debe;

1. Vulnerar o lesionar los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución en su Título III, vemos la diferencia en cuanto al Habeas Corpus que protege un derecho individual.
2. Revistan la forma de una orden de hacer o no hacer.
3. Que cuando por la gravedad e inminencia del daño, requiere una revocación inmediata. Se trata de un daño sumamente grave o sea eminente.
4. Haber agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación inmediata..
5. Que el acto haya sido dictado por un funcionario público que tenga mando y jurisdicción.
6. Su competencia;

¹ Véase el artículo 86 de la Ley 1712 de 2014.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridad o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República. (es igual que lo que se menciona en el Habeas Corpus).

Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; en el habeas corpus habla de autoridad, y

Los Jueces de Circuito, cuando se tratare de servidores públicos con mando y jurisdicción en un distrito o parte de él. El conocimiento de estos negocios será competencia de los Tribunales civiles, pues aquí vemos que se omite la esfera penal. . En el Habeas corpus, es competente los Jueces Municipales.

7. Requiere de abogado.

2. La acción de Habeas Corpus en nuestra Constitución Política ha sufrido modificaciones a través de la historia; nuestra norma madre lo define de la siguiente manera.

Art. 23. *"Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante el recurso de habeas corpus que podrá ser interpuesto inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable. El recurso se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles.*

El Habeas Corpus; es una garantía constitucional dirigida a establecer si la detención sufrida por una persona se ajusta o no a la constitución y a la Ley, por lo que no procede el mismo si la persona ha sido condenada legalmente por las autoridades correspondientes y se halla cumpliendo la pena impuesta. Como institución de garantía, tutela de manera específica la libertad corporal de la persona humana en el evento de que ésta sufra alguna limitación o merma, comprendiendo esta acción efectos tanto reparadores como preventivos.

Vemos también que prospera el mandamiento de Habeas Corpus cuando una persona es privada de su libertad por los mismos hechos o motivos. Al menos que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten.

Podemos indicar que el Habeas Corpus es;

- Una Garantía individual corporal
- Que se interpone ante el funcionario de instrucción conocedor de la causa, mediante procedimiento sumario, con prelación a otros casos.
- No requiere de abogado
- No se habla en ningún momento de recurso o acción, sino de solicitud de mandamiento de hábeas corpus.
- No hay que esperar las 24 horas, se puede recurrir antes, durante o después de la privación de libertad.

- Su competencia el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Los Tribunales Superiores, Los Jueces de Circuito y los Jueces Municipales.

Cabe señalar que hay varias clases de Habeas Corpus:

1. **Habeas Corpus Reparador:** lo que llamamos comúnmente "casa por cárcel" y se da el impedimento de salida y se obliga a presentarse periódicamente a la autoridad competente.
2. **Habeas corpus por Denuncia :** cuando el juez o tribunal tengan conocimiento por denuncia , que se intenta confinar o deportar ilegalmente a una persona.
3. **Habeas corpus de oficio:** que por una visita de cárcel se percate que hay una persona detenida sin estar a órdenes de ninguna autoridad competente.
4. **Habeas corpus preventivo:** orden de detención contra alguna persona que todavía no se ha hecho efectiva.
5. **Habeas corpus correctivo :** en el caso del imputado, preventivamente detenido, cuando se le mantiene en una cárcel distinta de la sede del tribunal que conoce su caso.

También se habla de hábeas corpus rectificador, para aquellos casos que el condenado a prisión tienen derecho a la libertad condicional según el

código penal. (**Molino Mola, Edgardo**, La Jurisdicción Constitucional en Panamá, 1ra. Edición, 1998, Pág. 570).

10. DERECHO COMPARADO (MÉXICO).

10.1. RELACION DEL RECURSO DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y EL DERECHO PENAL PANAMEÑO.

Los derechos protegidos por la acción de amparo de garantías constitucionales que consagra nuestra Constitución son todos los que abarca el Título III, sobre los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, en el Capítulo I, sobre Garantías Fundamentales, el Artículo 2615 del Código Judicial, nos reproduce casi literalmente el Artículo 50 de la Constitución Nacional que establece la acción de amparo de garantías constitucionales.

A continuación transcribiremos el Artículo 2615: “toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

La acción de amparo de garantías constitucionales a que se refiere este artículo se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los Tribunales Judiciales.

La acción de amparo de garantías no procede contra las decisiones jurisdiccionales.”

Ya hemos comentado que básicamente los dos primeros párrafos de este Artículo reproducen prácticamente el artículo 50 de la Constitución Nacional.

El tercer párrafo nos aclara en que casos procede la acción de amparo, veamos:

- Contra toda clase de actos que vulneren o lesionen los derechos o garantías fundamentales consagrados en la Constitución.
- Que dichos actos revistan la forma de una orden de hacer o de no hacer.
- Contra toda clase de actos definitivos de funcionarios públicos con mando y jurisdicción.
- Contra ordenes que representen un daño grave e inminente por lo que requieran de una revocación inmediata.
- El Derecho Penal es obviamente muy importante, ya que es la única forma de establecer la eventual responsabilidad de quien se presume ha desconocido el contenido de la norma penal, ya que la misma, sin el proceso, es letra muerta. De nada valdrá tener un Código penal que permita declarar al sujeto responsable del delito cometido.

Por lo tanto vemos una relación íntima entre el Derecho Penal y el Recurso de amparo ya que éste último va en contra de resoluciones dictadas por un funcionario público, con mando y jurisdicción, pero, para que esto exista antes debe existir un proceso y es allí la relación del proceso penal con la acción de amparo.

El Autor Burgos, Ignacio, nos da un concepto jurídico de acción de amparo “ nos dice que es el derecho público subjetivo, que incumbe al gobernado, víctima de cualquier contravención a alguna garantía individual cometida por cualquier autoridad estatal mediante una ley o un acto, o a

aquel en cuyo perjuicio tanto la Federación como cualquier Estado, por conducto de un acto concreto o la expedición de una ley, hayan infringido su respectiva competencia como entidades políticas soberanas, derecho que se ejercita en contra de cualquier autoridad, de la Federación o de las autoridades locales, en sus respectivos casos, y con el fin de obtener la restitución del goce de las garantías violadas o la anulación concreta del acto contraventor del régimen de competencia federal o local, por conducto de los órganos jurisdiccionales federales.

En el mencionado país está dividido en Amparo Indirecto o mediato que se inicia ante un Juez de Distrito, que se determina en razón de la idea contraria. Lo indirecto o inmediato implica una relación entre dos elementos, o mejor dicho es un cierto calificativo que se imputa a una relación de dos elementos por conducto de algún o algunos elementos intermedios.

El llamado "amparo indirecto" es, pues, el opuesto al denominado "amparo directo", tomando en consideración la instancia jurisdiccional en que se resuelve definitivamente el juicio de amparo, siendo la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito los que toman la única o última palabra.

10.3. ANÁLISIS COMPARATIVO EN MATERIA DE AMPARO ENTRE LA LEGISLACIÓN MEXICANA Y PANAMEÑA.

10.3.1. En México está la Ley de amparo que a su vez, establece las diferentes fracciones, que regula todo el procedimiento del juicio de

amparo, por ejemplo en el artículo 117 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimientos judiciales, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará para la admisión de la demanda que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto

En Nuestra Legislación La Constitución Nacional en su artículo 50. y el Código Judicial en su Título III, sólo regulan el Amparo de Garantías Constitucionales, ya que se creó la sala quinta de Instituciones de Garantías, pero esta fue abolida, un año después de su creación por la Ley 32 de 1999. Por lo que no hay ley que lo regule.

10.3.2. México, luego de presentada la demanda, los fallos que niegan o concede la demanda, deben ser resueltos en el fallo.

Mientras que en Panamá los fallos son pocos ya que se pronuncian "se concede o Deniega la acción de amparo", sin la explicación del porque de esa decisión.

10.3.3. En la Legislación Mexicana no nos indica que en la demanda en los procesos de amparo contra resoluciones expedidas por el Tribunal Electoral no se admitirá.

En Panamá, si se hace mención, ya que en los artículo 137 y 204 de nuestra Constitución Política, lo menciona.

10.6.3.4. En México está dividido en Amparo directo o mediato que se inicia ante un Juez de Distrito, que se determina en razón de la idea contraria. Lo indirecto o inmediato implica una relación entre dos elementos, o mejor dicho es un cierto calificativo que se imputa a una relación de dos elementos por conducto de algún o algunos elementos intermedios.

El “amparo indirecto” es, pues, el opuesto al denominado “amparo directo”, tomando en consideración la instancia jurisdiccional en que se resuelve definitivamente el juicio de amparo, siendo la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito los que toman la única o última palabra.

En Panamá El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; y los jueces de Circuito, cuando se trate de servidores públicos con mando y jurisdicción en un distrito o parte de él.

10.3.5. En México, si, existe una sala responsable, donde se presentan los juicios de amparo, y no ante la propia autoridad que los profirió.

En Panamá, debe presentarse ante el Pleno de la Corte, los Tribunales Superiores de Distrito y los Jueces de Circuito, cuando se trate de servidores público.

10.3.6. En México, luego de presentada la demanda el quejoso tiene derecho de ampliar su demanda, esto debe ser antes de que las autoridades responsables rindan su informe justificado o sea antes de la contestación en el juicio de garantías.

Burgoa I., El Juicio de Amparo, Edición Porrúa, 1971, Fix Zamudio, Hector, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, S. A, México 1964., Molino Mola, Edgardo, La Jurisdicción Constitucional en Panamá, 1ra. Edición, 1998, La Constitución Nacional de 1972 y sus actos reformativos, y Nuestro Código Judicial, 2002).

CAPITULO III: ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Antes de profundizar en el tema en cuanto a la Estructura Jurídica del Recurso de Amparo, como Garantía en el Proceso Penal Panameño, partimos por transcribir el artículo 50 de nuestra Constitución:

“Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será tribunales judiciales”.

Ahora es importante delimitar a la persona del servidor público toda vez que dentro de la administración pública no todos son o pueden estar dentro de esta categoría; y es que dicha personalidad en la demanda de amparo, es considerada como la parte pasiva. El artículo 294 de la Constitución Nacional, define y delimita al servidor público de la siguiente manera:

Artículo 294: “ Son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo o Judicial,

de los Municipios, entidades autónomas y semi autónomas; y en general, las que perciban remuneración de Estado.

Se establece una situación controvertida cuando la Constitución Nacional Señala que la Acción de amparo debe recaer sobre actos procedentes de servidores público y el Código Judicial señala que debe tratarse de funcionarios con mando y jurisdicción.

Primeramente nos fuimos al Centro de Estadística del Órgano Judicial y al sostener la primera entrevista con la funcionaria; LUMIS ORTEGA, le indicamos nuestra procedencia y a su vez muy gentilmente nos atendió y nos facilitó todo lo que en Amparos de Garantías Constitucionales la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a resuelto, ya que muchos se tramitan de la siguiente manera; concede y revoca, confirma, confirma en apelación, revoca en apelación, concede en apelación, reforma, deniega, no viable, no viable en apelación, no admite, no concede, rechaza de plano, sustracción de materia, se inhibe, admite desistimiento, cese de procedimiento, a su vez nos suministra estadística del año 1995 a 2005.

Entrevistas;

Licda. MARIA LOURDES ESTRADA, Juez de Circuito Penal, y me indica que en los penal por lo general siempre se resuelven los habeas corpus, que por lo general los amparos, es del ramo civil, ya que así lo establece nuestro código de procedimiento.

Licda. DAYRA FISHER, Asistente del Juzgado Especial de Adolescente; en esa esfera, son los Tribunales superiores quienes resuelven, pero no le ha tocado, ni ha visto acciones de amparo que tenga que ver con alguna sentencia promovida por ellos y confirmada por el Tribunal de adolescente que haya sido objeto de amparo de garantías.

Licda. AMARILIS JUAREZ, Juez Mixta Municipal de Arraijan; que a pesar de que a ella no le van a llegar los recursos de amparo, si no a su superior, opina, que los recursos en mención, si se dan en el ámbito penal, a pesar de que nuestro Código de procedimiento establece que serán de competencia de los Tribunales Civiles, por lo tanto en la jurisdicción marítima, civil y laboral es donde más se da, y que por lo general en lo penal mas bien se ve a manera de dilatar el proceso.

Licdo. HERMES ARIEL ORTEGA, Abogado Litigante, ex asesor de Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, ex Director de Producción de Investigación

Jurídica, nos manifiesta, que el recurso de amparo, a pesar de que es una acción de ultima instancia ya que se tiene que agotar todas las vías extraordinarias,

Para concluir, nos remitimos al Registro Judicial de Julio del 2006 y ninguno fue admitido en cuanto a lo penal, ya que los que habían interpuesto fue en contra de sentencias que se encontraban en apelación y la Corte Suprema, confirma la apelación y no admite el amparo.

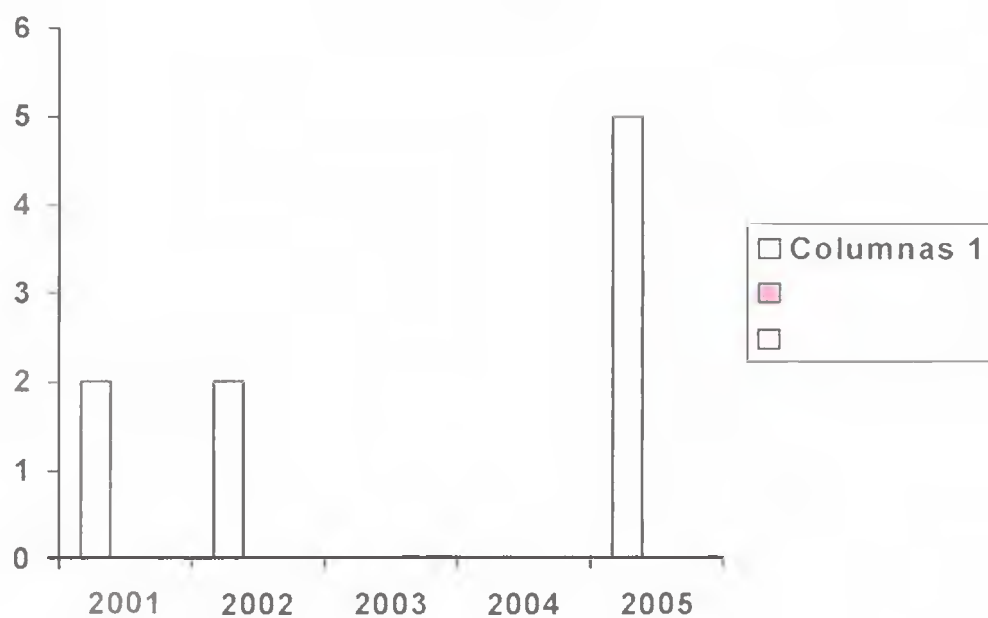
Estadística

1. Amparos de Garantías Contusionales, Tramitados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia año 2001 a 2005.

	2001	2002	2003	2004	2005
Concede y revoca	12	17	14	33	20
Confirma.....	-	-	41	10	3
Confirma en Apelación.....	67	50	7	74	71
Revoca en apelación.....	8	6	-	-	10
Concede en Apelación.....	-	-	-	6	3
Reforma.....	-	-	-	3	-
Deniega.....	18	18	10	29	12
No Viable.....	23	19	23	22	31
No Viable en Apelación.....	1	-	28	-	-
No Admite.....	106	128	174	177	190
No Concede	-	-	-	3	13
	245	255	309	367	376

GRAFICA No. 1

Amparos de Garantías Constitucionales, Concedidas.

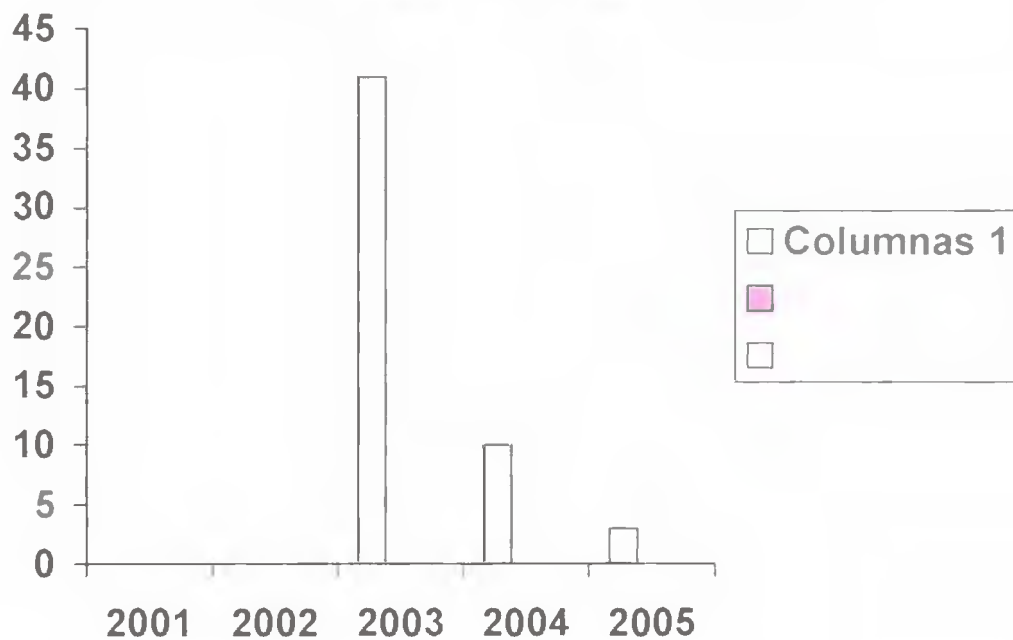


En el 2001 se concedieron 12 amparos, en el 2002 17 amparos en el 2003, 14 y en el 2005, 20 amparos de garantías constitucionales

(20). Estadística suministrada por la Sección de Estadística de la Corte Suprema de Justicia, agosto 2007

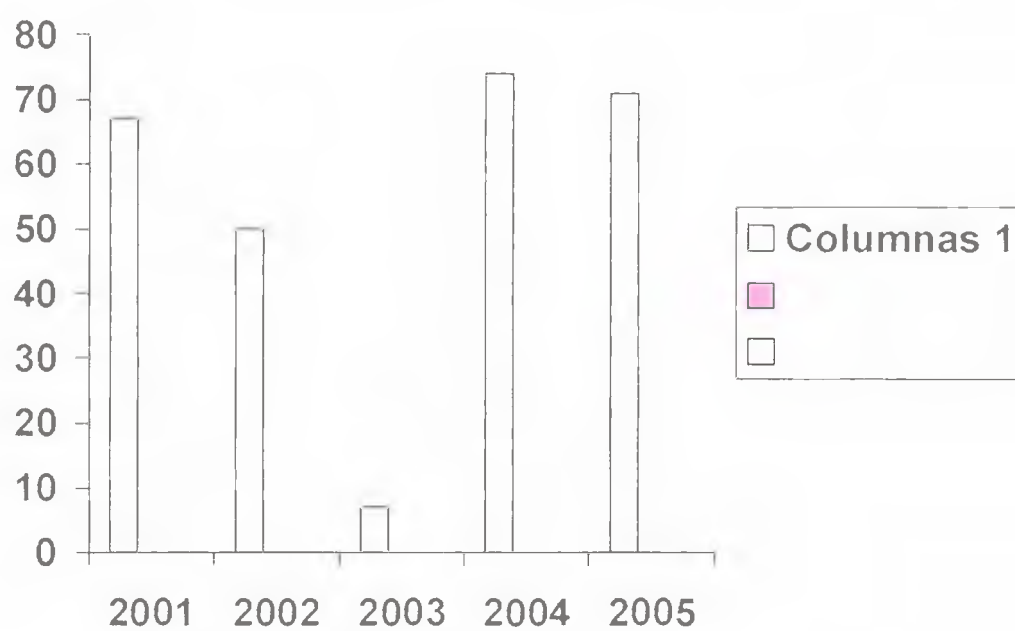
GRAFICA No 2

Amparos de Garantías Constitucionales, Confirmadas.



En el 2001 se confirmaron en Apelación 41 amparos, en el 2004, 10 y en el 2005, 3 amparos de garantías constitucionales

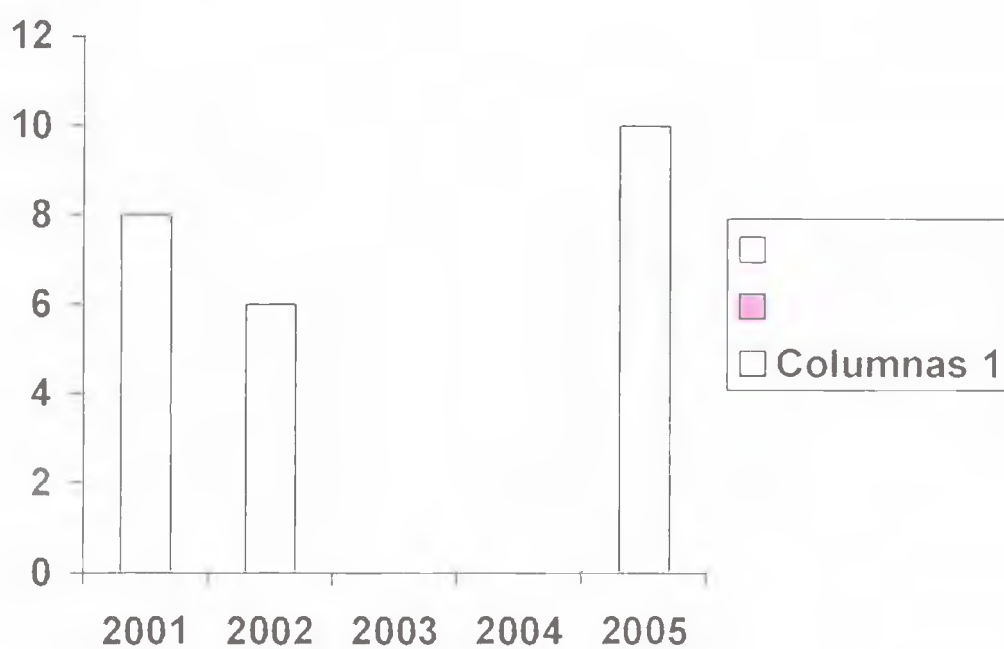
GRAFICA No 3
Amparos de Garantías Constitucionales,
Confirmadas en Apelación.



En el 2001 se confirman en apelación 67 amparos, en el 2002, 50 amparos en el 2003, 7, en el 2004 74 y en el 2005 71 amparos de garantías constitucionales

GRAFICA No. 4

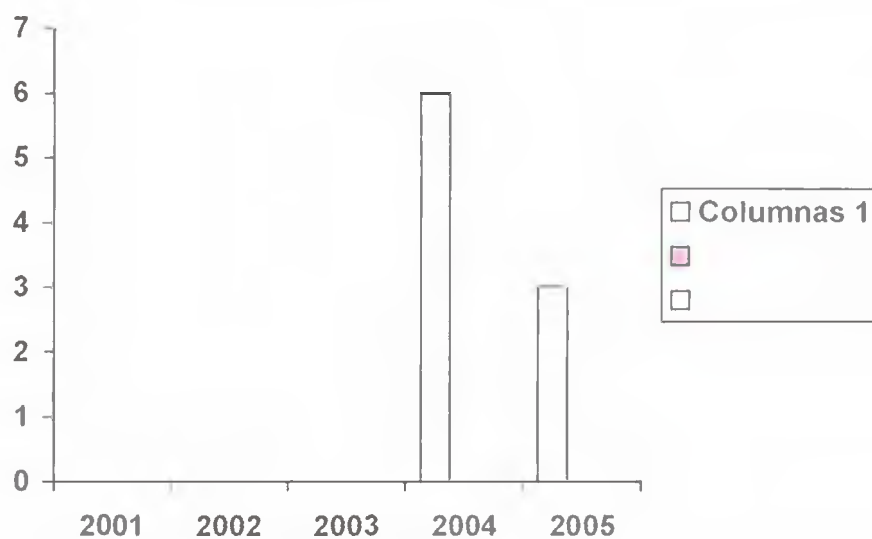
**Amparos de Garantías Constitucionales,
Revocadas en Apelación.**



En Apelación Revocaron en el 2001, 8 amparos, en el 2002, 6 amparos y en el 2005, 10 amparos de garantías constitucionales

GRAFICA No. 5

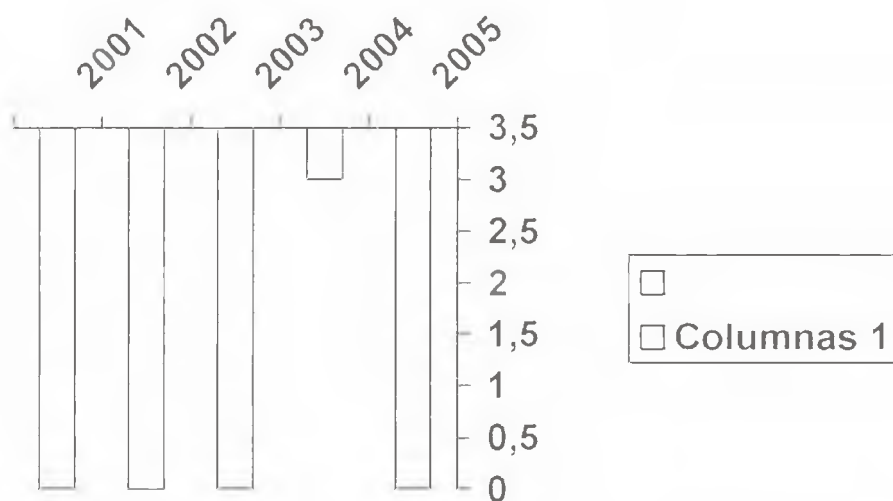
**Amparos de Garantías Constitucionales,
Concedidas En Apelación.**



En el 2001 se concedieron 12 amparos, en el 2002, 17 amparos en el 2003, 14 y en el 2005, 20 amparos de garantías constitucionales

GRAFICA No. 6

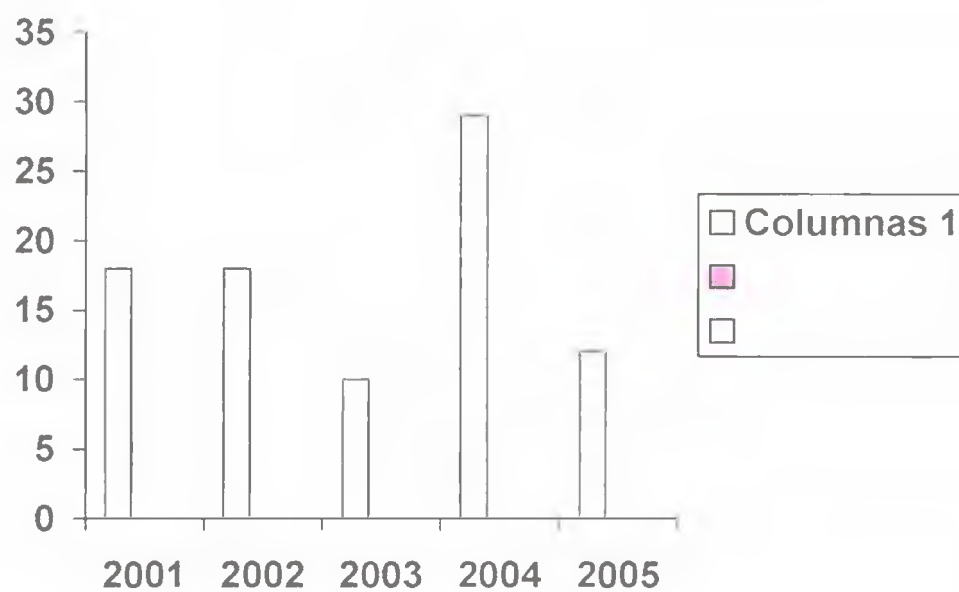
Amparos de Garantías Constitucionales, Reformados.



En el 2004 se reformaron 3 amparos de garantías constitucionales

GRAFICA No. 7

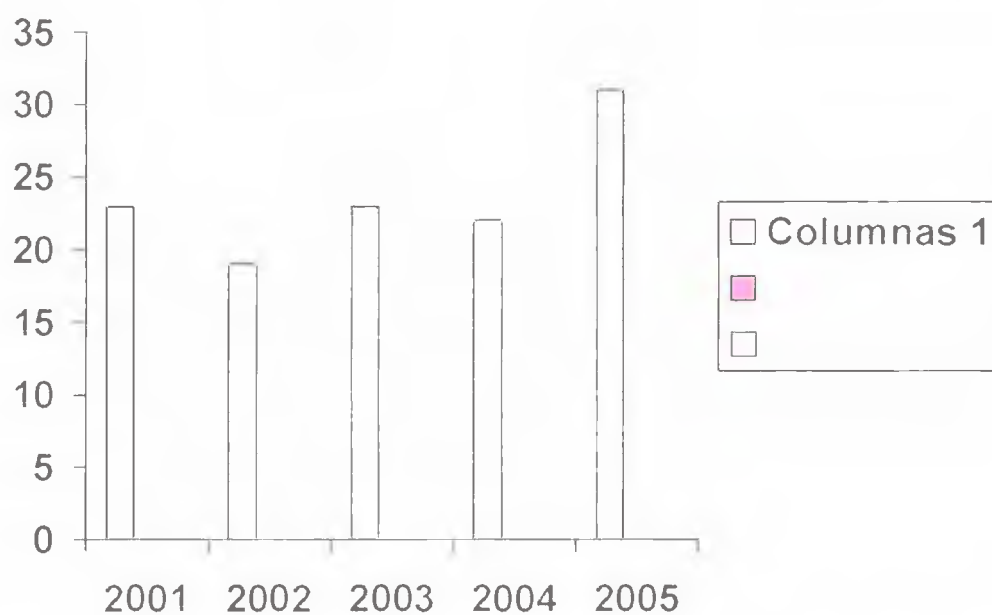
**Amparos de Garantías Constitucionales,
Denegadas.**



Se denegaron en el año 2004, 18, en el 2002, 18, en el 2003, 10 en el 2004, 29, y en el 2005, 12.

GRAFICA No. 8

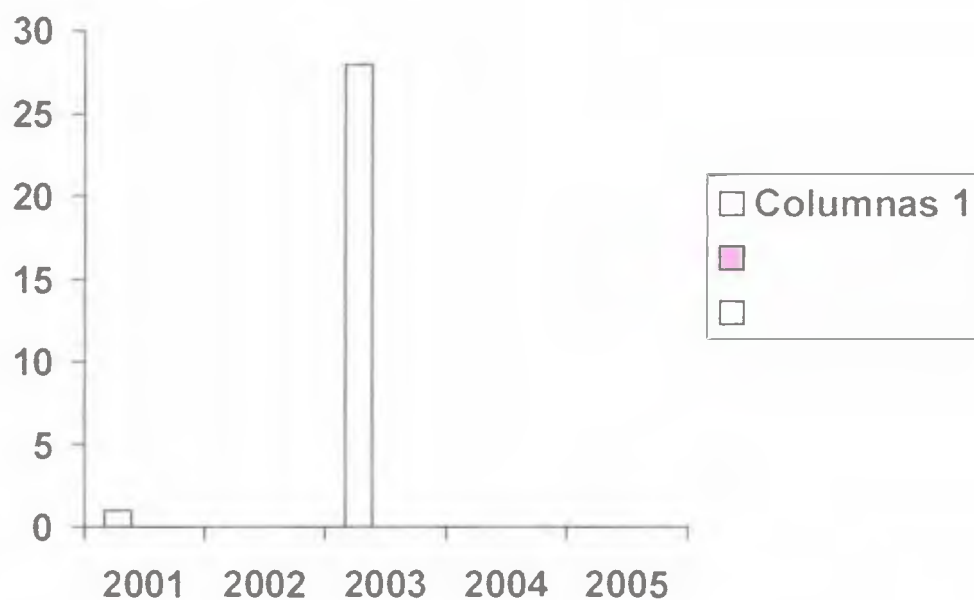
**Amparos de Garantías Constitucionales,
no viables.**



En el 2001 no fueron viables 23 en el 2002, 19, en el 2003, 23, en el 2004, 22 y en el 2005, 31

GRAFICA No. 9

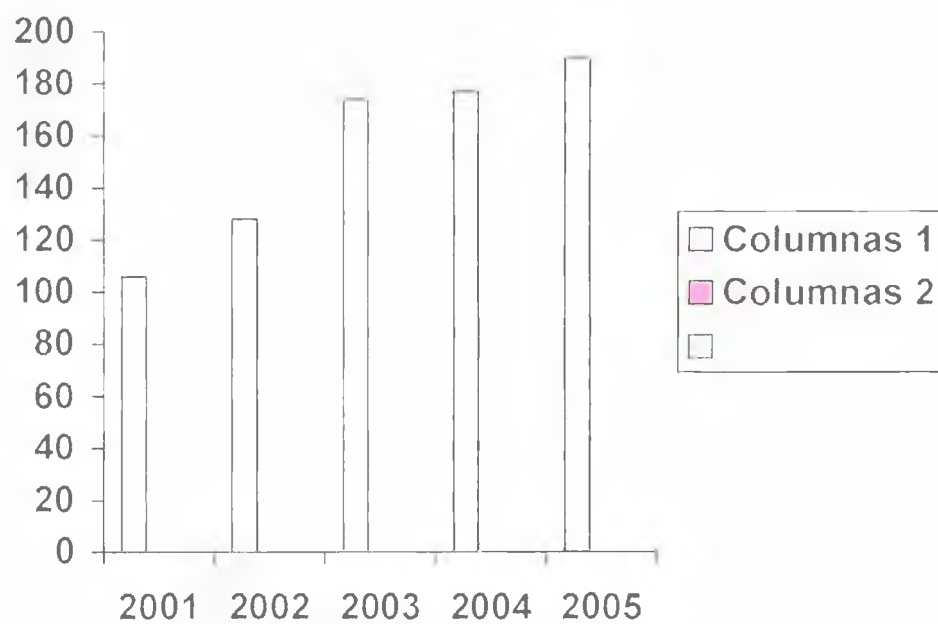
**Amparos de Garantías Constitucionales,
no viables en Apelación.**



En el 2001 no fueron viables en apelación 1 amparo, y en el 2003. 28 amparos de constitucionales

GRAFICA No. 10

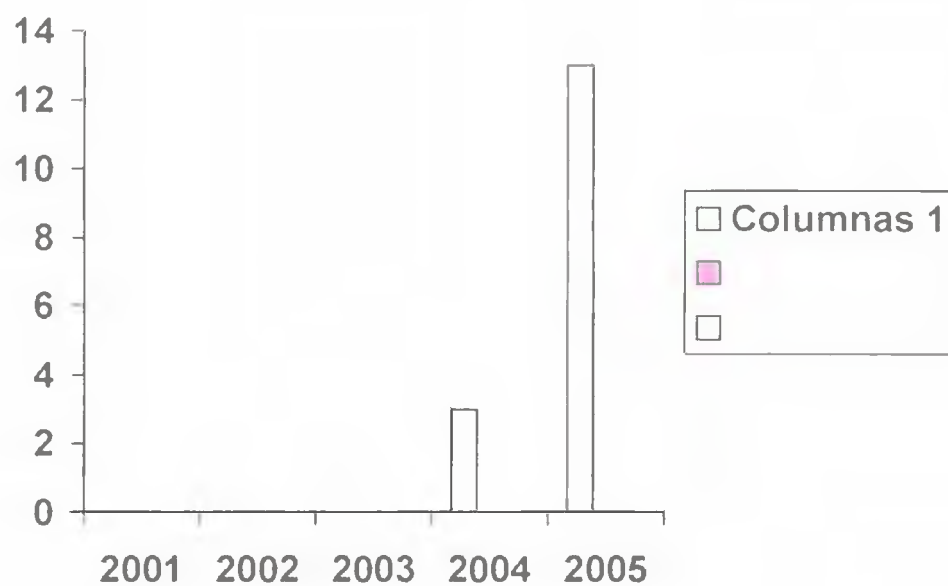
Amparos de Garantías Constitucionales, no admitidas.



No se admitieron en el 2001, 106, en el 2002, 128, en el 2003, 174, en el 2004 177, y en el 2005 190.

GRAFICA No. 11

Amparos de Garantías Constitucionales, No Concedidas.



En el 2004 no se concedieron 3 amparos y en el 2005, 13 amparos de garantías constitucionales

ENCUESTA

1. Cree usted que nuestros tribunales cumplen con el tiempo establecido al momento en que se interpone el recurso de amparo.

☐

2. Por comprender todo el Título III de la Constitución, garantías fundamentales del individuo, considera usted, que debe existir un Tribunal que resuelva todo lo que tenga que ver con los recurso extraordinarios.

☐

3. Debe haber un Código de Procedimiento y separar del Código Judicial, todo que tenga que ver con el procedimiento del Recurso de amparo.

☐

4. El Código establece que el conocimiento de estos negocios en cuanto a la competencia, será de los tribunales que conozcan asuntos civiles, opina usted que debe ser modificado, ya que en la esfera penal también se dan.

☐

Aparte de los entrevistados que hemos plasmado, también se hizo a personas comunes su respuesta fue alejada a lo que queríamos conseguir.

CAPITULO IV. APORTE FINAL

CONCLUSIONES

El Amparo de Garantías Constitucional como medio de control de las resoluciones penales, su procedimiento y todo cuanto se requiera para que esta se lleve a cabo, su principal fin es hacer valer los derechos fundamentales del ciudadano que en un momento dado le sean vulnerados, tal cual como lo consagra nuestra Constitución Política desde 1941, hasta la que tenemos en la actualidad siguiendo los mismos lineamientos jurídicos. Siendo esta la Institución de garantía por excelencia.

Como podemos apreciar, de acuerdo a nuestra Constitución Política, garantiza la tutela y protección de todos los derechos, podemos decir que Nuestro Amparo es una acción y no un recurso, ya que su termino se adapta mejor a la naturaleza y fines del Amparo. Por lo tanto este debe cumplir con los requisitos que exige nuestra norma positiva en su artículo 665 C.J.

Por lo tanto consideramos que prohibir que las actuaciones de los funcionarios judiciales sean atacadas por amparo es desconocer e ignorar el precepto constitucional que impide la violación de los derechos consagrados en la Carta Fundamental por cualquier funcionario.

Es por ello que la importancia del Amparo constitucional contra Resoluciones Judiciales radica en garantizar una recta y equitativa administración de justicia.

Cabe señalar que nuestra legislación presenta una postura intermedia o ecléctica en relación a la admisibilidad del amparo constitucional contra resoluciones judiciales, puesto que establece su admisibilidad pero, en ciertos casos y sujetos una serie de requisitos previos.

Concluimos que nuestro Amparo de Garantías Constitucionales tal cual como está mencionado se encuentra en su artículo 50 de nuestra Constitución Política el cual procede del amparo mexicano, pero tiene características propias que lo diferencian de éste.

Siendo su principal finalidad proteger derechos individuales violados derivadas de órdenes de hacer o de no hacer dictadas por funcionario públicos.

RECOMENDACIONES

A manera de recomendación sería necesario definir el tiempo con el que el amparista cuenta para interponer la acción de amparo, toda vez que la ley no señala y tampoco existe unanimidad de criterios a nivel de la Corte Suprema de Justicia, ya que todo se resuelve en base a la gravedad e inminencia del daño, sirviendo de esta manera como una excusa para la solución de los Amparos.

De igual forma sería bueno especificar en que consiste el daño grave e inminente, estableciendo de esta manera parámetros para su identificación.

Es bueno recomendar para quienes en su momento tengan la oportunidad de legislar, en cuanto a su regulación del Amparo, se establezcan normas que tiendan a minimizar los formalismos existentes en cuanto a la aplicación del mandato constitucional, y se eliminen lo más posible las restricciones establecidas en nuestra legislación actual relativas al Amparo.

Es por ello que reiteramos una reforma constitucional que establezca un Tribunal o Corte Constitucional que tenga a su cargo el contra concentrado de la constitucionalidad en forma independiente y separado de los demás órganos jurisdiccionales existentes en nuestro país. De forma tal, que esta

Corte Constitucional conozca de los Habeas Corpus, las Acciones de Inconstitucionalidad las Advertencia de inconstitucionalidad, las consultas de inconstitucionalidad, las objeciones de inexigibilidad Constitucional y de los Amparos Constitucionales.

Puntualizar la intervención de terceros en el proceso de amparo con su debida regulación, ya que hasta el momento sólo es permisible por la vía jurisprudencial.

Nuestra Carta Magna debe indicar, que todos los derechos consagrados en ésta, están protegidos por el amparo constitucional, cuando éstos sean violados por cualquier servidor público, y por omisiones en las que incurra cualquier funcionario.

El Amparo Constitucional es una garantía de protección individual, como ya está mencionado y no una acción popular, por lo cual, no puede ser presentado por cualquier persona, sino por apoderado judicial.

No podemos dejar de mencionar que cuando indicábamos de los terceros dentro del Amparo, es por que dentro de una demanda de amparo, igualmente, deben probar el daño por el cual se ven afectados por la orden de hacer o de no hacer, dictada por un servidor público.

Para concluir es importante señalar que nuestra Corporación de Justicia a pesar de ser enfática en todos los requisitos tanto de forma

como de fondo en la admisión del recurso de amparo , vemos que en los fallos que adjuntamos, no se acredita la eminencia o sea la gravedad del daño, ya que este es interpuesto mes o meses después.

BIBLIOGRAFÍAS

OBRAS CONSULTADAS

- 1. MOLINO MOLA Edgardo,** La Jurisdicción Constitucional en Panamá, en un Estudio de Derecho Comparado, **Primera Edición, 1998.**
- 2. ARMIJO, Gilberto.** **Garantías Constitucionales, Prueba Ilícita y la Transición al Nuevo Proceso penal.** 1997.
- 3. PEDRESCHI, Carlos B.,** El Pensamiento Constitucional, del Dr. Moscote, tesis publicada. **Imprenta Nacional. Panamá, 1959.**
- 4. ABAD, Samuel.** Selección de Jurisprudencia Constitucional, habeas corpus y amparos. **Comisión Andina de Juristas, Perú 1990.**
- 5. SANTIZO PEREZ, Lao.** Acotaciones Al Amparo de Garantías Constitucionales Panameño. **Editorial Jurídica Sanvas. Costa Rica, 1987.**
- 6. ESCALA SERPA, Reinaldo.** El Recurso de Amparo Contra La Arbitrariedad de Funcionarios Públicos. **Editorial la Torre. 1979.**

7. AGUDO REYTES, Esteban. Estado Actual de la Acción de Amparo en Venezuela. Poseidón Editores, **Venezuela. 1979.**

8. ALVAREZ, Victor M. El Recurso de Amparo y Habeas Corpus En la Legislación Venezolana, Editora Nacional Torregalindo. **Madrid, España. 1980.**

9. GONZALEZ, BORIS BARRIOS, Derecho Procesal Constitucional, Edit. Jurídica Ancón, Panamá, 1999. Y **Curso de Derecho Procesal Constitucional**, Litho Editorial Chen, Panamá, 2003.

10. ARMIJO, GILBERTO. Garantías Constitucionales, Prueba Ilícita y la Transición al Nuevo Proceso penal. 1997.

11. GONZÁLEZ MONTENEGRO RIGOBERTO, Los Desafíos de la Justicia Constitucional Panameña, **Panamá 2002.**

12. PEREZ SANTIAGO, Acotaciones al Amparo de Garantías Constitucional en Panamá.

13. JUNOY JOAN PICÓ, Las Garantías Constitucionales del Proceso.

14. **MOLINO MOLA, EDGARDO**, La Justicia Constitucional en Panamá.
15. **GARCIA BELSUNCE**, Garantías Constitucionales, Edición Depalma, Buenos Aires, 1984.
16. **BURGOA, IGNACIO**, EL JUICIO DE AMPARO, editorial Pro rúa, 1971.
17. **QUINTERO CESAR**, La Corte Suprema de Justicia y el Amparo Constitucional en Panamá.
18. **GOZAINI, OSVALDO ALFREDO**, **Derecho Procesal Constitucional, Amparo**, Editora RUBINZAL, ULZONI, Argentina 2002.
19. **ALVAREZ, Victor M**, **El Recurso de Amparo y Habeas Corpus en la Legislación Venezolana**. Editora Nacional Torregalindo. Madrid, España. 1980.
20. **GARCIA RUIZ, J. Luis**. **El recurso de Amparo en el Derecho Español**. Editora Nacional Torregalino. Madrid, España. 1980.
21. **CRUZ ROGELIO**. **El amparo de las Libertades Públicas en Panamá**. Litografía Enan. Panamá. 1990.

22. FABREGA, Jorge. **Estudios de Derecho Constitucional Panameño.** Editora Jurídica Panameña. 1987.

23. FABREGA, Jorge. **Historia Constitucional de Panamá.** Editora Jurídica Panameña. Panamá, 1986.

24. FIX SAMUDIO, Hector. **El Juicio de Amparo,** Editorial Porrúa, México, 1971.

25. NARANJO MESA, Vladimiro, **Teoría Constitucional e Instituciones ANEXO Políticas,** Cuarta Edición aumentada y Corregida, Editorial temis, Bogota Colombia, 1991.

26. VERDÚ, Pablo Lucas, **Manual de Derecho Político, La Crisis de la Teoría del Estado en la actualidad. volumen II.** Editorial Tecnos Madrid.

27. DIAZ, Cabiale y MORALES, Martín. **La garantía constitucional de la inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida.**

28. GARCIA PELAYO, Manuel. **Derecho Constitucional Comparado, octava edición.** Editorial Revista de Occidente. Madrid España, 1967.

DICCIONARIOS

Diccionario Jurídico Espasa Calpe, Madrid, año 2001.

GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario jurídico, Elemental, Edición revisada 2002.

TEXTOS LEGALES

FÁBREGA JORGE, Constitución Política de la República de Panamá de 1972, **con sus Actos Reformatorios**.

MIZRACHI & PUJOL, S.A., Código Judicial, 2001. **FÁBREGA JORGE**, Constitución Política de la República de Panamá de 1972, **con sus Actos Reformatorios**.

Jurisprudencias emitidas por la Corte Suprema de Justicias en cuanto a la admisión de los Recursos de Amparo en el Proceso Penal. Registro Judicial 2 de Diciembre de 2002.

DERECHO COMPARADO

29. BURGOA, Ignacio, El Juicio de Amparo, editorial Prorúa, 1971.

30. GARCIA BELUNCE. Garantías constitucionales, adición Desalma, buenos Aires, 1984.

TESIS CONSULTADA

CHANDLER STIRLING, Natacha M., La Acción de Amparo de Garantías frente a las Dediciones Jurisdiccionales. Panamá 1993.

DUCRET NUÑEZ, Liliana Marie, El Amparo de Garantías y la Advertencia Constitucional. Panamá. 1992.

JURISPRUDENCIAS

Registro Judicial 2002

Registro Judicial 2003

Registro Judicial 2005

Registro Judicial 2006.

ANEXO

Menciona el tribunal en su sustentación que "... a pesar que la demanda cumple con todos los requisitos de forma que dispone el artículo 2919 de la misma excerta legal, y de la insistencia de los apoderados del amparista sobre la gravedad del daño que se presenta en esta ocasión al suponer su "estado de culpabilidad" y no su presunción, se advierte que el acto impugnado constituye un auto que decreta la ampliación del sumario, que no contiene una orden directa de hacer o prohibición de hacer alguna cosa a la persona demandante, sino al funcionario instructor para que complete la investigación. En consecuencia, el proponente de esta acción de constitucionalidad no reúne el presupuesto esencial de estar legitimado para que pueda demandar la orden por medio de este amparo"(foja 42 del cuadernillo)

II.-Fundamento de la Apelación

Los apoderados legales del amparista presentaron recurso de apelación contra la decisión proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, solicitando que dicha resolución sea revocada y se admita el recurso de [REDACTED] constitucionales interpuesto, y como consecuencia, se disponga la suspensión de la orden atacada, para posteriormente pronunciarse en el fondo.

Señala en su apelación, que los argumentos del Tribunal Superior son inexactos, toda vez que se puede mencionar antecedentes de acciones de [REDACTED] constitucionales en las cuales dicho tribunal concedió esta acción contra resoluciones ampliatorias que ordenaban indagatorias, citando las sentencias de 11 de enero de 1993 y 24 de junio de 1993.

Agrega que contra el auto recurrido en amparo no cabe recurso ordinario alguno, por lo que para tener una tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 32 de la Constitución Política, y reparar el derecho vulnerado, es que se ha recurrido a la institución del [REDACTED] Fundamentales.

Menciona que la máxima Corporación de Justicia ha sentado jurisprudencia en que prima los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos por encima de las formalidades para la admisión del Amparo, sobre todo cuando la gravedad e inminencia del daño es verdaderamente palpable, por lo que no tiene asidero la tesis del Tribunal Superior.

Con respecto a que no cabe acción de [REDACTED] constitucionales contra auto ampliatorio ni el auto que ordena una indagatoria, señala que la Corte ha variado sustancialmente esta posición y el Tribunal Superior lo ha reconocido en otros fallos, toda vez que la jurisprudencia en esta materia ha ido evolucionando en sentido protector de las garantías y derechos de los ciudadanos.

Manifiesta que el Tribunal Superior yerra al indicar que la orden de indagatoria está contenida en una resolución de impulso procesal o mero trámite, lo que es totalmente incierto, ya que el Código Judicial define las providencias como resoluciones de mero trámite y los autos como resoluciones que resuelven situaciones accesorias incidentales en el proceso (artículo 987 del Código Judicial), no pudiéndose decir, entonces, que el auto ampliatorio que ordena una indagatoria puede definirse como una resolución de mero trámite, mas cuando es en donde se vincula directamente al imputado e incluso puede tener como efecto su detención preventiva.

Por último, señala que indicar que la indagatoria es un mecanismo de defensa procesal del imputado es total y completamente debatible, sobre todo por las consecuencias anteriormente anotadas, y porque la orden del juez le da estatus de imputado a su mandante, que no le ha dado la investigación realizada por el funcionario con atribuciones para esos menesteres, resultando que la situación de su mandante es totalmente diferente al del imputado común y corriente que es parte en el sumario a través de una ampliación.

III.-Decisión del Pleno

Informados los antecedentes del caso, este Tribunal de Amparo procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 29 de agosto del 2005, proferido por el Primer Tribunal Superior, del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se niega la admisión del recurso de amparo que nos ocupa.

En el auto apelado el Tribunal Superior considera se cumplieron con todos los requisitos de forma que dispone el artículo 2919 del Código Judicial, sin embargo, concluyen que no se cumple con el presupuesto esencial de la legitimidad para que el actor pueda demandar por este medio extraordinario, por considerar que el auto recurrido en amparo no está dirigido contra la parte proponente.

Ante esta situación cabe destacar que el concepto de legitimidad no se refiere exclusivamente a que la orden censurada esté dirigida contra la persona que propone el amparo, sino que dicho acto contenga un mandato de imperativo cumplimiento que perjudique al demandante, que suponga un mandato o voluntad abstracta tendiente a procurar un perjuicio a los derechos y garantías del amparista.

Se observa en el auto recurrido en amparo que el Juez Tercero del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la parte motiva, enumera las diligencias que deberá llevar a cabo el agente de instrucción, concluyendo en su punto N°1 *"...que el agente mediante resolución motivada debe formular cargos en contra de Franklin Miranda, Bredio Benavides y Raúl Porcell y ordenar la recepción de sus*

respectivas declaraciones indagatorias...", razón esta por la que el proponente al considerar vulnerados sus derechos fundamentales y no siendo apelable dicho auto, ha presentado este recurso extraordinario.

Así las cosas, la orden impartida en el auto recurrido en amparo, si bien no está dirigida contra la persona que propone, él mismo contiene un mandato que afecta al proponente, y el cual considera que le causa un perjuicio a sus derechos y garantías fundamentales.

De lo anterior se desprende que el accionante está legitimado para interponer el presente recurso, el cual debe ser admitido para hacer un análisis de fondo de las alegaciones planteadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el Auto de 29 de agosto de 2005, proferido por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y en su lugar, le ordena al Primer Tribunal Superior que ADMITA el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Constitucionales propuesto por el licenciado Oswaldo Fernández, en representación del licenciado Franklin Miranda Icaza contra la orden de hacer contenida en el Auto Ampliatorio N°270 de 5 de agosto de 2005 proferido por el Juez Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

NOTIFÍQUESE,

ADÁN ARNULFO ARJONA L.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VICTOR L. BENAVIDES P. --
ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- HARLEY J.
MITCHELL D. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA
FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

2.

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL
LICENCIADO MARTÍN WILSON CHEN EN REPRESENTACIÓN DE
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] CASTILLO CONTRA LA ORDEN DE HACER
CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 23 DE AGOSTO DE 1995 PROFERIDA
POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA.
PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado MARTÍN WILSON CHEN, actuando en su calidad de apoderado judicial de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] CASTILLO, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 23 de agosto de 1995 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En la referida resolución judicial se reforma la sentencia de 5 de octubre de 1994, expedida por el Juzgado Segundo de Circuito Penal, que denegó la solicitud de indemnización por daños y perjuicios presentada por el licenciado Jaime Vega contra la señora SOLÍS CASTILLO, y en su lugar ordenó a la prenombrada el pago de la indemnización, que debería ser cuantificada en la vía correspondiente. Además, se confirma en todos los demás puntos la sentencia de primera instancia, que declaró justiciable a BLANCA SOLÍS y la condenó por el delito de estafa contra el Banco Comercial de Panamá, a la pena de dos años de prisión, cincuenta días multa y la inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por dos años.

Las razones invocadas por el amparista para fundamentar la supuesta conculcación de las garantías constitucionales a la señora SOLÍS se centran de manera medular en el argumento de que los Tribunales A-quo y Ad-quem en la causa penal condenaron a la señora BLANCA SOLÍS por el delito de Estafa, cuando el delito supuestamente cometido fue el de apropiación indebida, y en la circunstancia de que el delito imputado de manera errada: Estafa, tampoco es del conocimiento de un Juez de categoría circuital, sino municipal, por lo que a juicio de la parte actora la señora SOLÍS fue condenada por un Tribunal que carecía de competencia para decidir la causa penal. Estima la parte actora que esta actuación vulnera la garantía constitucional del debido proceso legal, así como el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Acogida la demanda, se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado, quien mediante Oficio N° 430-I de 14 de diciembre de 1995 remite a esta Corporación Judicial el expediente penal contentivo del proceso seguido a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] CASTILLO.

Ante la ausencia de un informe de conducta que permita al Tribunal examinar tanto el elemento fáctico, como el fundamento de la actuación del Segundo Tribunal Superior de Justicia en este caso, procedemos a repasar

íntegramente los hechos que dieron origen a la controversia constitucional planteada.

ANTECEDENTES

El día 3 de junio de 1993 el Juzgado Segundo de Circuito penal abrió causa criminal contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ordenando su inmediata detención preventiva, por considerar que existían méritos suficientes para llamarla a responder por la denuncia que por Estafa había suscrito el Banco Comercial de Panamá en su contra.

La denuncia tenía como base el hecho alegado de que la señora SOLÍS se había aprovechado de la buena fe de la entidad de crédito, que había acordado con ella el levantamiento de la garantía hipotecaria que recaía sobre su vehículo (en virtud de contrato de préstamo suscrito entre ésta y BANCOMER) para que el gravamen recayera de inmediato sobre otro bien mueble (otro vehículo de su propiedad), con la particularidad de que antes de prestar la nueva garantía hipotecaria la señora SOLÍS había traspasado el bien, burlando a la entidad crediticia que no contaba con un bien que garantizara la obligación contraída previamente.

El Juzgado Segundo de Circuito Penal, en sentencia de 5 de octubre de 1994 condenó a la señora SOLÍS, por considerar que se confrontaba una conducta típica, antijurídica y culpable, por el hecho de aprovechar la señora SOLÍS el levantamiento de la hipoteca para traspasar el nuevo vehículo que ella misma había ofrecido en garantía para honrar su obligación crediticia, lo que constituía una actitud dolosa y engañosa con la entidad bancaria, que le causaba además un cuantioso perjuicio patrimonial.

Sin embargo, antes de ser condenada, específicamente al momento de abrirse la causa criminal, se ordenó la detención de la señora SOLÍS. Contra este acto judicial se presentó acción de habeas corpus, misma que fuere resuelta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en sentencia de 31 de enero de 1995, que declaró ilegal de detención preventiva, con apoyo en dos circunstancias medulares:

1. Que el delito que se imputaba a la señora SOLÍS, contemplado en el artículo 190 del Código penal conllevaba una sanción de prisión que no excede los dos años, razón por la cual la competencia era de un Juez Municipal, según lo previsto en el artículo 174 del Código Judicial;
2. Porque al tratarse de una pena mínima inferior a los dos años de prisión, no es aplicable la medida cautelar personal de detención preventiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial.

Finalmente, el Tribunal de Habeas Corpus externó algunos juicios concernientes a la calificación legal del delito que se imputaba a la señora

SOLÍS, manifestando que, pese a que la conducta reprochable podía ser encausada dentro del tipo penal de apropiación indebida y no de estafa, el error en la tipificación delictiva no podía ser enmendado después de un enjuiciamiento ejecutoriado por estafa.

Es precisamente con fundamento en estos juicios esbozados por el Tribunal de Habeas Corpus que se plantea la violación constitucional del debido proceso legal por parte de la sentencia penal expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dado que, pese a tratarse del mismo Cuerpo Colegiado que manifestó, aunque dentro de la Acción de Habeas Corpus, la falta de competencia del Juzgado Circuital para conocer de la encuesta penal, al conocer del asunto penal como Tribunal de Segunda instancia, confirmó la sentencia que condena por estafa a BLANCA SOLÍS, y en consecuencia convalidó la actuación del Juez Segundo de Circuito.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

Considera el recurrente que el acto acusado resulta violatorio de los artículos 31 y 32 de la Constitución Nacional.

Reproducimos a continuación los textos constitucionales referidos:

"Artículo 31. Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado."

"Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Estima el amparista que se ha violado el debido proceso legal en este caso, dado que pese a la aludida incompetencia del Juez de Circuito para conocer de la causa penal, se confirma la actuación y sentencia expedida por un Tribunal sin competencia, contraviniendo directamente el primer postulado del artículo 32 de la Constitución Nacional, en el sentido de que "nadie será juzgado sino por autoridad competente"

En cuanto a la alegada violación del artículo 31 de la Constitución Nacional, la transgresión constitucional se sustenta en los siguientes términos:

"Este artículo ha sido violado en forma directa tanto por el Juzgado Segundo del Circuito, como por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al condenar a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] CASTILLO por el delito de ESTAFA, cuando el delito supuestamente cometido fue el de APROPIACIÓN INDEBIDA AGRAVADA, tipificado en el Artículo 195B del Código Penal."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Superioridad, al examinar los cargos presentados por el amparista y confrontarlos con los textos constitucionales que se aducen infringidos, debe externar lo siguiente:

En primer término, esta Corporación Judicial ha venido señalando en copiosos pronunciamientos que la Acción de Habeas Corpus es una institución de garantía que tutela de manera específica la libertad corporal, de forma tal que una persona no se vea sometida a restricción ambulatoria alguna, si tal medida no se encuentra fundada en la Ley, y con el pleno sometimiento a las formalidades constitucionales y legales establecidas.

En este contexto, la Corte advierte que la Acción de Habeas Corpus decidida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en resolución de 31 de enero de 1995, no se limitó a destindar la legalidad o no de la detención preventiva de la señora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], sino que además se adentra en el terreno de la calificación legal del delito que se imputaba a la prenombrada, y por el cual estaba siendo llamada a juicio.

Aunque no es ésta la resolución judicial impugnada, es preciso reparar en las situaciones creadas por la sentencia aludida, toda vez que es con base en tal pronunciamiento jurisdiccional que el amparista ha entablado la acción de naturaleza constitucional que nos ocupa.

En efecto, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en funciones de Tribunal de Habeas Corpus, indicó de manera enfática que el delito que se confrontaba por razón de la conducta de la señora SOLÍS era el de apropiación indebida y no el de estafa. Otros de los puntos que se destacan en la aludida sentencia, es que denuncia un aspecto que no había sido siquiera señalado por la parte afectada, esto es, la falta de competencia del Juez Circuital que conocía del asunto penal, puntualizando lo siguiente:

"Con respecto a la estafa debemos tener presente que está tipificada en el artículo 190 del Código P. y contempla sanción de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 150 días multa, por tanto la competencia para el conocimiento por los delitos de estafa le corresponde a los jueces municipales de la jurisdicción donde fue cometido el hecho punible, de conformidad con lo previsto en el artículo 174, literal A ordinal 2 del Código Penal (sic), porque la excerta legal citada exige dos requisitos que a saber son los siguientes:

A. La cuantía del delito contra la propiedad debe ser menor de mil balboas (B/.1,000.00);

b: La pena de prisión no debe exceder de dos años y,

Para la estafa la pena de prisión, en los casos del artículo 190 del Código Penal, nunca excede de dos años, por consiguiente, aún cuando la cuantía le corresponde fuese mayor de mil balboas (B/.1,000.00) la competencia le corresponde a los

juzgados municipales, porque debe tomarse en consideración la pena de prisión, pues los delitos cuya pena de prisión exceden de dos años, son los que le corresponde conocer a los juzgados de circuito.

Lo anterior significa que en el caso de los delitos de estafa existe contradicción en la norma porque establece un requisito referente a la cuantía y el otro en cuanto a la pena de prisión, en consecuencia, ante esa contradicción debe resolverse la controversia con respecto a la pena de prisión y en cuanto a lo más favorable, y en este caso sería la del conocimiento de un juzgado municipal."

Pese a los conceptos vertidos en la sentencia de 31 de enero de 1995, el mismo Tribunal Superior, en funciones de Tribunal de Segunda Instancia dentro del proceso penal por estafa seguido a BLANCA SOLÍS, en sentencia de 23 de agosto de 1995 confirmó la condena de dos años de prisión dictada por el Juzgado Segundo de Circuito por el delito de estafa. Existe por tanto, una aparente contradicción entre las dos sentencias expedidas por el mismo Tribunal, contradicción a la que hace alusión el amparista para fundamentar la acción presentada, en el sentido de que si la sentencia de habeas corpus fue enfática en el sentido de que la calificación del delito era otra distinta a la estafa, y que el Juzgado Circuitual no era el competente para conocer de la causa penal, mal podía en sentencia de segunda instancia, confirmar todo lo actuado.

En cuanto al primer punto denunciado: la calificación del hecho punible, debemos destacar que no era el Tribunal de Habeas Corpus la instancia competente para calificar el ilícito investigado. Esta Superioridad así lo ha reiterado en múltiples ocasiones, v. g. sentencia de 22 de abril de 1994 en que el Pleno de la Corte de manera clara señaló: "Esbozamos las ideas anteriores para indicar, que sin entrar en consideraciones sobre la calificación del delito, que serían por demás completamente impropias y ajenas a la competencia del Tribunal de Habeas Corpus, que sólo examina la legitimidad formal de la medida adoptada."

Más recientemente, en sentencia de 7 de diciembre de 1995, esta Superioridad señaló: "Nada impide sin embargo, que en transcurso de la investigación sumarial surjan nuevos elementos que hagan variar la situación procesal del imputado, pero tal calificación corresponderá al Tribunal de la causa, toda vez que en esta instancia sólo corresponde a esta Superioridad examinar si la detención preventiva se ajusta a las formalidades legales establecidas ..."

Como queda expuesto, la calificación que del delito realizó el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro de la sentencia de habeas corpus resultaba ajena a la finalidad de la acción.

Sin embargo, como Tribunal Ad-quem de la causa penal, acepta lo actuado por el Juez Segundo de Circuito, sin adelantar comentario alguno con respecto a la calificación del delito, y lo que es más importante, la competencia del Juzgador.

Como lo que respecta a la calificación legal tal asunto no puede ser dirimido dentro de la Acción de Amparo de Garantías, por tratarse de un aspecto legal, que no conculca garantía constitucional alguna, siendo que este mismo Tribunal ha sido reiterativo al indicar que la finalidad de las acciones de amparo no es la de erigirse en una tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional, y como la calificación del Tribunal de Habeas Corpus en esta materia no resulta conducente, debemos descartar el cargo propuesto contra el artículo 31 de la Constitución Nacional, pero es preciso examinar el aspecto procesal de la competencia del juez segundo de circuito para conocer del asunto, porque el mismo guarda relación con el debido proceso legal.

En efecto, las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. En este sentido, de acuerdo al principio de estricta legalidad procesal, la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley. Ello implica el acatamiento de las formalidades básicas que rigen la actividad jurisdiccional, entre ellas: asegurar a las partes en todo proceso legalmente establecido la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, para decidir la materia en conflicto.

El punto en controversia resulta en este caso, si la competencia establecida en el Código Judicial para los delitos de estafa atiende la cuantía del negocio (perjuicio patrimonial sufrido) o la sanción punitiva aplicable, o a ambas, de manera simultánea. Sólo tal determinación permitirá al Tribunal establecer si el Juzgado Segundo de Circuito Penal tenía o no competencia para conocer del negocio.

Conforme a la doctrina más aceptada, la competencia es la medida de la jurisdicción asignada por la ley al ente jurisdiccional; la determinación genérica de los asuntos sobre los cuales es llamado a conocer y decidir.

Al examinar el artículo 174, literal A, ordinal 2, del Código Judicial se advierte que la distribución de competencia que hace la ley en materia de delitos contra el patrimonio (entre ellos el de estafa) para asignar su conocimiento a los jueces de la esfera municipal está determinada por dos aspectos: a) cuantía que no rebase los mil balboas y b) pena de prisión que no debe exceder los dos años.

En el negocio que nos ocupa nos encontramos frente a un hecho declarado punible que involucra un perjuicio patrimonial superior a los mil balboas, pero cuya sanción punitiva no excede los dos años de prisión.

En este contexto, cabe indicar que el artículo 159 en su numeral 15, lista una serie de procesos penales que son del conocimiento de los jueces de circuito, señalando en su párrafo final que le corresponderá a esta categoría de funcionarios el conocimiento de cualquier delito que tenga en la Ley señalada pena mayor de dos años de prisión. En este aspecto parece existir coincidencia y congruencia con lo establecido en el artículo 174 del Código Judicial. Sin embargo, el ordinal a del artículo 159 también ha establecido que los procesos cuya cuantía sea superior a mil balboas serán de competencia de los Jueces de Circuito.

El Tribunal se encuentra pues en la disyuntiva de determinar si la asignación de competencia y sustanciación de la causa penal por el delito de estafa contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por parte del Juez Segundo de Circuito Penal resulta contraria al debido proceso legal.

Y en este punto advierte que, en puridad de verdad, debido a la cuantía del negocio que supera los mil balboas de perjuicio patrimonial, el Juez Segundo de Circuito consideró que era el Juez natural para sustanciar la causa. No resulta de todo infalible, por ende, la interpretación que sobre el particular adelantara el Segundo Tribunal Superior de Justicia con sujeción al artículo 159 del Código Judicial, cuando indicó que el único criterio atendible para fijar la competencia era el de la pena aplicable al imputado. Así, el mismo artículo 159 señala que todo proceso cuya cuantía supere los mil balboas será de conocimiento de los Jueces de Circuito.

En estas circunstancias, el Pleno de la Corte considera que en estricto sentido jurídico el Juez Circuital no pretendió conculcar las garantías del debido proceso en este negocio, pues el Juzgador de Primera instancia actuó según su leal saber y entender, asumiendo el conocimiento de la litis puesto que no se cumplía uno de los presupuestos que asignaba el conocimiento del negocio a los Jueces Municipales, esto es, la cuantía del negocio.

Sin embargo, y debido a que es preciso deslindar de manera definitiva quién es el Juez natural en estos casos, la Corte considera atendible el criterio externado por el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia de 31 de enero de 1995, que indica que la competencia en estos procesos debe ser asignada de manera exclusiva a los Jueces de la esfera municipal. Para ello, debe tenerse en consideración que el numeral 15 del artículo 159 del Código Judicial enumera una serie de procesos penales que serán del conocimiento de los jueces circuitales (hurto, peculado, competencia desleal etc.), entre los que no se encuentra la estafa, apropiación indebida u otros fraudes, más termina indicando que aquellos no listados, pero cuya pena supere los dos años de prisión, serán de su competencia.

Se advierte que la estafa ni se contempla en el listado del numeral 15 del artículo que asigna negocios a la competencia de los jueces de circuito, ni tiene prevista sanción que excede los dos años de prisión. Mientras que el

artículo 174 que establece la competencia de los Jueces Municipales pareciera llenar el vacío de aquellos negocios que no le fueron atribuidos a los Jueces de Circuito de manera expresa, cuando se trata de delitos contra el patrimonio cuya pena no excede los dos años de prisión.

En estos términos, pese a que la situación no se presenta del todo clara, tal como lo expresara el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el conjunto normativo examinado tiende a determinar que la sanción o pena aplicable sí es un factor determinante de la competencia en este caso, y hasta cierto punto excluye a los otros factores de competencia.

Acotamos, finalmente, que esta interpretación encierra además un principio de utilidad judicial, toda vez que a los jueces circuitales les está asignado un gran cúmulo de negocios, incluyendo particularmente aquellos que por ley no están atribuidos de manera expresa a otra autoridad, por lo que mal podría continuar recargándose la labor de estos servidores judiciales, cuando el texto del artículo 174 del Código Judicial le asigna competencia a los jueces municipales para conocer de aquellos delitos cuya pena no exceda los dos años de prisión.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia al momento de sustanciar la apelación, podía subsanar o sanear la situación denunciada por ese mismo Tribunal Colegiado, relativa a la falta de competencia del Juzgado de Circuito para conocer del negocio penal. Sin embargo no lo hace, pese a que ello era perfectamente posible a tenor de lo previsto en los artículos 1136 y 2301 del Código Judicial.

En efecto, una de las causales de nulidad del proceso penal es la falta de jurisdicción o competencia del Tribunal que actúa, según lo dispuesto en el artículo 2297 del Libro Tercero del Código Judicial. El artículo 2300 ibídem por su parte preceptúa:

"Artículo 2300. Cuando en el curso del proceso, el Juez que conoce del mismo, advierta que se ha incurrido en algunas de las causales expresadas en el artículo 2297, ordenará la reposición del proceso para que se subsane el defecto, si a ello hubiere lugar."

Por su parte, el artículo 2301 del mismo cuerpo legal ha dispuesto:

"Artículo 2301. Siempre que un proceso se halle en un Tribunal de segunda instancia por razón de recurso o consulta, el superior debe examinar si se ha incurrido en alguna irregularidad por la cual haya de ordenarse la reposición del proceso."

Como queda expuesto, el Segundo Tribunal Superior de Justicia no hizo uso del instituto de saneamiento en la apelación, lo que hubiese permitido enmendar la situación creada por el Juzgado de Circuito al asumir el conocimiento del negocio. Como se advierte, nos encontramos frente a una causal de nulidad que anula el proceso desde su génesis misma, por la falta de competencia del Juzgador de la causa penal.

Se verifica pues, la existencia de un vicio de nulidad que ha vulnerado el debido proceso legal en este caso, razón por la cual el alcance de la reparación del derecho subjetivo conculcado debe acceder hasta el inicio de la sustanciación de la encuesta penal, esta vez por el Juzgador competente para conocer de la misma, como lo es un Juez de la esfera municipal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de Garantías Constitucionales impetrado, REVOCA la sentencia de 23 de agosto de 1995 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, así como las actuaciones que llevaron a la expedición de la sentencia de 5 de octubre de 1994, dictada por el Juez Segundo de Circuito y ORDENA que la denuncia penal instaurada contra la señora [REDACTED] CASTILLO por el delito de estafa en perjuicio del BANCO COMERCIAL DE PANAMÁ, sea remitida a un Juzgado Municipal para que se le dé el trámite de rigor.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE CON SALVAMENTO DE VOTO

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Discrepo de la mayoría, con el mayor respeto, en ocasión de este amparo de garantías constitucionales, que resuelve revocando una sentencia por falta de competencia, en las circunstancias que se explicitan a continuación.

Luego de dictada sentencia de segunda instancia por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (en que se confirma la condena a [REDACTED] [REDACTED] CASTILLO a dos (2) años de prisión y cincuenta (50) días multa por el delito de estafa), la sancionada interpuso el recurso de amparo de garantías constitucionales que nos ocupa.

El recurso de amparo se funda en que se "condena a [REDACTED] [REDACTED] CASTILLO por un delito distinto a el (sic) cometido, violándose el debido proceso". No obstante, es honesto registrar que al señalar las disposiciones constitucionales infringidas, alude a la falta de competencia.

Se indica lo anterior para evidenciar que aún el 11 de diciembre de 1995 cuando se interpone el amparo (la sentencia impugnada tiene fecha 23 de agosto de 1995), no se considera como cuestión destacada el que haya intervenido un tribunal incompetente, pues, en los hechos del amparo se habla de "condenar por un delito distinto al cometido", y no se hace referencia (en los hechos) a la falta de competencia.

No hay evidencias, en efecto, de que se haya planteado debate en el proceso penal en el cual se dictó la sentencia impugnada, acerca de la falta de competencia. Esto significa que tanto los tribunales como la imputada, en el quehacer práctico que el proceso representa, toman como evidente que aquellos son competentes.

Por otra parte el PLENO en la decisión con la que difiero viene a plantear ahora, después de terminado el juicio penal, la cuestión de la competencia de ese juicio ya terminado. Y lo hace no a trasluz de vulneración o lesiones de derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, sino en el plano meramente legal, ajeno a los propósitos del recurso de garantías constitucionales.

Para demostrarlo transcribo los argumentos del Pleno:

"El punto en controversia resulta en este caso, si la competencia establecida en el Código Judicial para los delitos de estafa atiende la cuantía del negocio (perjuicio patrimonial sufrido) o la sanción punitiva aplicable, o a ambas, de manera simultánea.

Sólo tal determinación permitirá al Tribunal establecer si el Juzgado Segundo de Circuito Penal tenía o no competencia para conocer del negocio.

Conforme a la doctrina más aceptada, la competencia es la medida de la jurisdicción asignada por la ley al ente jurisdiccional; la determinación genérica de los asuntos sobre los cuales es llamado a conocer y decidir.

Al examinar el artículo 174, literal A, ordinal 2, del Código Judicial se advierte que la distribución de competencia que hace la ley en materia de delitos contra el patrimonio (entre ellos el de estafa) para asignar su conocimiento a los jueces de la esfera municipal está determinada por dos aspectos: a) cuantía que no rebase los mil balboas y b) pena de prisión que no debe exceder los dos años.

En el negocio que nos ocupa nos encontramos frente a un hecho declarado punible que involucra un perjuicio patrimonial superior a los mil balboas, pero cuya sanción punitiva no excede los dos años de prisión.

En este contexto, cabe indicar que el artículo 159 en su numeral 15, lista una serie de procesos penales que son del conocimiento de los jueces de circuito, señalando en su párrafo final que le corresponderá a esta categoría de funcionarios el conocimiento de cualquier delito que tenga en la ley señalada pena mayor de dos años de prisión. En este aspecto parece existir coincidencia y congruencia con lo establecido en el artículo 174 del Código Judicial. Sin embargo, el ordinal a del artículo 159 también ha establecido que los procesos cuya cuantía sea superior a mil balboas serán de competencia de los Jueces de Circuito.

El Tribunal se encuentra pues en la disyuntiva de determinar si la asignación de competencia y sustanciación de la causa penal por el delito de estafa contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por parte del Juez Segundo de Circuito Penal resulta contraria al debido proceso legal.

Y en este punto advierte que, en puridad de verdad, debido a la cuantía del negocio que supera los mil balboas de perjuicio patrimonial, el Juez Segundo de Circuito consideró que era el Juez Natural para sustanciar la causa. No resulta de todo infalible, por ende, la interpretación que sobre el particular adelantara el Segundo Tribunal Superior de Justicia con sujeción al artículo 159 del Código Judicial, cuando indicó que el único criterio entendible para fijar la competencia era el de la pena aplicable al imputado. Así, el mismo artículo 159 señala que todo proceso cuya cuantía supere los mil balboas será de conocimiento de los Jueces de Circuito.

En estas circunstancias, el Pleno de la Corte considera que en estricto sentido jurídico el Juez Circuital no pretendió conculcar

las garantías del debido proceso en este negocio, pues el Juzgador de Primera Instancia actuó según su leal saber y entender, asumiendo el conocimiento de la litis puesto que no se cumplía uno de los presupuestos que asignaba el conocimiento del negocio a los Jueces Municipales, esto es, la cuantía del negocio.

Sin embargo, y debido a que es preciso deslindar de manera definitiva quién es el Juez natural en estos casos, la Corte considera atendible el criterio externado por el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia de 31 de enero de 1995, que indica que la competencia en estos procesos debe ser asignada de manera exclusiva a los Jueces de la esfera municipal. Para ello, debe tenerse en consideración que el numeral 15 del artículo 159 del Código Judicial enumera una serie de procesos penales que serán del conocimiento de los jueces circuitales (hurto, peculado, competencia desleal, etc.), entre los que no se encuentra la estafa, apropiación indebida u otros fraudes, más termina indicando que aquellos no listados, pero cuya pena supere los dos años de prisión, serán de su competencia.

Se advierte que la estafa ni se contempla en el listado del numeral 15 del artículo que asigna negocios a la competencia de los jueces de circuito, ni tiene prevista sanción que excede los dos años de prisión. Mientras que el artículo 174 que establece la competencia de los Jueces Municipales pareciera llenar el vacío de aquellos negocios que no le fueron atribuidos a los Jueces de Circuito de manera expresa, cuando se trata de delitos contra el patrimonio cuya pena no excede los dos años de prisión.

En estos términos, pese a que la situación no se presenta del todo clara, tal como lo expresara el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el conjunto normativo examinado tiende a determinar que la sanción o pena aplicable sí es un factor determinante de la competencia en este caso, y hasta cierto punto excluye a los otros factores de competencia.

Acotamos, finalmente, que esta interpretación encierra además un principio de utilidad judicial, toda vez que a los jueces circuitales les está asignado un gran cúmulo de negocios, incluyendo particularmente aquellos que por ley no están atribuidos de manera expresa a otra autoridad, por lo que mal podría continuar recargándose la labor de estos servidores judiciales, cuando el texto del artículo 174 del Código Judicial le asigna competencia a los Jueces Municipales para conocer de aquellos delitos cuya pena no exceda los dos años de prisión" (Fs. 10-13).

Nada hay constitucional en tan larga exposición.

No es ésta la falta de competencia que se debe discutir en los amparos. Hacerlo redundará en perjuicio de la administración de justicia, como es fácil prever, cuando se afecta la estabilidad de las decisiones judiciales por el desconocimiento de la institución de la cosa juzgada.

Estamos frente a un proceso que presenta todos los visos de seriedad. En que actúan tribunales ordinarios, con oportunidad para el imputado de plantear la falta de competencia, y que sin embargo nunca lo hizo. A posteriori, sólo después de sentencia de segundo grado condenatoria y mediante amparo en que la competencia viene de soslayo, se viene a discutir la competencia, y no en la esfera constitucional.

Cuando el artículo 32 de la Constitución habla de tribunales competentes no pretende entrar en las minucias de debates sobre cuál sería el mejor criterio, sino a cuestiones que revelen palmariamente falta de competencia para conocer del caso, y que marginan el debido proceso. Más que a la falta de competencia, la disposición constitucional apunta a la falta de jurisdicción. ("... si (un juez) no tiene jurisdicción para el caso, menos le corresponde la competencia"). Hernando Devis Echandía, *Compendio de Derecho Procesal*, Editorial ABC, Bogotá, 1983, Pág. 136).

Considero en este sentido que lo planteado en el recurso de amparo carece de rango constitucional.

Por otra parte, ya se ha podido observar que la sentencia es de fecha 23 de agosto de 1995 y el amparo se interpuso el 11 de diciembre. Al decidir como se ha hecho se está prescindiendo del criterio reiterado de que el amparo es para conjurar un peligro inminente, condición que se le niega a una situación constituida desde relativamente largo tiempo. Mucho se ha insistido en lo que expresa el artículo 2606 del Código Judicial que se refiere a que el amparo es contra actos 1) que vulneren garantías fundamentales; 2) cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

Las sentencias del Pleno de 30 de septiembre de 1993, 15 de abril de 1994 y 13 de enero de 1996 son consultables.

¿Cómo dejar de lado que para interponer amparo de garantías constitucionales se requiere agotar las vías ordinarias? Repito, no aparece que en la dilatación del proceso penal hasta la sentencia de segunda instancia, el imputado haya planteado la falta de competencia de los tribunales.

Veo con preocupación que la Corte intervenga excesivamente, a través del amparo, en procesos de toda naturaleza, sin que se trate de actos que vulneren o lesionen los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución.

Auto N° 418 de 19 de agosto de 2003, expedida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Los Santos, Ramo Penal.

El recurso se encuentra para ser resuelto, a lo que procede el Pleno, previas las consideraciones que se adelantan.

El recurso vertical ensayado se propone contra la resolución de 17 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se concede la acción de amparo propuesta por el señor ALCIBÍADES CORTÉS C., contra el Auto N° 418 descrito en el encabezado, en virtud del cual se abre causa criminal contra los señores ROBERTO URRIOLO PORRAS, ALCIBÍADES CORTÉS CÓRDOBA, EDUARDO BARTUANO SÁEZ, por la presunta comisión de las disposiciones legales recogidas en el Título III, Capítulo I del Libro II del Código Penal. En otras palabras, mediante la resolución objeto de apelación se revoca el auto de llamamiento a juicio contra el accionante y demás sindicados.

ANTECEDENTES

Consta en autos que la firma forense WATSON & ASSOCIATES, en calidad de apoderada judicial del señor ALCIBÍADES CORTÉS CÓRDOBA, propuso acción constitucional de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contra el referido Auto N° 148, dictado el 19 de agosto de 2003 por el Juzgado Segundo de lo Penal, del Circuito de Los Santos, en el proceso penal seguido en su contra, por considerar que el mismo violaba la garantía fundamental del debido proceso contenida en el artículo 32 y el artículo 8 del Pacto de San José, el cual forma parte del bloque de la constitucionalidad, según jurisprudencia constitucional de la Corte.

Medularmente sostiene el accionante en su respectivo libelo de amparo que el Auto demandado en amparo incumple el referido derecho, por cuanto el tribunal demandado no fundamenta dicha resolución, por medio de la cual se le llama a juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 2221 del Código Judicial. El juez tenía la obligación legal, a juicio del demandante, de fundamentar los elementos básicos de naturaleza fáctica, jurídica y probatoria en el cual se basa el auto de encausamiento, lo cual omitió, conculcándole el derecho a defensa.

La acción comentada, como se ha dicho, fue concedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante resolución de 17 de septiembre de 2003, que es precisamente la que se recurre en apelación.

RESOLUCIÓN RECURRIDA

En primera instancia, desestima la resolución recurrida en amparo las objeciones formuladas por la parte opositora a la acción, asistido por el licenciado IRVING DOMÍNGUEZ BONILLA contra la acción propuesta, en el

sentido de que el Auto demandado en amparo no era susceptible de la acción de amparo, por tratarse de una resolución que abre causa criminal la cual no contiene una orden de hacer o no hacer, propiamente tal, conforme a la reiterada jurisprudencia del Pleno.

Manifiesta el tribunal a-quo que excepcionalmente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha concedido amparo contra autos encausatorios, como en el fallo de 11 de enero de 1999, que reitera en la sentencia de 4 de agosto de 2000. En cuanto a los argumentos del amparista, considera el tribunal que en efecto, el Auto demandado en amparo vulnera la garantía fundamental del debido proceso, por falta de motivación. En lo pertinente, se dejan transcrito el criterio externado por el tribunal a-quo:

"Ciertamente que nuestro más alto Tribunal de Justicia, en reiterados fallos ha sostenido que el auto de proceder no puede ser considerado en estricto derecho como una orden de hacer susceptible de ser impugnada por la vía de [REDACTED] [REDACTED].

Excepcionalmente la Honorable Corte Suprema de Justicia ha concedido [REDACTED] [REDACTED] Constitucionales contra Auto encausatorio y así en fallo de 11 de enero de 1999, dentro del [REDACTED] [REDACTED] Constitucionales promovido por Edgar Lenis Garrido contra el Auto de 10 de diciembre de 1996 del Juzgado Cuarto del Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial (Registro Judicial de enero de 1999, páginas 8-12),

Esta posición la reitera la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 4 de agosto de 2000, donde incluso cita el fallo anterior.

La confrontación a la que se somete el auto encausatorio impugnado por la acción extraordinaria le exige el artículo 2221 del Código Judicial, dejan con el contenido que evidenciado la omisión de una narración sucinta y fiel de los hechos que hubieran dado lugar a la investigación, con expresión de la forma o modo como el hecho llegó al conocimiento del funcionario, exigido por el numeral 1, advirtiéndose, asimismo la ausencia del elemento de mayor importancia, consistente en el análisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y aquellos en que se funda la imputación del hecho.

No basta que se enuncien las pruebas, sino que es preciso, en un auto de proceder, un análisis de las mismas para demostrar, en primer lugar, que se ha producido la comisión de un hecho punible y; en segundo lugar, se requiere el análisis de ellas en que se fundamenta la imputación del hecho.

La ausencia de estos elementos deviene en la orfandad de la parte motiva, y en consecuencia, en la violación del debido proceso penal, tutelado por el artículo 32 de la Carta Fundamental.

Como corolario, se evidencia que el amparista no es la única persona que resultó indagada en la encuesta penal y siendo ello así, con mayor razón se exige el análisis de los elementos probatorios que producen la vinculación

objetiva individual al hecho punible de cada imputado, lo que se hecha de menos en la resolución impugnada.

Al producirse una de las circunstancias especiales -violación al debido proceso- a los que se ha referido la Honorable Corte Suprema de Justicia para admitir acciones extraordinarias de [REDACTED] [REDACTED] Constitucionales contra Autos de proceder, debe accederse a la petición elevada por el accionante". (f. 32-36)

RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación objeto de examen ha sido propuesto por el señor ELÍAS COMBE GONZÁLEZ, en calidad de tercero interesado en la acción de amparo que se decide en grado de apelación. Básicamente, la parte censura la concesión de la acción de amparo por parte del tribunal a quo, sin que reuniera los presupuestos o requisitos legales para su admisión. En este sentido sostiene que el Auto encausatorio no contiene orden de hacer o no hacer alguna, por lo que no es susceptible de amparo; además, que el acto demandado en amparo adolece de gravedad e inminencia del daño.

En relación al primero de los requerimientos procesales, cita y reproduce una serie de fallos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los que se advierte que con carácter general ha sostenido el Pleno que el Auto de llamamiento a juicio no contiene orden de hacer o no hacer, por lo que no admite amparo en contra. Se trata, más bien, de una resolución interlocutoria, que no decide el fondo del negocio y no entra a considerar la inocencia o culpabilidad del sindicado, que sigue conservando a su favor la presunción de inocencia.

Si bien, advierte el apoderado judicial del recurrente, excepcionalmente la Corte ha admitido la acción de amparo contra auto encausatorio, ello ha ocurrido en proceso donde no existían elementos de prueba que vincularan al sindicado con el ilícito que se le imputaba, como es el caso decidido mediante el fallo que cita el a-quo en la resolución recurrida. Por tanto, argumenta, que no se puede convertir en regla general lo que constituye la excepción, máxime cuando, en el auto encausatorio demandado en amparo aparecen especificados los elementos de prueba y normas jurídicas que existen en el proceso y que vinculan al accionante y demás sindicados con el ilícito penal cuya comisión se les imputa, por lo que conceptúa, no le cabe razón al sentenciador de primera instancia.

En relación con la gravedad e inminencia del daño, señala que no se cumple éste presupuesto de la acción, toda vez que el demandante ha esperado casi un mes para presentar la demanda de amparo contra el Auto N° 148, tantas veces referido.

POSICIÓN DEL PLENO

Como viene expuesto, el recurso de apelación sustanciado ha sido propuesto por persona distinta a la accionante, por lo que debe el Pleno en primera instancia referirse a la legitimación del apelante para intervenir, en calidad de tercero afectado con la decisión, en un proceso que no ha propuesto.

La Corte desde el fallo de 18 de abril 1997 ha venido admitiendo de manera consistente la intervención de terceros en apelación propuesta dentro del proceso de amparo, particularmente cuando el recurso lo promueva una parte afectada con la decisión recurrida (recientemente, en el fallo 31 de enero de 2003). La intervención del tercero en el proceso de amparo, en el que no es parte, viene justificada para el Pleno por una necesidad de orden fundamental, cual es, garantizar el respeto a la tutela efectiva de los tribunales, que supone el derecho que tiene toda persona a ser oído en las causas en que se decida sobre sus derechos y obligaciones y, en general, cuya decisión pueda afectarle de manera adversa.

Por tanto, considera el Pleno que el recurrente, quien es parte querellante en el proceso penal al cual accede la acción constitucional que se examina en grado de apelación, se encuentra legitimado para intervenir en el proceso, por cuanto lo que aquí se decida le afecta.

Entrando en materia del recurso, advierte el Pleno que cuestiona el apelante, el cumplimiento de los requisitos inherentes a la existencia de orden de hacer o no hacer, así como de la gravedad e inminencia del daño en relación con la demanda de amparo propuesta por el señor ALCIBÍADES CORTÉS. Respecto del primero de los requisitos se dice que el Auto N° 148 de 19 de agosto de 2003, es un auto de proceder, por lo que no contiene orden de hacer o no hacer, conforme a conocida doctrina del Pleno, punto que comparte esta Superioridad, no así el aspecto relativo a la supuesta ausencia de gravedad e inminencia del daño, por haber transcurrido un mes entre la expedición del acto demandado en amparo y la proposición de la acción misma.

Constituye doctrina reiteradísima de esta Superioridad que el auto mediante el cual se abre causa criminal, no contiene orden de hacer o no hacer, por lo que no son susceptibles de [REDACTED] constitucionales. Además, de los fallos citados por la parte recurrente, en los de 8 de mayo de 2002, 4 de agosto de 2000, 9 de noviembre de 1995, 28 de junio de 1994, 15 de noviembre de 1993, 16 de noviembre de 1992, entre muchos otros precedentes, aparece recogida la citada doctrina del Pleno, la cual viene fundada en el carácter interlocutorio del auto de proceder, que no decide sobre la responsabilidad del imputado, sino que califica el sumario, es decir, si concurren los presupuestos -existencia del hecho imputado y la identidad de su presunto autor- para la celebración de la audiencia oral, facultad esta que reserva la ley al juez de la causa.

Excepcionalmente, el Pleno de esta Corporación de Justicia ha concedido [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contra autos de proceder, como en los casos citados en la sentencia recurrida, cuando de los mismos se derivan claras vulneraciones a garantías fundamentales consignadas en la Constitución, lo que en todo caso habrá de apreciarse con arreglo a criterios de racionalidad y proporcionalidad que han de tenerse en cuenta para cada caso en particular, en los cuales ha de sopesarse los derechos y bienes jurídicos tutelados en juego.

Como en grado de cumplimiento del presupuesto derivado del principio de definitividad o subsidiariedad, que impone la carga de agotar los medios de impugnación procedentes en vía ordinaria, el Pleno ha sido enérgico con respecto al debido cumplimiento de dicho presupuesto, del cual se puede derivar en los casos mencionados y en aquellos otros en que se acredite un acto revestido de arbitrariedad, entendido como un acto que no se sustente en norma alguna que habilite la actuación, sino, por el contrario, en el capricho desnudo del servidor público autor del acto arbitrario.

En el caso bajo examen, el fallo recurrido se cimienta en la falta de motivación del auto encausatorio demandado en amparo, lo que ciertamente comporta o forma parte de la tutela judicial efectiva, en su faceta de derecho a una decisión judicial congruente fundada en derecho. El Código Judicial, establece en su artículo 199, ordinal 5º, como un deber de los jueces y magistrados, el motivar debidamente los autos y sentencias.

Tratándose de autos encausatorios, se establece en el artículo 2221 del Código Judicial, la forma o manera como ha de cumplirse dicho requisito. Expresa la norma en cuestión que la motivación del auto de proceder ha de contener una narración sucinta y fiel de los hechos que hubieren dado lugar a la investigación, con expresión de la forma como llegó dicho hecho a conocimiento del juez; el nombre completo del imputado y los apodos y sobrenombres con los cuales es conocido en el proceso, así como los datos que permitan su clara identificación, la competencia del juzgador, además del análisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y aquellos en que se funda la imputación del hecho, sin que se requiera, para que se entienda cumplido este requisito, un razonamiento pormenorizado y extenso de cada uno de los medios probatorios, sino que basta con una argumentación concisa que en cada caso estimen suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional.

Tales requisitos, vale decir, los entiende el Pleno comprendidos *grosso modo* en el auto de llamamiento a juicio censurado en amparo, en el cual, empero no aparecer razonados de una manera detallada y amplia los diversos medios de prueba en los que funda la conclusión del tribunal de la causa, lo que por si no causa lesión alguna al derecho fundamental examinado, si de la fundamentación misma emerge, como es en el caso, la existencia del delito imputado y la vinculación de los agentes o sindicados con

el mismo. De forma tal que, a criterio del Pleno la forma concisa como se han dejado examinado los distintos medios de prueba en el Auto N° 418 de 19 de agosto de 2003, mediante el cual se llama a juicio a los señores ROBERTO URRIOA PORRAS, ALCIBÍADES CORTÉS CÓRDOBA y EDUARDO BARTUANO SÁEZ, no pugna con el derecho a obtener una decisión congruente fundada en derecho, garantía integrante de la tutela efectiva de los tribunales a que tienen derecho todos los justiciables.

Como consecuencia de lo anterior, debe la Corte revocar la decisión recurrida y, en su lugar, declarar no viable la acción de amparo propuesta por el señor ALCIBÍADES CORTÉS CÓRDOBA, por incumplir con los requisitos establecidos en la legislación procesal constitucional

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el 17 de septiembre de 2003, y en su lugar DECLARA NO VIABLE la acción de amparo propuesta por el señor ALCIBÍADES CORTÉS CÓRDOBA, por medio de apoderado judicial.

NOTIFÍQUESE.

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

JORGE FABREGA P -- CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS
CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- EMETERIO MILLER R. -
- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ --
GRACIELA J. DIXON C.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)